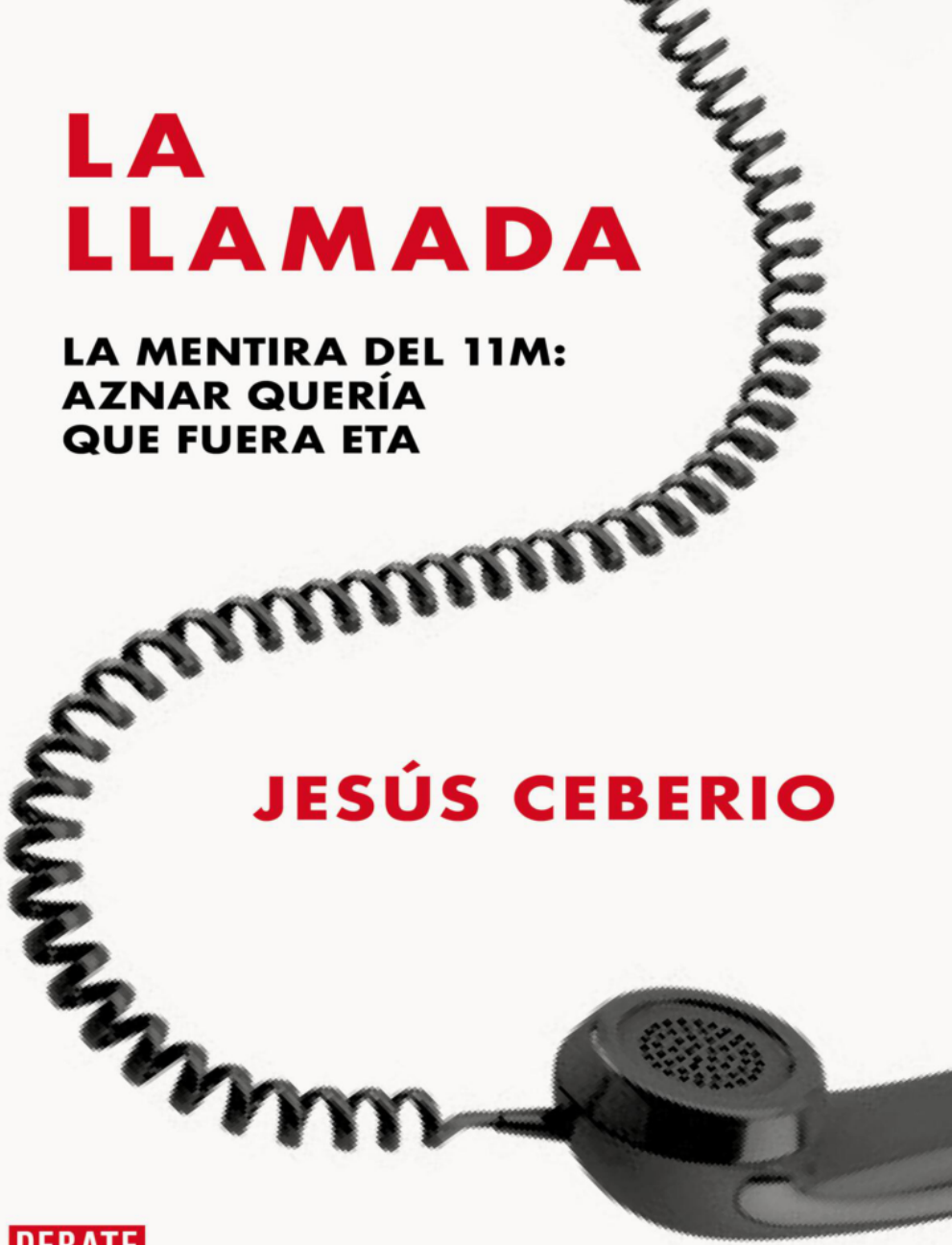
LA LLAMADA

LA MENTIRA DEL 11M: AZNAR QUERÍA QUE FUERA ETA

JESÚS CEBERIO



DEBATE

La llamada

La mentira del 11M: Aznar quería que fuera ETA

JESÚS CEBERIO

DEBATE

PRIMERA PARTE

El 11 de marzo de 2004 fue un jueves aciago en Madrid. Acababa de amanecer cuando retumbaron varias explosiones en un tren de cercanías que entraba en el andén de la estación de Atocha. Eran las 7.37 de una mañana casi primaveral. En menos de cinco minutos diez bombas reventaron cuatro trenes procedentes de Alcalá de Henares, con un efecto devastador que se traduciría en 191 muertos y más de 2.000 heridos. «Tengo la certeza de que ha sido ETA», fue el veredicto inapelable que el presidente Aznar me transmitió por teléfono a las 13.06. Veinte años después sigue sosteniendo que él era la diana de aquel atentado, que buscaba echar del poder a su partido y cuyos autores no vivían «en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas». Una perífrasis que señala a ETA en contra de la verdad judicial, que responsabilizó de la matanza a una célula yihadista, según sentencia firme del Tribunal Supremo dictada en julio de 2008.

Cuando estaba a punto de llegar a casa después de dejar a mi hija Cristina en el colegio Estudio en el que preparaba la selectividad, escuché que Iñaki Gabilondo informaba en la Cadena SER, poco antes de las ocho, de una explosión que se había producido en las vías de Atocha, a la que siguió minutos después otra deflagración en la estación de Santa Eugenia. Desde el centro de pantallas del ayuntamiento aconsejaban evitar la glorieta de Atocha.

En el boletín de las ocho, Severino Donate comparaba la imagen del tren con la de los autobuses israelíes destripados por bombas. Después de resumir los pocos datos disponibles, Gabilondo reflexionaba: «Parece que ETA está detrás de esto y parece que asoma en un momento como este con su lenguaje habitual, repugnante, de sangre, de miedo, de horror y de ira. A punto de iniciar ya el último tramo de la campaña electoral, en la que irrumpe una vez más violentamente ETA. Esa es al menos la impresión que en este momento tenemos». A las ocho y media confirmaba que había víctimas mortales: «Estamos hablando de una masacre, una auténtica carnicería…». Los testigos describían escenas aterradoras.

Llamé al director adjunto, José María Izquierdo, que ya estaba en su despacho. Los periodistas de *El País* se habían movilizado sin necesidad de recibir órdenes, unos a las estaciones para ver en directo el impacto de las bombas, otros a la redacción central para preparar la edición especial que acordamos sacar a la una de la tarde. Movilizamos incluso a los alumnos del máster de Periodismo, en el que estaba matriculada mi hija Mónica, convencida de que era un atentado islamista. Todos estábamos obsesionados con la pregunta de

quién había podido cometer aquella matanza. La cifra de muertos había subido a 131 al mediodía, a 170 a la una de la tarde, algo inabarcable incluso en un país habituado a la brutalidad del terrorismo. Era el mayor atentado de nuestra historia.

Los políticos coincidían en señalar públicamente a ETA, aunque en las llamadas que hice a lo largo de la mañana algunos apuntaron ciertas similitudes con atentados ejecutados por el terrorismo yihadista. Solo Arnaldo Otegi, máximo dirigente de una ilegalizada Batasuna, había rechazado cualquier vínculo de ETA con la matanza y apuntado hacia alguna de las marcas del fundamentalismo islamista. Nuestro delegado en el País Vasco, Ander Landaburu, se puso en contacto con los responsables de la lucha contra ETA en Francia. Sus fuentes eran muy solventes y en muchas ocasiones nos habían ayudado de manera extraordinaria. Su conclusión no admitía dudas: «No ha sido ETA. Tenemos controlados a los jefes de la organización y es imposible que haya cometido este atentado».

Me instalé en el despacho del director adjunto para seguir más de cerca el trabajo de una redacción que, en un clima de gran intensidad emocional, cerraba a toda máquina la edición especial. Poco antes de la una de la tarde llamé al secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timermans, para decirle que necesitábamos una versión oficial del atentado, puesto que no terminaba de producirse la conferencia de prensa del ministro del Interior, Ángel Acebes. Me anticipó que el Gobierno tenía la absoluta certeza de que había sido ETA, dadas las coincidencias con el patrón de algunos atentados que la policía había impedido en meses anteriores. Me dijo que en todo caso hablaría con el presidente. Habíamos cerrado provisionalmente la portada con el título «Matanza terrorista en Madrid», que un equipo de Antena 3 había grabado, pero empezamos a valorar un posible cambio por otro que terminaría diciendo «Matanza de ETA en Madrid».

A las 13.06 entró a través de la centralita una llamada de Timermans, que me pasó al presidente. Sin presentaciones ni preámbulos me dijo: «Tengo la certeza de que ha sido ETA». Describió los atentados que esa organización terrorista había planeado en meses anteriores y que las fuerzas policiales habían evitado. «En esta ocasión lamentablemente lo han conseguido». Desautorizó sin ninguna vacilación el desmentido de Otegi. Siempre tuve la sospecha de que tenían intervenido su teléfono y que por sus llamadas de esa mañana sabían que no tenía información directa. La conversación con Aznar duró menos de dos minutos y discurrió por el mismo raíl que las que mantuvo con otros cinco directores de periódicos de Madrid y Barcelona. En ellas sentó las bases de una gran mentira que ha mantenido durante veinte años.

El orgullo de las Azores

El 11M tuvo un efecto directo de 191 muertos (terminarían siendo 193) y más de 2.000 heridos. José María Aznar sigue creyendo que él y su Gobierno eran el objetivo marcado por una mente diabólica, que había elegido esa fecha para condicionar las elecciones que iban a celebrarse el domingo 14. Según confesión propia, fue el día más duro de su vida, peor que aquel 19 de abril de 1995 en el que ETA intentó asesinarlo haciendo estallar una bomba cuando su coche blindado circulaba por la calle madrileña de José Silva.

En 1996 había asumido el compromiso de no permanecer en la Moncloa más de dos mandatos y estaba a tres días de que se celebraran las elecciones generales que ponían término a su segunda legislatura, en la que gozó de una mayoría absoluta que le permitió desplegar a plenitud su proyecto político. Y nada hacía temer que su sucesor, Mariano Rajoy, designado por él mismo sin consultarlo con ningún órgano colegiado, no fuera a ganar los comicios convocados para el 14 de marzo. Unos meses antes había declarado en tono grandilocuente: «A mí no me echará mi partido, como a Thatcher; ni la corrupción, como a Felipe González. Yo saldré por la puerta grande».

Tenía cierta habilidad para activar lemas con gancho. Ya había acertado en 1994 con uno muy potente: «Váyase, señor González», que daría fruto en dos años. Otro no menos afortunado, aunque el tiempo lo revelaría del todo falso, fue aquel que proclamaba que «el PP es incompatible con la corrupción». Uno de sus preferidos después de instalarse en la Moncloa era «España va bien». Su estilo seco no conseguía ocultar un ego hipertrofiado que le había llevado a exclamar en una entrevista al *Financial Times* que el milagro de España era él. O a organizar el 5 de septiembre de 2002 la boda de su hija Ana en El Escorial, como si se tratara de unas nupcias reales, con los reyes como testigos excepcionales, aunque no demasiado felices en su papel, y una cohorte de invitados en la que figuraban Tony Blair, Silvio Berlusconi y los jefes de la operación Gürtel, que muchos años después pagarían en la cárcel sus negocios sucios con el PP.

En el epílogo del segundo tomo de sus memorias, publicado hace diez años, respondía a la cuestión de qué es el liderazgo en los siguientes términos: «Antes éramos nosotros quienes íbamos a ver a los demás para saber lo que teníamos que hacer, y ahora son los

demás los que vienen a vernos para saber qué es lo que tienen que hacer». Desde la derrota electoral de Helmut Kohl en Alemania, a finales de 1998, Aznar creyó que el PP se había convertido en la referencia europea del centro derecha, en el modelo a imitar para países como Alemania, Francia e Italia.

Daba por hecho que solo con exponer los logros de sus ocho años de gobierno le alcanzaba a Mariano Rajoy para ganar. Había conseguido pasar con cierta holgura el examen de ingreso en el euro, lo que por primera vez permitía a nuestro país incorporarse en su momento fundacional a la revolución monetaria que supuso para Europa. La privatización de las empresas públicas más rentables (Telefónica, Argentaria, Endesa, Repsol) le ayudó a cumplir los objetivos de deuda y déficit fijados para el euro y de paso instaló a sus amigos al frente de las grandes corporaciones, creando una red clientelar que se ha mantenido hasta tiempos recientes. Las estadísticas económicas, sobre todo en materia de paro y déficit, habían entrado en una senda virtuosa durante su primera legislatura y, tras un intento fallido de negociación con ETA, en la segunda estrechó el cerco a la banda terrorista con una batería de leyes consensuadas con el PSOE (pacto antiterrorista, ley de partidos, cumplimiento íntegro de penas) y una persecución policial implacable. La lucha contra el terrorismo era una de sus prioridades, que sintetizó en la frase «solo con la ley, pero con toda la ley».

Tenía el convencimiento íntimo de haber sido el mejor presidente de la democracia reconstruida y aun de todo el siglo xx. Para encontrar un antecedente comparable sus panegiristas tenían que remontarse a Antonio Cánovas del Castillo, el padre de la Restauración en la segunda mitad del siglo XIX. No en vano escribía en sus memorias que España estaba en «uno de los mejores momentos de su historia». En una entrevista concedida en mayo de 2013 a RTVE, en el segundo año del mandato de Rajoy con mayoría absoluta, declaró sin rubor: «Yo le di a mi sucesor la España más próspera que hemos conocido». Para añadir acto seguido que en ese momento (Europa no había superado aún la gran recesión) la nación vivía «una crisis política, institucional y económica con pocos precedentes y viene de una ruptura del pacto constitucional por parte de los nacionalismos y de parte de la izquierda». Cataluña había lanzado ya el desafío de la autodeterminación después del drástico recorte del Constitucional a su nuevo Estatuto y se empezaba a gestar la convocatoria de un referéndum unilateral. Aznar consideraba roto el pacto constituyente y ni siquiera descartaba su regreso a la política.

Su último año de gobierno estuvo marcado por una creciente rebelión popular ante su alineamiento sin fisuras junto a George W. Bush en el conflicto de Irak, aunque él consideraba un mérito personal

haber sentado a España junto a Estados Unidos en la gobernanza del mundo. Como prueba de que estaba en la senda correcta, en sus memorias cita repetidamente a Bill Clinton, para que en el imaginario popular no quede la aventura de Irak como un mero capricho derivado de su amistad con Bush. Ya en diciembre de 1998 había apoyado a Clinton en la operación Zorro del Desierto, consistente en cuatro días de bombardeo aéreo de las instalaciones militares de Irak por la expulsión de los inspectores de Naciones Unidas que rastreaban supuestos arsenales de armas de destrucción masiva. Tras su reelección en 1996 Clinton había sentenciado: «La fuerza no puede ser la primera respuesta, pero a veces es la única respuesta».

La llegada de Bush a la Casa Blanca en 2001 reforzó el encuadramiento de Aznar con Estados Unidos, especialmente después de los atentados del 11S contra las Torres Gemelas de Nueva York. Bush fijó las líneas generales de su estrategia contra Sadam Hussein en el discurso pronunciado ante la Asamblea de las Naciones Unidas el 12 de septiembre de 2002, en cuyas conclusiones estableció que Irak produce y usa armas de destrucción masiva (biológicas, químicas y misiles de largo alcance) en violación de las resoluciones de Naciones Unidas, y que para su adquisición había desviado fondos del programa Petróleo por Alimentos. Aznar menciona como de pasada en sus memorias que Bush le había llamado la víspera para informarle del contenido de su intervención: «Quería trabajar con las Naciones Unidas a partir de la constatación evidente del incumplimiento por parte de Sadam de las resoluciones que le afectaban». Añade que habló con Blair sobre esta estrategia de implicar a Naciones Unidas, que a juicio de ambos «era la correcta».

A propuesta de Estados Unidos y Reino Unido el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad, el 8 de noviembre de 2002, la resolución 1441, que conminaba a Sadam Hussein a presentar en el plazo de un mes una declaración exhaustiva de sus programas para el desarrollo de armas químicas, biológicas y nucleares. El embajador norteamericano, John Negroponte, anticipó que la resolución no contemplaba ningún automatismo en caso de violación, lo que obligaría a un nuevo debate. Este extremo sería reiterado por el embajador británico. Aznar entendía, sin embargo, que la resolución habilitaba por sí sola el uso de la fuerza, ya que «Irak estaba técnicamente en guerra», en una situación de alto el fuego tras el cese de hostilidades de 1991.

En el seno de la Unión Europea se estaba librando una batalla formidable: Francia y Alemania se oponían a una intervención militar en Irak mientras los inspectores de Naciones Unidas no certificaran la existencia de armas de destrucción masiva, y Reino Unido y España apoyaban la estrategia belicista de Bush en cualquier circunstancia.

Aznar consideraba que el verdadero motivo de la discrepancia era la pretensión franco-alemana, que lideraba Jacques Chirac, de «romper amarras con Estados Unidos e inaugurar una nueva concepción de la defensa de los países europeos [...] en la que España y otros países no tendríamos mucho que decir y en la que nuestros intereses quedarían supeditados al autoproclamado núcleo de la Europa europea».

Esa era, a juicio de Aznar, la verdadera razón de la discrepancia franco-alemana sobre Irak, y no el debate sobre las armas de destrucción masiva, que Sadam Hussein ya había utilizado contra su propia población kurda. Chirac tuvo gestos inaceptables de prepotencia, como cuando mandó callar a Polonia, Hungría y la República Checa por su condición de advenedizos, pero Aznar deja sin explicar por qué una alianza más estrecha con Estados Unidos le iba a proporcionar un margen de maniobra mayor que un acuerdo preferente con los vecinos europeos.

El liderazgo de España en los debates sobre Irak era a su juicio el resultado del protagonismo adquirido en la UE durante los últimos años. «En España seguía muy extendida la idea de que cualquier cosa que viniera de Europa era de por sí positiva y buena para España. Esto era probablemente la consecuencia de la transición y del importante papel desempeñado por Europa en nuestra apertura a la democracia y nuestra posterior consolidación económica». «Yo no estaba dispuesto a aceptar esa dinámica», enfatiza en sus memorias, y, cuando Francia y Alemania hicieron pública una nota sobre Irak sin consultar a los demás socios, dijo no. Y a petición del *Wall Street Journal* redactó un escrito de apoyo a Estados Unidos que terminarían suscribiendo dieciocho de los veinticinco miembros de la UE.

Ante el incumplimiento de los plazos impuestos por la resolución 1441, Aznar planteó la conveniencia de buscar una nueva resolución del Consejo de Seguridad que actuara, si llegaba el caso, como desencadenante de la acción militar. «El primer ministro británico, Tony Blair, y yo mismo aconsejamos esta iniciativa, no porque la considerásemos jurídicamente necesaria, sino porque parecía políticamente conveniente».

Bush invitó al matrimonio Aznar a compartir un fin de semana (21/22 de febrero) en su rancho de Crawford (Texas), donde analizaron el texto de una nueva resolución de Naciones Unidas que aumentara la presión sobre Sadam Hussein, pero finalmente no llegó a presentarse por el anuncio de que Francia se proponía vetarlo. En su lugar Bush, Blair y Aznar decidieron reunirse el 16 de marzo en el archipiélago de las Azores, a invitación del primer ministro portugués, José Manuel Durão Barroso, con el propósito de enviar al régimen de Sadam Hussein un ultimátum para que en 24 horas procediese a su desarme bajo amenaza de guerra.

Aznar describe que en la reunión analizaron los términos en que debían emplazar a Sadam Hussein para que abandonara el poder y, en previsión de una intervención militar que a esas alturas creían inevitable, abordaron el esfuerzo posterior de reconstrucción y el papel que debería desempeñar la ONU en esa fase. Tanto él como Blair eran conscientes «del precio político y personal» que estaban pagando por apoyar la intervención, pero «los dos coincidíamos en que mucho más grave que nuestro coste personal era el coste para Europa y para nuestros dos países de una ruptura de la relación atlántica».

Durante la cena, que no contó con la presencia de Blair porque había regresado a Londres para informar al Parlamento de Westminster, aún tendría tiempo de transmitir a Bush un mensaje de su nuevo amigo Muamar el Gadafi, que ante el cariz de los acontecimientos había decidido desactivar su propio programa de producción de armas químicas. Al hilo de esto se sigue preguntando por qué Sadam Hussein se negó a que los inspectores visitasen sus instalaciones militares si era cierto que no tenía tal armamento. «Hoy todo indica que Sadam había unido su suerte a que los demás creyeran que tenía esas armas, porque pensaba que de ese modo se aseguraba de que nunca se produciría una intervención contra él. Se equivocó, porque fue precisamente eso lo que hizo necesaria la intervención». De esta forma resuelve la falsa invocación de las armas de destrucción masiva como espoleta de una guerra que se desató el 20 de marzo.

Estaba convencido de que apoyar a Estados Unidos en esta encrucijada era algo positivo para España. «Nos convenía porque el enemigo contra el que luchábamos era el mismo, el que más daño nos había hecho y seguía haciendo a los españoles: el terrorismo. Y porque nos permitía participar e influir en las grandes decisiones estratégicas que se toman en el mundo». Esto le llevaría a la conclusión de que «la cumbre de las Azores marcó el punto más alto de la relevancia internacional de España». Aznar no se plantea ninguna duda sobre su legitimidad para firmar un ultimátum que en el derecho internacional tiene la misma calificación que una declaración de guerra. El artículo 63.3 de la Constitución Española establece que es el rey quien tiene la competencia de declarar la guerra previa aprobación de las Cortes.

En sus memorias admite que este alineamiento con Bush sobre la guerra de Irak elevó la tensión política a un nivel que tenía pocos precedentes en la historia democrática, lo que atribuye exclusivamente a que el PSOE había decidido utilizarlo como arma contra el Gobierno del PP. Reitera que las tropas españolas no participaron en la guerra, sino en las tareas posteriores de estabilización, y rechaza de plano que se tratara de una guerra ilegal. No dedica un solo párrafo a las manifestaciones masivas que sacaron a la calle a cientos de miles de ciudadanos y que acabarían teniendo un

alto coste electoral para el PP.

El 25 de mayo se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, nueve días después de la cadena de atentados de Casablanca, que se habían iniciado con un ataque de terroristas suicidas en el restaurante de la Casa de España, donde murieron 23 comensales y empleados. El PP venía de la mayoría absoluta conseguida por Aznar en las generales del año 2000. Tres años después el PSOE le superaba en poco más de cien mil votos, aunque el PP consiguió salvar la cara al obtener casi cuatrocientos concejales más en todo el territorio español. Suficiente para que Aznar lo registrara en sus memorias bajo el epígrafe «victoria en las urnas», lo que le permitió desechar una posibilidad que había llegado a manejar: «Si las elecciones salían muy mal y la estabilidad del partido se veía seriamente comprometida, revisaría mi decisión de no repetir en las siguientes elecciones generales. Afortunadamente no lo tuve que hacer».

Pero, llegados a esas vísperas electorales en marzo de 2004, Aznar estaba furioso con el desarrollo de la campaña electoral de Rajoy y el papel marginal que le habían asignado. Después de un largo fin de semana sin salir a escena, dio su primer mitin el lunes 1 de marzo en Tomelloso (Ciudad Real). «Ahí es donde me ha enviado el *mando*. Voy a gusto, aunque hay gente que no entiende nada. Digo que no quiero homenajes, quiero mayorías».

Al día siguiente (martes 2) citó a almorzar en la Moncloa a Rajoy, Gabriel Elorriaga (responsable de la campaña), Pedro Arriola (gurú demoscópico del PP, asignado al equipo del candidato) y Carlos Aragonés (jefe de gabinete del presidente). «Les digo sin contemplaciones lo que pienso. No me dejo nada». En sus notas registra que Rajoy responde con inteligencia y sensatez, Arriola se ve obligado a dar explicaciones, a Elorriaga le replica que no le cuente lo que él (Aznar) ha hecho y Aragonés se queda literalmente mudo. «Espero que esto sirva de reacción, que hace falta».

«Estoy preocupado por cómo van las cosas —escribe en su diario el sábado 6 de marzo—. Creo que perdemos gas». Entre los temas de campaña echaba en falta una mayor explicación sobre los logros de su Gobierno, creía que se hablaba poco de economía y de la necesidad de repetir la mayoría absoluta de su segundo mandato. Se quejaba de que en Cataluña literalmente no se hacía nada y de que el partido se había quedado sin mensaje. Concluye que «el tono general es bajo» y se lamenta de que no le hayan pedido ir al País Vasco ni a Cataluña, ni prácticamente a ningún sitio. «¿Habrán sido tan malos los ochos años?», escribe en un ejercicio de falsa modestia.

El lunes 8, a seis días de las elecciones, anota que el teléfono no ha sonado ni una vez en toda la mañana. «Así es esto. Hoy comienza la

recta final de la campaña. La impresión es que vamos hacia abajo. Creo que las cosas no van bien y me muerdo los puños pasando las horas aquí dentro». En el último día hábil para publicar encuestas, los principales medios adjudican a Rajoy una ventaja media de 5,5 puntos sobre Zapatero, la mitad de la que tenía al comienzo de la campaña. La preocupación de Aznar está bien fundada, pero a las seis y media del jueves 11, la hora a la que suele levantarse, vive dentro de una burbuja en la que considera impensable una derrota de su candidato, al que ha dejado la mejor herencia que se pueda soñar. Una hora más tarde (a las 7.37) el mundo se le viene encima cuando estallan las primeras bombas en el tren de cercanías que entra en la estación de Atocha procedente de Alcalá de Henares.

Atocha, zona cero

Luis Garrudo era portero de una urbanización de Alcalá de Henares situada en la calle del Infantado, 5. A primera hora de la mañana, aún de noche a estas alturas de marzo, acostumbraba a pasar por la cercana estación de Renfe para recoger el paquete de prensa gratuita. Amanecería media hora más tarde, pero se anunciaba un buen día que ya presagiaba la primavera. Tal vez por eso le llamó la atención la presencia de tres jóvenes con pasamontañas junto a una furgoneta Renault Kangoo. Más tarde pensó que podían tener rasgos árabes. Llevaban mochilas o bolsas de deportes.

Sin darle mayor importancia siguió a lo suyo, hasta que oyó por la radio que se habían producido varias explosiones en el tren de cercanías que entraba en Atocha procedente de Alcalá de Henares. Preocupado, le contó lo que había visto al presidente de la comunidad, quien lo puso en conocimiento de la policía. Garrudo fue citado para hacer una declaración formal que consta entre los cientos de miles de folios acumulados en el sumario que instruyó la Audiencia Nacional.

La primera explosión se registró a las 7.37 en el tren que hacía su entrada en la estación de Atocha. En menos de cinco minutos estallaron otras bombas en sendos trenes estacionados en Santa Eugenia y El Pozo del Tío Raimundo y en otro que circulaba por las vías paralelas a la calle Téllez, a unos 500 metros de los andenes de Atocha, donde hubiera podido producir una hecatombe adicional entre los equipos médicos y de seguridad que atendían de urgencia a las víctimas del primer convoy. Las investigaciones policiales llegarían a la conclusión de que el propósito de los terroristas era que las explosiones se produjeran de forma casi simultánea. Veinte años después las imágenes de Atocha siguen provocando escalofríos.

Pasó un cuarto de hora hasta que Iñaki Gabilondo empezó a informar en la Cadena SER sobre el infierno de Atocha, con datos imprecisos al principio pero que muy pronto empezaron a presagiar una gran tragedia: primero fueron decenas de muertos, más de un centenar al mediodía. Las bombas habían actuado como una trituradora de hierro y carne humana. En los cuatro trenes se habían colocado trece bombas en otras tantas bolsas, de las que detonaron diez.

Según el recuento publicado por la historiadora Mercedes Cabrera, en el tren de Atocha murieron 34 personas; en el de la calle Téllez, 63;

en El Pozo, 65; en Santa Eugenia, 14, y en diversos hospitales, 15. El balance final fue de 191 muertos, a los que se añadiría un geo fallecido en Leganés el 3 de abril, durante el asalto al piso en el que se inmolaron siete de los autores materiales del 11M, y un herido que murió tras sobrevivir diez años en estado de coma.

Guardia Civil y CNI (Centro Nacional de Inteligencia) habían alardeado de que ETA era una organización que tenían infiltrada con topos y sistemas de escucha electrónica. Es fácil imaginar que las fuerzas de seguridad activaron esa mañana todos sus recursos para tratar de identificar a los autores de la matanza. La Guardia Civil controlaba, entre otros, el domicilio de San Juan de Luz donde vivía el jefe logístico de ETA con su pareja, alguien que tendría que estar informado de un atentado de esas dimensiones, en cuya ejecución habría participado al menos una quincena de terroristas.

El teniente coronel de la Guardia Civil que estaba al mando de las operaciones contra el terrorismo etarra, Manuel Sánchez Corbí, que en 1997 había dirigido el equipo que liberó a Ortega Lara en su zulo de Mondragón, me admitió en una entrevista que los micrófonos de aquella casa apenas registraban breves comentarios de estupor en medio de un silencio espeso. Nada que permitiera sospechar que ETA hubiera llevado a cabo el mayor atentado de su historia. La dirección de la Guardia Civil recibió antes del mediodía un informe en este sentido.

El jefe de los Tédax (desactivadores de explosivos), Juan Jesús Sánchez Manzano, editó un libro sobre las bombas del 11M en el que sostiene que, a eso de las diez de la mañana, ya había descartado que el explosivo fuera Titadyn, que es de color rojizo, puesto que el material encontrado en dos bolsas que no habían llegado a estallar, una en Atocha y otra en El Pozo del Tío Raimundo, era blanquecino. Habían intentado desmontarlas para realizar un análisis preciso, pero finalmente tuvieron que desistir y las hicieron explosionar por el riesgo que suponía su desactivación.

A todo esto la furgoneta Renault Kangoo había sido sometida a una primera inspección canina y visual desde el exterior, por el peligro de que pudiera esconder alguna bomba trampa, muy habitual en el libro de instrucciones de ETA. Ante la ausencia de hallazgos significativos, se precintó el vehículo, que como luego se verificó había sido robado a finales de febrero en el barrio madrileño de Tetuán, que cuenta con una nutrida población de origen marroquí, aunque no se había doblado su matrícula en contra de la práctica habitual de ETA. A primera hora de la tarde fue trasladado a la dirección de la policía científica en el distrito de Canillas, donde entró después de las tres.

Todos señalan a ETA

La atribución del atentado a ETA tuvo muchos padres políticos, aunque solo uno, José María Aznar, tenía recursos para rastrear la autoría más allá de la simple especulación, además de los informes previos de inteligencia que advertían del peligro de un atentado yihadista. Casualmente el más madrugador fue el candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que ese día estaba citado en los *Desayunos de TVE* y declaró hacia las 8.50 que ETA había intentado intervenir en la campaña y que la respuesta debía venir a través de una votación masiva el domingo. «Espero que el Gobierno informe a todos los partidos», añadió. Aznar le llamó hacia las diez de la mañana. «Me dijo que creía que era ETA, pero tampoco de forma muy rotunda». *El País* había abierto su primera página ese día con una entrevista que me había concedido Rodríguez Zapatero en la que proclamaba que los españoles merecían un Gobierno que practicara el diálogo y la transparencia: «No más mentiras», añadía en referencia a las razones invocadas por Aznar para participar en la guerra de Irak.

El mensaje más duro lo emitió el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que a eso de las nueve y media calificó a los autores de alimañas. «Quiero trasladar a la sociedad vasca, pero también a la sociedad española, que ETA está escribiendo sus últimas páginas». En el imaginario político se atribuye al Gobierno vasco un conocimiento preciso del mundo etarra, por lo que las palabras de Ibarretxe indujeron a otros líderes políticos a seguir de buena fe esa misma senda: Llamazares (IU), Duran i Lleida (CiU) o Carod Rovira (ERC), que lo hizo con una frase contundente: «Ningún proyecto político se puede construir sobre cadáveres». La declaración de Pasqual Maragall tenía resonancias kennedyanas: «Hoy todos somos madrileños». El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, hizo un llamamiento a la unidad para acabar con ETA.

A Zapatero le sorprendió la rotundidad de la intervención de Ibarretxe. Años después me dijo que en su conversación con Aznar le había sugerido que hiciera una reunión de todos los partidos. «Lo despachó diciéndome que el Gobierno ya había tomado sus decisiones y que había convocado una manifestación para el día siguiente. El que quiera ir que vaya, añadió. Hablé con Rajoy para que le llamara, pero me dijo que estaba intratable». Su primera duda la tuvo a eso de las cinco de la tarde por una llamada de Miguel Sebastián. «Me dijo que

alguien de Wall Street le había advertido de que allí todo el mundo sostenía que habían sido los islamistas». La policía seguía dándole vueltas a la falta de aviso previo, que solía ser una práctica habitual de ETA en este tipo de atentados indiscriminados.

Muchos años después Rajoy le reconocería a Zapatero que si se hubiera hecho una reunión de todos los partidos, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Incluso lo admitiría en voz baja Eduardo Zaplana, escudero mayor y portavoz de Aznar en aquellos días.

A las diez de la mañana el número oficial de muertos ya rondaba los 70. En Atocha coincidieron Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Francisco Álvarez-Cascos… Hasta que un perro descubrió una mochila que no había detonado y los mandos policiales ordenaron un desalojo general por el temor de que pudiera ser una trampa. Las sirenas de las ambulancias y los bomberos eran ya la sintonía dominante.

En este panorama de señalamiento general a ETA solo hubo una excepción: Arnaldo Otegi, máximo dirigente de una Batasuna ilegalizada por el Tribunal Supremo en aplicación de la ley de partidos políticos de 2002. Compareció hacia las diez y media para negar que ETA estuviera detrás del atentado: «La izquierda abertzale no considera ni como mera hipótesis que ETA tenga nada que ver con lo ocurrido hoy en Madrid». Otegi apuntó a esa hora temprana hacia algún sector de la resistencia árabe. Quince años después, en una entrevista realizada para este libro, rechazó responderme si tenía datos concretos o pretendía solo atemperar el primer y fortísimo impacto negativo en el mundo abertzale. En la comisión parlamentaria Acebes aseguró que Otegi no tenía ninguna información al respecto, lo que sugería que su teléfono podía estar intervenido. Nunca pudo aclararse este extremo porque el Gobierno no incluyó el número de su móvil entre los que desclasificó días después.

En su diario del 11M Aznar escribe: «Todo apunta a ETA; es lógico. Interior y el CNI apuntan a ETA: sabíamos que querían intervenir en la campaña». Y menciona como indicios con valor probatorio la reciente detención en Cuenca de una furgoneta con más de 500 kilos de explosivos que pretendían hacer estallar al este de Madrid, y el fallido intento de explosionar unas maletas-bomba en la estación de Chamartín en la última Nochebuena. No tenía pruebas materiales, pero tampoco dudas. Y anotó: «Como me ocurre siempre en situaciones límite, me invade una gran serenidad: sé lo que hay que hacer». De un manotazo sacó a Rajoy del escenario con la orden de cancelar todos los actos de campaña, que tuvo un seguimiento gregario de todos los demás partidos, y asumió la gestión integral de la crisis. Como el torero que despeja la plaza y pide a su cuadrilla que le deje solo en la arena.

Uno de los primeros políticos en acercarse a Atocha fue el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), al que había informado muy a primera hora su concejal de Seguridad, Pedro Calvo, que a su vez había sido alertado por Interior: «Alcalde, ha habido una explosión en un tren, no sé en qué punto exacto, pero es en una línea que llega a Atocha». Desde su casa en la plaza de Santa Bárbara decidió ir directamente a la terminal ferroviaria. Es un recorrido corto. Calvo le siguió informando: «Creo que esto es terrible, puede haber más de cinco muertos». Desde el coche habló con Aznar y Acebes. Más allá del horror inicial había muy poca información.

Ruiz-Gallardón había sido testigo de las secuelas de múltiples atentados terroristas cometidos por ETA en Madrid. «Siempre que había un atentado me personaba, primero como presidente de la Comunidad, luego como alcalde —me dijo en una larga conversación que mantuvimos para este libro—. Ya sé que no sirves para nada, pero lo tienes que hacer. Había visto muchos muertos, lo que nunca había visto era morir a gente. Y lo vi en Atocha. Los equipos del Samur estaban totalmente desbordados». Cuando uno de ellos preguntó qué podía hacer con una persona moribunda que tenía al lado, le dijeron: «Ayúdale a morir».

Mientras se encontraba en Atocha le llamó el juez Baltasar Garzón. «Imaginé que estaba de guardia, pero me dijo que no, que le tocaba a Juan del Olmo, y que llamaba para que le diéramos el mismo apoyo que siempre le habíamos dado a él. Por supuesto, le dije que estaba a disposición del juez instructor».

«En un determinado momento me salió espontáneamente "qué hijos de puta estos de ETA", a lo que me respondió que no había sido ETA. No recuerdo la hora, pero debía de ser entre nueve y nueve y media. "Y ¿quién ha sido?", le pregunté. "No lo sé, pero sé que no ha sido ETA. Pueden poner una bomba, pero no tienen comandos operativos para hacer una masacre de estas dimensiones"». Cuenta Gallardón que tiempo después le explicaría que ETA avisaba siempre, no por afán humanitario, sino porque así derivaba en parte la responsabilidad hacia la policía por no haber actuado con la diligencia debida y, de paso, si estallaba la bomba al tratar de desactivarla, mataba dos pájaros de un tiro. Josu Ternera lo confirmó recientemente cuando responsabilizó al Estado del atentado de Hipercor, que causó 21 muertos, por no haber desalojado a tiempo el centro comercial.

Garzón fue uno de los pocos que a esa hora temprana negó la autoría de ETA frente a políticos y comentaristas de medios que seguían la senda trazada por Ibarretxe, quien había llamado también a Gallardón para expresarle que sentía «asco y vergüenza de que unos ciudadanos vascos hayan podido hacer este daño en Madrid». Hacia las once y media Fernando Vallespín decía en la Cadena SER: «El 11M

es nuestro 11S». Y esta intuición le llevaría a concluir que se habría producido una especie de *alqaedización* de ETA. Muchos observaban ya las semejanzas que había con el patrón de algunos atentados cometidos por Al Qaeda, pero de momento se atenían a una teoría que, a falta de comparecencia oficial del Gobierno, se terminó imponiendo por capilaridad, inoculada desde instancias gubernamentales. Al mediodía el cómputo oficial de muertos llegaba a 131, que en menos de una hora se convirtieron en 173.

La precoz clarividencia de Garzón casaba mal con el contradictorio testimonio que prestó meses más tarde en el sumario de la Audiencia Nacional, donde declaró que un tédax le había comentado que el explosivo utilizado era Titadyn, argumento capital para que Interior lo atribuyese a ETA. Le sonaba la cara del artificiero por haberlo visto en algún otro escenario de atentado, pero nunca terminó de identificarlo. En su libro sobre las bombas del 11M Sánchez Manzano considera sumamente dudosa esta versión atribuida a uno de sus agentes, porque desde primera hora habían descartado que el explosivo activado en los trenes, de color blancuzco, fuera el Titadyn que habitualmente utilizaba ETA, de tono rojizo. Y además había ordenado como norma general que el cuerpo de artificieros se pronunciara solo por escrito.

El director del CNI, Jorge Dezcallar, también estaba convencido de la autoría de ETA. En una extensa entrevista me aseguró: «Mentiría si dijera otra cosa. Hablé con muchos colegas de otros países y todos pensaban lo mismo en esas horas primeras. ETA había matado a diez personas mientras yo dirigía el CNI, se había interceptado en Cuenca la furgoneta cargada de explosivos, y creo que fue Josu Ternera a quien le habían oído decir que iban a amargar la salida de Aznar, al que odiaban por muchas razones. Les había combatido a sangre y fuego y lo que hizo fue definitivo para el final de ETA. Con lo que sabíamos del atentado que habían ideado en Baqueira Beret, las mochilas de los trenes que iban a Chamartín y la furgoneta de Cuenca, era la hipótesis más plausible. Lo que preocupaba a mi gente era cómo ETA podía habernos colado a más de diez terroristas. A uno o dos, puede, pero ¿a tantos?».

«Lo que me llega esa mañana —añade— es que entre ellos comentan cómo podían haber cometido semejante barbaridad. Uno decía: "¿Cómo voy a mi pueblo y explico esto?". Es verdad que salió Otegi a negarlo, pero fue el único». El CNI puso a trabajar por separado a dos equipos de especialistas, uno en ETA y otro en terrorismo islamista. A las 15.51 elevó al Gobierno un informe en el que atribuía a la banda terrorista la responsabilidad del atentado a la luz de «los elementos que tenemos en este momento». Tiempo después la ministra de Exteriores, Ana Palacio, publicaría un artículo en el que venía a decir que una conversación con Dezcallar esa mañana había

sido determinante para que a eso de las cinco y media de la tarde enviara un telegrama a los embajadores españoles instándoles a utilizar todos sus recursos para atribuir a ETA la autoría.

Dezcallar admite que esa mañana habló con Ana Palacio, a la que transmitió informalmente lo que pensaba, que por lo demás coincidía con lo que a esa hora sostenía todo el mundo, pero el informe oficial del CNI no se cerraría hasta horas después. Javier Solana me aseguró que a las diez de la mañana del día 11 ya tenía indicios firmes de que los autores del atentado eran islamistas. En su condición de Míster PESC (alto representante de la Unión Europea para la política exterior común de seguridad y defensa) tenía estrecho contacto con los servicios de inteligencia occidentales, principalmente de Estados Unidos, a los que había frecuentado desde su cargo anterior de secretario general de la OTAN.

El ministro francés de Economía le diría a Rato, en la reunión del Ecofin que se celebró una semana después del atentado, que a las cinco de la tarde del día 11 ya sabía que los autores eran yihadistas. Podía ser un farol, pero años después el entonces vicepresidente primero seguía preguntándose qué le habrían dicho los americanos a Aznar: «En Marruecos no se movía una hoja sin que lo supieran. Y nuestra relación con ellos era muy estrecha, éramos el principal aliado político de Bush después de Blair». La colaboración de los norteamericanos, concretamente del secretario de Estado, Colin Powell, había sido fundamental para superar la crisis del islote de Perejil con Rabat, en julio de 2002.

Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo y desde septiembre de 2003 portavoz del Gobierno, estaba en Valencia para el cierre de la campaña electoral. Me confesó que no había dormido mucho cuando le llamó Aznar, poco después de las ocho de la mañana, y tras preguntarle dónde estaba le ordenó con su laconismo militar que se viniera de inmediato a Madrid, sin darle más detalles. Zaplana sospechó que había ocurrido algo grave y habló con Acebes para averiguar qué estaba pasando. «Ha habido un atentado». «¿Gordo, con muertos?». «Sí, más de diez». La información a esa hora seguía siendo muy imprecisa. «Cuando llego a la Moncloa —me dice—, pasadas las once, encuentro a la gente hundida. Para el presidente no es agradable despedirse con doscientos cadáveres, ni para el ministro del Interior».

Acebes recorrió el escenario del atentado y se recluyó en el cercano Ministerio de Agricultura cuando los desactivadores de explosivos desalojaron la estación ante el temor de que pudiera producirse una nueva explosión. Desde allí convocó a las once en Interior una primera reunión de los responsables políticos de los servicios de emergencia para organizar la atención médica a los heridos (que superarían la cifra de 2.000), el traslado e identificación de los fallecidos y la ayuda

psicológica a los familiares.

Tras una declaración muy genérica sin atribuir la autoría a ninguna organización, en la que pidió serenidad y garantizó que el Estado de derecho daría una respuesta adecuada, se desplazó a su ministerio para presidir el comité asistencial, en el que participaron entre otros Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tomó decisiones de carácter urgente, como la de concentrar en Ifema (recinto ferial de Madrid) la identificación de los fallecidos y la asistencia psicológica a los familiares. El alcalde de Madrid asumió la responsabilidad de improvisar una gran morgue en la planta baja del pabellón 6, donde se centralizaron las autopsias. En algunas bolsas solo había restos corporales cuya identidad exigiría análisis de ADN. En la planta superior se creó un centro de asistencia psicológica a los familiares.

Uno de los dos conductores de Gallardón tuvo que identificar allí a su hermana, que viajaba a diario en ese tren y con la que había intentado ponerse en contacto por teléfono. Nadie de los que aquel día visitaron ese pabellón ha podido olvidar el timbre de los móviles repicando dentro de las bolsas de plástico que guardaban los cadáveres. Llamadas desesperadas de personas que no tenían noticias de sus familiares. «Ifema fue lo peor —me confiesa Ruiz-Gallardón—. Aparte de identificar a los fallecidos había que atender a los familiares, que ignoraban qué había sido de sus parientes, si estaban ingresados en algún centro hospitalario o en las bolsas de plástico de la planta baja, que en su mayoría estaban aún por identificar. Hubo que organizar dos equipos de psicólogos, uno que atendía a los que esperaban noticias con ansiedad y otro que se ocupaba de consolar a los que sabían ya de la pérdida irreparable de un familiar».

Acebes citó luego a los responsables de la lucha antiterrorista de la Policía y la Guardia Civil en el despacho del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, que se hizo cargo del comité cuya tarea principal consistía en rastrear pruebas sobre los autores de los atentados y poner en marcha su búsqueda. Acto seguido se trasladó a la Moncloa, donde Aznar ya presidía un gabinete de crisis a su medida.

En el trayecto a la Moncloa Zaplana aprovechó el tiempo para ocupar el dial de la radio con declaraciones que ya señalaban a ETA, siguiendo la pauta que marcaba Interior pero que el propio Acebes había evitado concretar. Fue el primer miembro del Gobierno que habló inequívocamente de la organización terrorista vasca. También lo hizo el ministro de Justicia, José María Michavila. «Nuestro error —admite hoy Zaplana— fue no convocar a todas las fuerzas políticas, pero los informes que le daban a Acebes los jefes de la policía y la Guardia Civil eran tan inequívocos apuntando a ETA…».

La reunión de la Moncloa empezó después de las doce en la sala de maitines, junto al patio de columnas, donde Aznar solía reunir cada lunes a su equipo más cercano de colaboradores. Asistieron el vicepresidente Rodrigo Rato, Javier Arenas (que había sustituido a Rajoy como vicepresidente segundo), Eduardo Zaplana, Ángel Acebes (que se incorporó más tarde), Javier Zarzalejos (secretario general de la Presidencia) y Alfredo Timermans (secretario de Estado de Comunicación). Un equipo que en líneas generales estaba más vinculado a la gestión política e informativa del atentado que a la meramente policial, aunque Acebes estaba en contacto permanente con Astarloa, que seguía reunido con los jefes de los cuerpos de seguridad.

No habían sido convocados los ministros de Exteriores y Defensa, que forman parte de la comisión delegada del gabinete de crisis, que se había reunido en su formato oficial después de los atentados del 11S en Nueva York, el hundimiento del *Prestige*, el conflicto del islote de Perejil y el comienzo de la guerra de Irak. Aznar lo justificaría más adelante diciendo que prefería que cada uno trabajara en su propio ministerio. No mencionó que el gabinete de crisis exige levantar acta de sus reuniones, mientras que del comité *ad hoc* convocado por él no quedó ningún registro, porque el departamento de presidencia ordenó un borrado masivo de sus ordenadores antes de proceder al traspaso de poderes.

Rodrigo Rato recuerda, en una entrevista reciente para este libro, que la reunión no tuvo un carácter muy formal. La gente entraba y salía, Aznar incluido. «Yo salí de la sala a petición del presidente para atender una llamada de Rodríguez Ibarra (presidente socialista de Extremadura), que quería transmitir su deseo de participar en una respuesta conjunta. Le dije que estábamos en contacto con la dirección de su partido en Madrid. Durante el tiempo que permanecí en la sala no tengo memoria de que nadie presentara un análisis exhaustivo y pormenorizado del atentado y sus posibles autores».

Todos los asistentes recordaban recientes acciones de ETA que guardaban algunas semejanzas con lo ocurrido en Atocha y, por tanto, ni siquiera era necesario abundar en su autoría, que de probable se convirtió en incuestionable. En definitiva, nadie puso seriamente en duda que fuera ETA. Entre otras cosas, porque los estrategas políticos del partido querían que fuera ETA.

Los precedentes que se invocaron repetidamente en esas horas y en días sucesivos fueron básicamente cuatro: la detención a finales de 2002 de un comando en Collado Villalba (Madrid), cuya misión consistía en sembrar de bombas diversos centros comerciales de la capital; la detección en San Sebastián, en la Nochebuena de 2003, de dos maletas en el Intercity Irún-Madrid que pretendían detonar a su

llegada a la estación de Chamartín; el plan de sembrar de mochilas-bomba las inmediaciones de la estación de esquí de Baqueira Beret (Lleida) en torno a la Nochevieja de ese mismo año, que decidieron suspender por el mal tiempo y por el despliegue de seguridad; y, por último, la detención de una furgoneta el 29 de febrero en Cañaveras (Cuenca), cargada con 536 kilos de explosivos, que se proponían hacer estallar en la zona este de Madrid.

Algunos responsables de la lucha antiterrorista tenían, sin embargo, bastantes dudas debido a que algunas pautas no concordaban con las de ETA: la ausencia de aviso previo, el uso de una furgoneta robada con su matrícula real y la movilización simultánea de una quincena de terroristas en Madrid, algo que siempre habían evitado por el elevado riesgo de ser detectados, y que guardaba cierto paralelismo con lo ocurrido en los atentados de las Torres Gemelas o el de Casablanca, ambos con el sello de Al Qaeda o alguna de sus franquicias.

La llamada

A lo largo de esa mañana del 11 de marzo *El País* había anunciado en la Cadena SER que iba a publicar una edición especial a la una de la tarde. Unos minutos antes de la hora de cierre prevista llamé al secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timermans, para informarle de que estábamos a punto de cerrar esa edición y que necesitábamos una versión oficial, dado que no terminaba de producirse la tan anunciada conferencia de prensa de Acebes. A las 12.59 (hora registrada en la central telefónica) me informó de que el Gobierno tenía la absoluta seguridad de que ETA era la autora del atentado y que así lo anunciaría en breves minutos el ministro del Interior. Como base acusatoria citó los dos detenidos en la Nochebuena última en el tren de San Sebastián y la muy reciente captura de la furgoneta en Cañaveras (Cuenca). Mencionó también un informe de los servicios de inteligencia (todavía no emitido) y desautorizó con rotundidad el desmentido de Otegi.

A la luz de esta conversación y en previsión de la inminente comparecencia de Acebes, comenté con el director adjunto, José María Izquierdo, cuyo despacho había ocupado en el centro de la redacción, la conveniencia de cambiar la primera página, que habíamos cerrado provisionalmente con el título «Matanza terrorista en Madrid» y que había sido filmada unos minutos antes por un equipo de Antena 3, fácil de rastrear hoy en Google. De hecho fue el titular que citaría la Cadena SER a las 14.00 horas en su informativo.

Unos minutos después entró por centralita una nueva llamada de Timermans, que me pasó a Aznar. Era la primera que recibía del presidente en sus ocho años de mandato, aunque le había entrevistado en dos ocasiones: en enero de 1996, semanas antes de las elecciones que ganó a Felipe González, y en octubre de 1998, semanas después del anuncio de una tregua por parte de ETA, a la que en aquella circunstancia denominó «Movimiento Vasco de Liberación».

Durante los catorce meses que duró la tregua, hasta el 28 de noviembre de 1999, había visto con cierta frecuencia al presidente porque con periodicidad mensual solía invitar a los directores de periódicos de Madrid y Barcelona (los mismos que entramos en la ronda de llamadas del 11M) a un almuerzo en el comedor de maitines, para hablar principalmente de terrorismo y también de su fantasioso proyecto de convertir al PP en el primer partido de Cataluña bajo el

liderazgo de Josep Piqué, a rebufo de la crisis que ya se anticipaba en CiU. A aquellos frugales almuerzos asistían también su portavoz, Piqué, y el secretario de Estado de Comunicación, Pedro Antonio Martín Marín.

La breve conversación con Aznar se produjo en el despacho del director adjunto. Me interesaba tener un testigo. La comunicación se estableció a las 13.06.45 (según el registro digital de la central telefónica) y duró un minuto y 51 segundos. Creo recordar que le saludé con un escueto «Hola, presidente». Él fue al grano y me transmitió su absoluta certeza de que había sido obra de ETA. Repitió casi literalmente los antecedentes que había mencionado Timermans unos minutos antes. «Lo han intentado en varias ocasiones y lamentablemente esta vez lo han conseguido».

La suya no era una deducción, ni la «hipótesis principal», como pretendió dos semanas después su ministro portavoz en nombre de Aznar, sino una acusación en toda regla que repetiría a otros tres directores de Madrid y dos de Barcelona, algunos de los cuales relataron sus respectivas conversaciones en idénticos términos: «absoluta certeza», «ten la seguridad», etcétera. En su brevísima conversación conmigo no esgrimió ninguna prueba material ni mencionó el término «Titadyn», que a la postre fue el embuste probatorio que invocaría para dar credibilidad a su acusación, a pesar de que los artificieros habían descartado desde media mañana el uso de este explosivo.

Lamentablemente no puedo ofrecer una versión textual de la conversación porque no la grabé, cosa que pudieron hacer los equipos de la Moncloa. Por desgracia, en los archivos de Presidencia no quedó ningún rastro relacionado con el 11M, según denunció José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión parlamentaria de investigación. Sería interesante que, al estilo de lo que sucedía en el despacho oval en tiempos de Nixon, quedasen grabadas todas las actuaciones del presidente en su oficina, incluidas las llamadas telefónicas, para que puedan ser sometidas en su caso a escrutinio judicial. Esas cintas, de las que se habían borrado algunos tramos, fueron determinantes en la investigación del caso Watergate contra el presidente Richard Nixon.

Tras enfatizar que el desmentido de Otegi no le merecía ningún crédito, yo le comenté que acababa de cambiar el título de primera página atribuyendo a ETA la autoría de la matanza. De ahí concluyó Aznar que mi decisión fue anterior a su llamada, algo que ha repetido hasta la saciedad tanto en la comisión parlamentaria de investigación como en múltiples entrevistas y en sus memorias, ocultando siempre que minutos antes su secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timermans, me había anticipado la certeza del Gobierno sobre la autoría de ETA.

Que la edición del diario llevara la data de la una de la tarde y que su llamada se produjera unos minutos después ha sido un argumento que considera definitivo para negar cualquier influencia del Gobierno en el cambio de titular. De hecho, la portada fue filmada a las 13.53 y los primeros ejemplares se imprimieron en la rotativa a las 14.28. Son las huellas indelebles que a cada paso deja la tecnología digital.

En cualquier caso, que yo cometiera un error profesional es algo que debía sustanciar con los lectores del diario y con la propia empresa. Lo trascendente para la nación era que el presidente, con las fuerzas de seguridad y el servicio de inteligencia a sus órdenes, con informes de los Tédax y la Guardia Civil que ya expresaban serias dudas esa misma mañana, se empecinara en atribuir el atentado a ETA sin tener una sola prueba material. Nadie sino él tenía los medios necesarios para determinar quién había cometido el mayor crimen de nuestra historia o, a falta de pruebas objetivas, admitir que aún no disponía de indicios materiales para establecer su autoría. Para defenderse de la acusación de mentir a la nación se amparaba en que otros dirigentes políticos o directores de periódicos se habían pronunciado antes que él, tratando de ocultar que desde Moncloa se había organizado una inmensa nube tóxica de desinformación que desde primeras horas había contaminado a casi todos.

Dos semanas después del atentado el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, me envió una carta que publiqué en *El País*, en la que decía:

> El Gobierno no ha mentido a nadie, ni ha tergiversado ni retrasado la información sobre la autoría de los atentados. De su periódico hemos aceptado todo tipo de críticas, incluso las injuriosas, pero lo que no vamos a consentir es que se siga diciendo que el presidente del Gobierno ocultó y manipuló información acerca de la masacre que ha costado la vida a doscientas personas. ¿Debemos creer que la conversación con el señor Aznar le forzó a incluir apresuradamente la palabra «ETA» en no menos de 20 ocasiones en su edición especial? Si los cambios sobrevenidos después de la conversación con el presidente se produjeron pasada la una de la tarde, ¿por qué dató a esa hora el cierre de esa edición?

Todas las investigaciones realizadas, en sede parlamentaria o judicial, han coincidido en que el Gobierno mintió, tergiversó y retrasó la información sobre la autoría, según le convino a su propósito de impedir que la opinión pública supiera antes de las elecciones que la matanza había sido obra del terrorismo yihadista. Y por lo que se refiere a las veinte citas de ETA en las páginas ya cerradas del periódico, Zaplana ocultó que se trataba de otras tantas atribuciones que distintos líderes políticos habían hecho a esa organización a lo largo de la mañana, siguiendo la línea trazada por fuentes próximas al Gobierno.

Respecto al intento manipulador de Aznar con sus llamadas, unos

caímos en la trampa y otros no. En repetidas ocasiones he reconocido, primero en las páginas del propio periódico, que el mayor error de mi vida profesional fue convertir el título inicial «Matanza terrorista en Madrid» por el que salió finalmente: «Matanza de ETA en Madrid». La primera reacción que recibí, bastante enojada, fue la de mi consejero delegado, Juan Luis Cebrián. Ante su pregunta de por qué había cambiado el titular que yo mismo le había anticipado, solo pude responderle que quien me lo había asegurado era el presidente. «Pues te ha engañado», dijo antes de cortar la comunicación.

Con más de treinta años de oficio, aún era lo bastante ingenuo para creer que el presidente no me iba a mentir acerca del mayor atentado terrorista habido en España. Una idea que compartía el director de *El Periódico de Cataluña*, Antonio Franco, como dejó escrito en un artículo. Los hechos me demostrarían que Aznar podía mentir con total convicción sobre cualquier asunto si con ello creía mejorar su propia imagen y las opciones electorales de su partido. Y podía repetir su rosario de embustes en seis conversaciones clónicas con otros tantos directores de periódicos. Y seguir mintiendo sobre su propia mentira en una espiral que dura ya veinte años. Tuve que admitir en la columna de la defensora del lector, Malén Aznárez, que no había cumplido una de las normas más elementales del oficio periodístico: contar al menos con dos fuentes no relacionadas entre sí.

El invento del Titadyn

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, mantenía en su despacho una reunión con los máximos jefes de la policía y la Guardia Civil para abrir una vía sólida de investigación que determinase la autoría del atentado. Averiguar el explosivo empleado era capital a este propósito. El subdirector general de la Policía Nacional, Pedro Díaz-Pintado, habló repetidas veces esa mañana con el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, que tenía bajo su mando a los Tédax y al que urgía para que le informara sobre ello.

El cruce de llamadas entre Díaz-Pintado y Cuadro fue objeto de especial atención tanto en la comisión parlamentaria de investigación como en la vista oral celebrada en 2007 en la Audiencia Nacional. De ese intercambio telefónico habría surgido el término «Titadyn», que fue la base invocada por el Gobierno para apuntar definitivamente hacia ETA, que utilizaba ese explosivo en sus atentados desde hacía años, después de dos grandes robos realizados en almacenes del sur de Francia.

Cuadro había llegado a Atocha poco después de las ocho de la mañana y ya de camino había llamado a su superior jerárquico Pedro Díaz-Pintado, subdirector general operativo de la Policía Nacional. De Atocha se trasladó a El Pozo del Tío Raimundo, adonde llegó hacia las diez de la mañana. Habían encontrado en los andenes una mochila intacta que contenía una bolsa azul, de las que se usan para la basura, y de la que asomaban unos cables y un teléfono. A las diez y cuarto volvió a llamar a Díaz-Pintado para darle cuenta de este hecho. Los Tédax habían intentado desactivar la bomba, pero al no conseguirlo y dados los riesgos decidieron provocar su detonación. Hacia las once Díaz-Pintado le pidió que le enviara una nota escrita sobre esta incidencia, cosa que haría media hora más tarde, después de hablar con el jefe de los desactivadores de explosivos.

Poco después del mediodía Díaz-Pintado volvió a llamar para pedirle un informe urgente sobre el tipo de explosivo. En la comisión parlamentaria Cuadro declaró: «Le respondo que no puedo darle un informe fiable y le insisto con toda firmeza en la necesidad de no ir muy deprisa, porque las prisas nos pueden llevar a errores. Me insiste en que lo haga cuando tenga indicios».

En la reunión que tenía lugar a esas horas en Interior, en la que participaban nueve o diez altos jefes policiales, el secretario de Estado

de Seguridad presionaba a Díaz-Pintado para determinar el tipo de explosivo. Según el relato de Cuadro, los Tédax se inclinaban por que se había utilizado dinamita, posiblemente con cordón detonante, a la vista de los efectos de la deflagración y de los cráteres. «Sobre las 12.45 informo al subdirector operativo de que es dinamita, posiblemente con cordón detonante».

La versión de Pedro Díaz-Pintado difiere de forma radical. «Cuando está a punto de acabar la reunión me llama Cuadro y me dice que es Titadyn con cordón detonante». Cuadro niega que le hubiera dicho tal cosa. Díaz-Pintado transmitió a los reunidos, prácticamente todos los jefes policiales, que el explosivo era Titadyn. Astarloa llamó a su vez a Acebes para hacer partícipe al equipo de crisis de Aznar de una información que a esas horas resultaba clave para apuntalar la versión de ETA que venía acariciando el Gobierno.

La sentencia judicial nunca aclaró la tortuosa trayectoria que había seguido el afloramiento del término «Titadyn», que figura en múltiples referencias, a pesar de que ningún especialista lo hubiera mencionado. Es más, a las dos y media la jefa del laboratorio de los Tédax, diplomada química, llegó a la conclusión de que los restos de la bomba de El Pozo confirmaban la presencia de dinamita, lo que Cuadro notificó una vez más a Díaz-Pintado. Sánchez Manzano ha declarado que fue presionado repetidamente por Interior para que asumiera que uno de sus hombres había mencionado la existencia de Titadyn. «Me negué rotundamente». A las seis de la tarde Acebes se reunió con los jefes policiales en Interior y ya nadie mencionó el Titadyn. Un elemento que había resultado clave para acusar a ETA tuvo una vida tan extremadamente efímera que ni siquiera llegó a las dos horas.

Para añadir confusión al tema, Aznar declararía tiempo después, como queda registrado en el documental *11M* de Netflix, que fue el director de la policía quien habría introducido este término en los debates de los responsables policiales. Jesús de la Morena, comisario general de Información, declaró en la comisión parlamentaria que la mención del Titadyn había sido determinante para dirigir las pesquisas iniciales hacia ETA, por encima de las dudas razonables que tenía la policía al respecto.

«Si es ETA, ganamos»

En los cuarteles generales del Partido Popular empezaba ya a circular desde el mediodía la conjetura de que, si los autores del atentado eran los etarras, Rajoy ganaría las elecciones por mayoría absoluta, y que si eran los islamistas, vencería Rodríguez Zapatero. La paternidad de esta teoría fue atribuida entonces a Pedro Arriola, que años después me reconoció que tal vez pudo usarla en algún comité pero que no se reconocía como autor de la misma. José Manuel García-Margallo, que fue ministro de Exteriores con Rajoy, recordaba que aquel fatídico día 11 se encontró con dos de los principales asesores del candidato, Francisco Villar y Pedro Arriola, a los que preguntó si sabían quiénes eran los autores: «Todavía no. Si ha sido ETA, nos salimos del mapa, pero si han sido los yihadistas, nos vamos a casa», le respondieron.

Aznar invierte los términos y adjudica esta reflexión a los dirigentes socialistas. En su diario del día 11 escribe: «La izquierda acaricia [*sic*] por que sean los árabes y poder echar la culpa al Gobierno por la guerra de Irak. Si es ETA, se callan y a remar. Siembran dudas sobre lo que dice el Gobierno». Lo cierto es que todos los equipos de estrategia de los partidos políticos especularon sobre los efectos que el atentado pudiera tener el domingo en las urnas, pero solo el PP, como titular del Gobierno y responsable de la seguridad pública, tenía información concreta y estaba obligado a actuar con la máxima transparencia a la hora de transmitir los datos disponibles.

El ministro del Interior compareció al fin a la una y media. «ETA buscaba una masacre en España, me lo han oído decir en los últimos meses y en los últimos días. Cuatro veces han conseguido evitarlo las fuerzas de seguridad, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo». En su primera pregunta el periodista de *El País* Luis Rodríguez Aizpeolea planteó si había pruebas materiales que avalaran la autoría de ETA. El ministro se limitó a exponer los precedentes de las maletas que pretendían hacer explosionar en la estación de Chamartín y la furgoneta con quinientos kilos de explosivos interceptada en Cuenca.

«ETA buscaba un atentado de gran repercusión, que generase dolor y miedo, con un gran número de víctimas. Por tanto, me parece intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigida por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia». Tras el señalamiento de ETA y Otegi, al fin Acebes se

solidarizó con las víctimas, que a esa hora sumaban ya 173 muertos y más de 600 heridos.

La intervención de Acebes dejó un sinnúmero de cuestiones sin respuesta: ¿hay alguna prueba material que involucre a ETA?, ¿resulta significativo que no haya habido un aviso previo?, ¿podría tratarse de algún grupo islamista? El ministro admitió que ETA estaba en un momento de suma debilidad por la eficacia de la lucha policial, pero precisamente por eso necesitaba protagonismo a través de un gran atentado. Sin duda casaba mal la imagen de una ETA al borde de la extinción con el montaje de la mayor matanza terrorista llevada a cabo en España. Tras admitir que el tipo de explosivo estaba siendo analizado y sin mencionar el término «Titadyn», reiteró que los cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior «no tienen ninguna duda de que el responsable es ETA. Estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable».

A las 14.40 Aznar proclamó desde las pantallas de televisión que «este 11 de marzo de 2004 ocupa un lugar en la historia de la infamia». «Sé bien —dijo— que las palabras no bastan para paliar su dolor. No olvidaremos lo que ha sucedido. El Gobierno ha tomado todas las medidas para garantizar la seguridad». «Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles…», una frase que muchos años después recuerda Zapatero como algo que no ha podido perdonar. El balance provisional de víctimas registraría entre los 191 fallecidos iniciales a 50 extranjeros, muchos de ellos sin papeles.

«Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Su instinto asesino permanece activo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Gracias a su espléndida tarea los terroristas tienen su capacidad operativa más debilitada que nunca». Una afirmación casi macabra cuando está dando cuenta de un atentado que ronda los doscientos muertos.

«Los derrotaremos. Que no tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista con la fuerza del Estado de derecho y con la unidad de todos los españoles. No debemos aspirar a otra cosa que no sea la derrota total del terrorismo. Los criminales que hoy han causado tantos muertos serán juzgados y condenados. Cumplirán íntegramente sus condenas y no tendrán otro horizonte que ver amanecer todos los días entre los muros de la prisión».

En ningún momento citó Aznar expresamente a ETA, pero su audiencia no tenía ninguna duda de que se estaba refiriendo a esa organización terrorista con la que tres enviados suyos (el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, el sociólogo de cabecera Pedro Arriola y el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos) se habían reunido en Zúrich, el 19 de mayo de 1999, por

espacio de cuatro horas, para tantear un posible final de la violencia terrorista. Sus interlocutores etarras habían sido Mikel Antza, jefe del aparato político de ETA, Vicente Goikoetxea y Belén González Peñalva. Esta última ya había participado diez años antes en las negociaciones de Argel con el Gobierno de Felipe González y como miembro del comando Madrid tenía un amplio currículo criminal por el que sería condenada a más de setecientos años de prisión tras ser detenida en Francia unas semanas después del encuentro de Zúrich. En medio de las dos delegaciones se sentaba en calidad de mediador el obispo de Zamora, monseñor Juan Uriarte.

El trío de embajadores de Aznar ya se había reunido cinco meses antes, el 11 de diciembre de 1998, en la localidad burgalesa de Juarros, con una delegación de Euskal Herritarrok (EH), encabezada por su portavoz Arnaldo Otegi y de la que formaban parte Iñigo Iruin, Rafael Díez Usabiaga y Pernando Barrena. El propósito era dialogar sobre la nueva situación creada por la tregua que ETA había declarado unilateralmente en septiembre. EH era en ese momento una coalición legal con catorce diputados en el Parlamento vasco. El propio Aznar había anunciado un mes antes su decisión de iniciar conversaciones con «el Movimiento Vasco de Liberación». Nunca Aznar informó de estos contactos ni al Parlamento ni a la opinión pública, algo que Zaplana exigiría años después a Zapatero tras las conversaciones que mantuvieron enviados de su Gobierno con portavoces de la organización terrorista.

Como muestra de generosidad, durante este proceso Aznar trasladó a cárceles del País Vasco a 133 presos etarras, bastantes de ellos antes de la tregua, cuando ETA aún seguía matando, apenas unos meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. El titular de Interior por aquel entonces era Jaime Mayor Oreja, que ya en su día calificó el alto el fuego como «tregua trampa» y que a día de hoy, pasados más de doce años desde que ETA anunciara su renuncia definitiva a la lucha armada y cinco de su disolución, sostiene que la organización terrorista ha sido la vencedora real en su guerra con la democracia y que hoy tiene más poder que entonces.

Después del 11M Aznar proclamó: «No vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar. No debemos aspirar a nada que no sea la derrota completa del terrorismo, su rendición sin condiciones. No hay negociación posible. Somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el pueblo español. No vamos a permitir nunca que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional».

Tras estas palabras, que constituían el núcleo duro de su discurso frente a ETA, y después de declarar tres días de luto nacional, Aznar

pidió a los españoles que se manifestaran en toda España al día siguiente, a las siete de la tarde, bajo el lema «Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo». No hacían falta más precisiones, todos sabíamos que el presidente hablaba de ETA, a la que en efecto había arrinconado y cuya letalidad había reducido.

El 7 de julio de 2005 se registró en el metro de Londres un atentado yihadista similar al ocurrido en Atocha, con el resultado de 56 muertos. Justamente ese día empezaba en Edimburgo la cumbre del G-8, a la que asistió Rodrigo Rato en su condición de director gerente del FMI. De su memoria de aquel día extrae que Blair hizo varios viajes a Londres, donde compareció en televisión acompañado por el líder de la oposición conservadora, Michael Howard, para compartir el dolor con las familias de las víctimas y con todo el pueblo británico. A diferencia de Aznar, Blair no se ocupó de los pormenores policiales, que delegó en los portavoces de Scotland Yard. Aznar transmitía ira; Blair, empatía hacia las víctimas. Aznar convocaba a los españoles como un autócrata, sin compartir siquiera protagonismo con su sucesor Rajoy. Blair se hacía acompañar por el líder tory.

Las bolsas europeas cayeron el día 11 un 3 por ciento, un punto más que el IBEX. La asignación del atentado a ETA, en último término un terrorismo de carácter doméstico con el que las autoridades españolas llevaban lidiando más de treinta años, redujo posiblemente su impacto en los mercados de valores. Resulta significativo que la inesperada victoria de Zapatero ese domingo en las urnas fuera castigada el lunes con una caída del IBEX del 4 por ciento. Por lo visto, los inversores temían más a un Gobierno socialista que a una matanza terrorista.

Al término de la comparecencia de Aznar estaba a punto de llegar al complejo policial de Canillas la furgoneta Renault Kangoo, que había sido precintada cerca de la estación de Alcalá de Henares hacia las once, tras la declaración prestada en la comisaría por el portero Luis Garrudo. Cuatro horas para recorrer una distancia de cuarenta kilómetros no parece un ejemplo de diligencia cuando se trata de dilucidar hacia dónde dirigir las pesquisas policiales tras un atentado tan monstruoso.

Pasadas las tres de la tarde se encontraron bajo el asiento delantero de la furgoneta, dentro de una bolsa de plástico de color azul claro, de las que se usan para la basura, cinco detonadores eléctricos de cobre y dos de aluminio, y un trozo de papel con restos de una sustancia blanquecina que resultó ser el extremo de un cartucho de Goma 2 Eco, según descripción del jefe de los Tédax. En la guantera había una cinta con cantos coránicos en árabe que los terroristas suicidas acostumbran a recitar antes de los atentados. La suma de todos estos elementos sonaba a una virtual reivindicación yihadista.

Sánchez Manzano estaba almorzando en la cafetería de Canillas con

el comisario general de Información, Jesús de la Morena, y otros dos comisarios de este departamento cuando le informaron acerca de estos hallazgos. Los cuatro se trasladaron al laboratorio, donde los Tédax precisaron que los detonadores eran de un modelo que fabricaba Unión Española de Explosivos. La policía citó en sus dependencias a un representante de la empresa, que confirmó este extremo y delimitó las zonas en las que distribuían esos detonadores antigrisú: Asturias, León y Palencia. Una vez más se desechaba el empleo de Titadyn. Tanto De la Morena como Sánchez Manzano informaron de todo ello a sus respectivos superiores esa misma tarde.

Nada de esto, ni siquiera la existencia de la furgoneta, se notificó al CNI, que a las 15.51 remitía al Gobierno un informe que consideraba «casi seguro» que los atentados habían sido obra de ETA, que debido a su situación precaria estaría necesitada de provocar una gran convulsión, similar a la producida en 1997 con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. En sus conclusiones descartaba que con los datos disponibles pudiera atribuirse la ejecución del atentado a alguna rama de la yihad internacional, ya que, pese a ciertas similitudes con actuaciones terroristas previas de ese signo, «falta una de las huellas más significativas de este tipo de atentados: el terrorista suicida».

La inexistencia de suicidas sería corroborada por la directora del Instituto Anatómico Forense, Carmen Baladía, que al frente de un equipo de sesenta profesionales realizó en tiempo récord casi doscientas autopsias e identificó a 155 cadáveres que serían entregados a sus familias antes del domingo 14. La identificación de los demás, hasta llegar a 191, llevaría una semana más debido a que los destrozos corporales impidieron su reconocimiento visual y hubo que recurrir a pruebas de ADN. La memoria del reciente fiasco en la identificación de los 62 militares fallecidos en Turquía en 2003, en el accidente del avión Yak 42, cuando regresaban a casa después de una campaña en Afganistán, hizo que en este caso se extremara el rigor en todo el proceso.

Acebes se apoyaría más adelante en el informe del CNI (firmado oficialmente a las 15.51 del día 11) para explicar por qué había sido tan rotundo al atribuir a ETA la paternidad del atentado en su primera comparecencia (a las 13.30). Todos buscaban un tercero al que culpar de sus eventuales errores.

Una pica en la ONU

La información obtenida de la furgoneta Renault Kangoo, poco después de las 15.00 horas, parecía inclinar la investigación hacia la vertiente islamista, pero esto no impidió al Ministerio de Exteriores remitir hacia las cinco y media de la tarde un telegrama a todas las embajadas y consulados españoles informando de que el ministro Acebes había confirmado la autoría de ETA sobre la base del explosivo y el patrón del atentado.

Bajo el título «Atentado ETA en Madrid» el telegrama decía: «En relación con el brutal atentado que se ha cometido hoy en Madrid y los esfuerzos que desde alguna fuerza política se han hecho para intentar confundir sobre la autoría del mismo señalo lo siguiente. El ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA, así lo confirma el explosivo utilizado y el patrón que es el habitual de ETA, así como otras informaciones que aún no se han hecho públicas por razones obvias».

«A tales efectos —prosigue el telegrama— remito información de EFE recogiendo declaraciones del ministro Acebes, así como la declaración institucional pronunciada a las 15 horas por el presidente del Gobierno. Deberá vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quién está detrás de estos atentados. Y si considera oportuno acudir a los medios para exponer estos hechos, que se haga».

Jorge Dezcallar y un miembro de aquel Gobierno me manifestaron que esta iniciativa de la ministra Palacio fue imprudente y «precipitada», una auténtica fuga hacia delante. La ministra ha rechazado siempre que incurriera en una mentira políticamente interesada, aunque a la hora a la que fue remitido el telegrama nadie sostenía ya en Interior que el explosivo fuera Titadyn.

Ana Palacio habló con Acebes a eso de las nueve de la mañana para tener una visión general de lo sucedido y varias veces con Aznar para informarle primero de su iniciativa de proponer una resolución al Consejo de Seguridad, luego para comunicarle que la había presentado y, por último, para notificar que se había aprobado. En ausencia del embajador ante Naciones Unidas, Inocencio Arias, la ministra había llamado a primera hora de la mañana a la embajadora adjunta, Ana

Menéndez, a la que después de relatarle lo ocurrido le pidió que preparara una propuesta de resolución para el Consejo de Seguridad.

Al texto base elaborado por la delegación francesa, que presidía el Consejo de Seguridad, la representación española propuso agregar a iniciativa de la ministra Palacio una mención expresa de ETA como autora del atentado. El embajador Arias reconoció en un telegrama posterior que Rusia (representada por Serguei Lavrov, actual ministro de Exteriores) y Alemania se resistieron de inicio, aunque acabaron cediendo, en el caso germano previa llamada del ministro Joschka Fischer, que produjo visible irritación al embajador. Introducir el nombre de ETA en la parte resolutiva no tenía precedente, pero decidió proponérselo al embajador francés, Jean-Marc de La Sablière, que presidía el Consejo de Seguridad, porque la ONU, a diferencia de la Unión Europea y Estados Unidos, no tenía un catálogo de organizaciones terroristas y era una forma de incluir una condena nominal en un documento de su órgano ejecutivo. La reunión formal del Consejo empezó a las 12.35 y duró apenas cinco minutos. La resolución 1.530 se aprobó por unanimidad y sin debate. Su texto dice lo siguiente:

> Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y sus resoluciones pertinentes, en particular su resolución 1.373 de 28 de septiembre de 2001,
>
> Reafirmando la necesidad de combatir por todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales que representan los actos de terrorismo,
>
> 1. Condena en los términos más enérgicos los atentados con bombas cometidos en Madrid (España) el 11 de marzo de 2004 por el grupo terrorista ETA, que han causado numerosos muertos y heridos, y considera que esos actos, como todo acto de terrorismo, constituyen una amenaza a la paz y la seguridad;
>
> 2. Expresa su más sentido pésame y sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España y a las víctimas de los atentados terroristas y sus familias;
>
> 3. Insta a todos los estados a que de conformidad con las obligaciones que les competen en virtud de la resolución 1.373 (2001), cooperen activamente en los esfuerzos por localizar y llevar ante la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de este atentado terrorista;
>
> 4. Expresa su redoblada determinación de combatir todas las formas de terrorismo, de conformidad con las obligaciones que le confiere la Carta de las Naciones Unidas.

La resolución 1.373 a la que alude por partida doble fue aprobada a propuesta de Estados Unidos diecisiete días después del 11S y no contiene ninguna referencia explícita a Al Qaeda, aunque diera origen unos días más tarde a la guerra de Afganistán, declarada por una coalición internacional que lideraba Estados Unidos y en la que se integró España, por haber dado refugio y apoyo a esa organización terrorista. Al Gobierno de Aznar le urgía tener un aval internacional

inmediato para esgrimir el trampantojo de ETA tres días antes de las elecciones generales, no fuera a ser que los votantes se inclinaran por que la matanza de los trenes pudiera estar relacionada con el apoyo prestado a Bush en la guerra de Irak.

La referencia a ETA, considerada un éxito diplomático el día 11, se transformó en una situación embarazosa a medida que se imponía la autoría yihadista. En la reunión de jefes de misión del día 16 varios embajadores preguntaron por el tema a Arias, que se vio obligado a explicar que habían actuado de buena fe, en el convencimiento de que ETA era la responsable del atentado. A finales de marzo el jefe de la misión española envió una carta al presidente del Consejo, el francés De la Sablière, explicando que cuando se aprobó la resolución el Ejecutivo español «abrigaba el firme convencimiento de que la banda terrorista ETA estaba detrás de los terribles sucesos, aunque nuevos elementos han aconsejado abrir otras líneas de investigación y no es posible de momento llegar a conclusiones definitivas». Las actas del Consejo solo registran la resolución 1.530 de 11 de marzo, aprobada por unanimidad, que acusa a ETA del atentado.

El Gobierno trataba de camuflar cualquier indicio material que pudiera desviar la atención hacia el terrorismo yihadista. La Unidad Central de Inteligencia (UCI), dependiente de la Comisaría General de Información, elaboró meses más tarde un extenso documento (ciento cincuenta páginas) en el que resumió para la comisión parlamentaria de investigación las pesquisas policiales practicadas entre el 11 y el 13 de marzo: no cita a ETA ni una sola vez, mientras Acebes se empeñaba en sus conferencias de prensa que era la línea de investigación prioritaria, según le habían transmitido los mandos policiales.

Ajenos a esta batalla subterránea, los madrileños hacían un admirable despliegue de solidaridad para atender a los heridos, identificar a los muertos, consolar a los familiares y donar sangre en los hospitales. En la zona de Atocha permanecía la imagen posbélica de unos trenes con las tripas abiertas, de donde ya se había evacuado a los muertos y heridos. La memoria colectiva, a menudo tan frágil, no olvida veinte años después el ejemplar desempeño de sanitarios, bomberos, policías, servicios sociales de todo tipo y taxistas que ofrecían transporte gratuito.

Pasarían más de cinco horas desde que se encontraron en la Renault Kangoo unos objetos que, como mínimo, cuestionaban la pista etarra hasta que Acebes volvió a salir en televisión (20.20 horas) para informar de ello, una vez más siguiendo instrucciones de Aznar, como este se encargaría de pregonar en una nueva ronda de llamadas a los directores de los periódicos. En mi caso se produjo cuando Acebes ya estaba en pantalla. Ambas versiones se ajustaban al milímetro, como la del muñeco a su ventrílocuo.

Aznar justificó su segunda llamada por un supuesto prurito de transparencia, para que tuviéramos todos los datos de la investigación, aunque nada de lo que habían encontrado mellaba su convicción sobre la autoría etarra. El presidente menguante trataba de salvar su imagen para la historia. «No quería quedar como un mentiroso», le diría más adelante a Dezcallar. El punto de equilibrio era informar de los detonadores, la dinamita y la casete con los cantos coránicos, lo que daba pie a la apertura de una nueva línea de investigación, sin abandonar «la vía prioritaria de ETA». Para ello citaba con desparpajo a los cuerpos de seguridad, que ya orientaban su radar hacia los grupos islamistas y que habían aparcado las pesquisas sobre ETA.

La conferencia de prensa de Acebes retrasó media hora la retransmisión del mensaje del rey Juan Carlos, que se había grabado poco después de las ocho de la tarde, y que los norteamericanos pudieron seguir en directo a través de la cadena CNN, media hora antes que los españoles. En línea con Aznar, tampoco el rey mencionó expresamente a ETA en su discurso de condolencia.

Un grupo islámico de la órbita de Al Qaeda, denominado Abu Hafs al Masri, se atribuyó poco después el atentado mediante un correo electrónico enviado al periódico digital *Al Quds al Arabi*, que se edita en Londres en lengua árabe: «Esto es parte de un viejo ajuste de cuentas con España, cruzado y aliado de América en su guerra contra el islam», decía el escrito. Abu Hafs al Masri, egipcio que participó en la fundación de Al Qaeda, donde llegó a ser el número 3, había sido abatido en Kabul, en noviembre de 2001, al comienzo de la intervención internacional en Afganistán. Ni el Gobierno ni el CNI prestaron ninguna credibilidad a un comunicado que se validaría tiempo después.

A las diez de la noche la Cadena SER informó de que según sus fuentes había algún terrorista suicida en los trenes, añadiendo que Interior lo desmentía. Zaplana se lo comentó a Mariano Rajoy en su despacho de la calle Génova. Esta es la versión que me dio de aquel hecho: «Hizo una llamada por el móvil, no sé a quién, pero era alguien de su confianza. Al fin y al cabo había sido ministro del Interior. Le preguntó: ¿tú puedes aclararme si hay terroristas suicidas? Le contestó que no rotundamente, y me pidió que fuera a la televisión a desmentirlo».

A las once de la noche Alfredo Pérez Rubalcaba, designado por el PSOE como su representante en la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista, mantuvo una agria conversación telefónica con su interlocutor del PP Javier Zarzalejos. «Seguían —me dijo meses antes de su fallecimiento— con su estrategia de convencernos de que era ETA cuando nosotros estábamos seguros de que no tenía capacidad operativa para un atentado de esa envergadura».

La mochila de Vallecas

El jefe de los Tédax, Juan Jesús Sánchez Manzano, volvió a su casa a la una de la madrugada del día 12. Una hora después, cuando intentaba dormir después de un día sumamente estresante, le llamaron por teléfono para informarle de que en la comisaría de Puente de Vallecas había sido depositada una bolsa de deporte que habían encontrado los policías que inventariaban las pertenencias de las víctimas de El Pozo.

Los Tédax confirmaron que la bolsa contenía material explosivo y decidieron desmontarla tras fijar un amplio perímetro de seguridad en el parque Azorín. Les llevó tres horas separar todos los componentes del artefacto, que el jefe de los artificieros enumera en su libro *Las bombas del 11M*: «Una bolsa de deporte de loneta color azul marino, una bolsa de plástico azul claro de las empleadas para la basura; una sustancia blanquecina y gelatinosa, de textura similar a la plastilina, con un peso de 10,120 kilos; 640 gramos de tornillos y clavos dispuestos a modo de metralla; un detonador eléctrico industrial con cápsula de cobre de UEE (Unión Española de Explosivos); un teléfono móvil de la marca Triumph de Telefónica Movistar; una tarjeta SIM de Amena Auna insertada en el teléfono; un cargador de red para teléfono móvil Triumph».

El contenido de la bolsa fue trasladado de inmediato a la Unidad Central de los Tédax en Canillas para su análisis pormenorizado. El teléfono estaba apagado. Tras encenderlo vieron que tenía la hora real y que la alarma estaba activada para sonar a las 7.40, la hora a la que habían hecho explosión algunas bombas el día anterior. Los cables estaban sueltos, pero presentaban signos de haber estado conectados al móvil. La policía científica confirmó que el explosivo era Goma 2 Eco, igual que los restos encontrados en la Renault Kangoo y en las dos mochilas que se habían hecho explosionar en El Pozo y Atocha. Los resultados se reflejaron en una nota informativa emitida a las nueve de la mañana del 12 de marzo, que establecía definitivamente que el explosivo utilizado era Goma 2 Eco, no Titadyn.

El teléfono y la tarjeta abrieron simultáneamente una prometedora vía de investigación que en poco más de veinticuatro horas condujo a los establecimientos donde habían sido adquiridos y permitió las primeras detenciones. La policía demostró una profesionalidad inmune a la presión política y la agilidad de su respuesta impidió al Gobierno

mantener hasta después de la jornada electoral no ya la autoría de ETA, ni siquiera la incertidumbre.

Por el dial de la Cadena SER desfilaron desde las nueve de la mañana del día 12 los líderes de los principales partidos políticos. Cundía la sensación de que el Ejecutivo había intentado confundirlos. Los mismos que la víspera señalaban a ETA en un gesto de lealtad al Gobierno pedían ahora transparencia informativa y una respuesta unánime de los ciudadanos, al margen de quién fuera el autor de la matanza. Rodríguez Zapatero y Rajoy coincidieron en pedir unidad a las fuerzas políticas.

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, se preguntaba: «¿Que sea ETA o no es lo mismo? Lógicamente es una acción terrorista y el terrorismo es una lacra, lo practique quien lo practique. Pero tengo que pedir transparencia y que se clarifiquen las cosas, porque la ciudadanía tiene el derecho de saber quién ha sido y que se paguen responsabilidades».

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, hizo una declaración institucional poco después de las diez y media: «Los vascos nos vamos a manifestar masivamente en contra del terrorismo. Ayer el Gobierno español atribuyó a ETA la autoría de los atentados y de buena fe hicimos las correspondientes declaraciones. A lo largo del día vino después la confusión, y hoy existen dudas razonables acerca de la autoría de los atentados. Nada cambia para las personas que hayan sido perpetrados por ETA o por Al Qaeda, pero la valoración política es diferente y tenemos derecho a conocer la verdad».

A las once y media compareció Aznar desde el palacio de la Moncloa después de un breve Consejo de Ministros centrado en hacer balance del atentado, tomar medidas de apoyo a las víctimas y asignar destino a los ministros para las manifestaciones de la tarde. En general irían a las circunscripciones electorales en las que se presentaban como candidatos, salvo Rodrigo Rato, que siendo número dos en las listas de Madrid iría a Barcelona para acompañar a Josep Piqué.

Aznar vestía de riguroso luto. Informó de que el Gobierno había acordado conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a las víctimas y familiares directos (promesa que nunca se cumplió en sus propios términos) y destinar ciento cuarenta millones del fondo de convergencia para indemnizaciones. Su discurso se centró en defender la transparencia del Gobierno, que según sus palabras había dado en cada momento la información que obraba en su poder: la que conducía hacia la banda terrorista «bien conocida en nuestro país» o la de la furgoneta que contenía cánticos del Corán. «¿Alguien piensa que un Gobierno con dos dedos de frente, después de treinta años de terrorismo, no tiene que pensar lógicamente que puede ser esa banda la autora? Si hay otras hipótesis, también las vamos a seguir y todo lo

que sepamos se lo vamos a decir a la ciudadanía española».

Ante la pregunta de una corresponsal extranjera de por cuál de las dos hipótesis apostaba, respondió visiblemente irritado: «Estamos hablando de un atentado terrorista terrible, no me pida que juegue a las quinielas, trabajamos sobre hechos contrastados». Añadió que el ministro del Interior había hecho lo que debía, porque ETA lo había intentado en numerosas ocasiones y no había motivos para pensar que no eran ellos. O sea, que a falta de pruebas se cargaba la matanza sobre las espaldas del terrorismo doméstico. El Gobierno estaba ya a la defensiva ante la avalancha informativa internacional que atribuía la matanza al yihadismo islamista.

Respecto de la reivindicación que un grupo de Al Qaeda había enviado a un diario árabe radicado en Londres, dijo que lo estaban investigando y que si llegaran a tener una certeza la trasladarían de inmediato. Ninguna referencia a la nota informativa emitida casi tres horas antes por la dirección de los Tédax, que virtualmente descartaba la autoría de ETA en razón del explosivo que ya había sido analizado por su laboratorio.

Iñaki Gabilondo criticó en la Cadena SER el tono desabrido de Aznar, del que esperaba una intervención más institucional. Entendía que hubieran podido molestarle determinadas dudas sobre la información transmitida por el Gobierno, pero sobraban las alusiones a especulaciones interesadas. «El presidente siempre ha manejado la teoría de que el terrorismo de ETA ha sido alimentado por decisiones políticas de los nacionalistas; alguien puede pensar que el pacto de las Azores pudiera haber jugado como un factor indirecto para los islamistas».

Concluyó que «probablemente no sea justo ni lo uno ni lo otro: el reproche que se hacía al nacionalismo de tener que ver con las acciones terroristas y tampoco sería justo reprochar que unas decisiones políticas desembocan en el terrorismo. Creemos que la decisión de los que firmaron el pacto de las Azores fue un error grave, pero no le podemos hacer culpable del terrorismo que pudiera practicarse en su nombre».

Después de la una de la tarde el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó una rueda de prensa tras pedir a sus conciudadanos que acudieran a las manifestaciones convocadas para esa tarde, y expresó su convicción de que los culpables serían identificados y pagarían por ello. Exigió al Gobierno que informara con la mayor diligencia posible, porque los ciudadanos tienen derecho a saber. «Si ayer hubiera sido presidente del Gobierno de este país, habría reunido a todos los grupos parlamentarios para dar información y hacer una declaración conjunta». En una estrategia informativa que parecía reactiva, Mariano Rajoy salió a las dos de la

tarde para enfatizar en línea con Aznar su «convicción moral de que ha sido ETA».

La Cadena SER entrevistó a Felipe González, que apeló a la unidad en momentos de tanto pesar y pidió al Gobierno transparencia y prudencia. Admitía que el día anterior estaba convencido de que era ETA, aunque posteriormente fueron apareciendo indicios que apuntaban al terrorismo islamista. Declaró que la unidad de las fuerzas políticas exigía mucho diálogo y comprensión del otro, sin confundir a los culpables, que son siempre los asesinos. «No se puede aprovechar una situación como esta para hacer leña de un Gobierno. Yo lo he vivido, yo he estado en una manifestación, recién asesinado Francisco Tomás y Valiente, y he oído cosas muy duras contra el Gobierno por parte de líderes políticos de aquel momento».

González rememoraba febrero de 1996. El día 6 de ese mes ETA había asesinado en San Sebastián a Fernando Múgica Herzog, abogado y exdirigente socialista, hermano del que había sido ministro de Justicia; ocho días más tarde el etarra Jon Bienzobas disparaba a bocajarro al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. El día 19 la capital registraba una masiva manifestación para expresar su rechazo al terrorismo mediante manos pintadas de blanco. Dos semanas antes de ganar sus primeras elecciones, celebradas el 3 de marzo, Aznar responsabilizaba al Gobierno de los agujeros que se habían producido en la seguridad. Ya había expresado años antes que no pensaba excluir el terrorismo del debate político, como había sido normativo hasta entonces. Ocho años después consideraba miserable que nadie discutiera las tesis que sostenía el Gobierno sin ninguna prueba y apelaba a la unidad de las fuerzas políticas.

El 30 de julio de 1994, al día siguiente del asesinato del general Francisco Veguillas, director general de Política de Defensa, atentado en el que murieron también su chófer y un viandante, Aznar pronunció una conferencia en El Escorial en la que señaló que la lucha contra ETA pasaba por un momento de debilidad y confusión. «La política antiterrorista correcta es aquella que es capaz de conseguir que los asesinos estén en la cárcel y cumplan íntegramente sus condenas y no que salgan a capricho de cualquiera que se le ocurra empezar a soltar terroristas».

En la comisión parlamentaria de investigación del 11M, Aznar proclamaría a su enfático modo: «No encontrará de mi parte ninguna imputación de responsabilidad de un acto terrorista a ningún Gobierno». Tal vez había olvidado que en aquella conferencia de El Escorial había señalado que Felipe González inventaba cada mañana un capítulo de negociación o diálogo con ETA y había puesto en duda el sentido de la responsabilidad del presidente y del Ejecutivo en

pleno.

Durante su primer mandato Aznar excarceló a más de 200 etarras y trasladó a prisiones del País Vasco al menos a 133, algunos de ellos antes de que la organización terrorista anunciara la tregua en septiembre de 1998, catorce meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y a pesar de que ETA nunca suspendió los mecanismos de extorsión a los empresarios y la práctica de la violencia callejera por parte de sus seguidores. Este giro de la política antiterrorista de Aznar tuvo un precursor inesperado en su primer secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez (hoy jefe de gabinete y auténtico pigmalión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso), que solo cuatro meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco proclamaba que «en el problema del terrorismo etarra no debe haber ni vencedores ni vencidos».

La entrevista censurada a Bush

Los medios norteamericanos descreían desde la tarde del día 11 de la conjetura de ETA y apuntaban hacia el terrorismo islamista con distintos grados de convicción. Contaban para ello con la ventaja de la diferencia horaria. Lorenzo Milá era corresponsal de Televisión Española en Washington. Recuerda con precisión los acontecimientos de aquellos días:

> Nos despertaron unos amigos de Madrid y nos contaron que había habido un gran atentado. En Madrid era la una de la tarde (seis horas menos en Washington) y había ya mucha información. En España solo atentaba ETA, pero parecía una historia desproporcionada para la banda. Mi mujer [Sagrario Ruiz de Apodaca] era la jefa de la corresponsalía, pero estaba enferma y me fui yo a la embajada de España en DuPont Circle, donde ya había una concentración. Hablamos con algunos manifestantes y grabamos un canutazo a Colin Powell, secretario de Estado, que había acudido a presentar sus condolencias. Para entonces, debían de ser las once en Washington, las televisiones americanas ya hablaban de una posible autoría del islamismo radical. Le pregunté a Powell qué opinaba sobre esta versión: «No voy a especular con esto» (lo mismo diría luego Bush). «No es momento de ponerse a imaginar quién lo ha podido hacer, lo único que queremos nosotros es enviar un mensaje claro e inequívoco de que este país está con vosotros y haremos todo lo necesario para ayudaros a esclarecer lo ocurrido».

Poco después sonó el teléfono de la corresponsalía.

> Era la Casa Blanca, con la que manteníamos un contacto fluido, que reflejaba un poco la relación que había entre Bush y Aznar. Nos preguntaron si nos interesaría una entrevista en exclusiva con el presidente y la primera dama. Por supuesto que nos interesaba. Nos anunciaron que sería el día siguiente, a las doce, en la residencia del embajador. Llamo a Madrid y me dicen que la haga. Yo ya les había anticipado que en Estados Unidos nadie hablaba de ETA, que hablaban de islamismo radical.
>
> Al día siguiente nos vamos a hacer la entrevista, que se graba con la cámara de la Casa Blanca, nosotros solo hacíamos los contraplanos. Cuando llegué al salón principal de la residencia del embajador, estaba todo el equipo diplomático y parte del Gobierno de Bush, recuerdo a Condoleezza Rice, entonces consejera de Seguridad Nacional. Yo le comenté al presidente la versión que ya estaba en boca de todos y me repitió el mensaje de Powell, que no era momento de especular. Estuvo muy amable, muy cariñoso, como es él.

Acto seguido Milá habló con Madrid. Debía de ser la una de la tarde, las siete en Madrid, hora a la que se habían convocado las manifestaciones.

> Yo calculaba que daba tiempo para entrar en el telediario de las nueve. Me dijeron que enviara la entrevista con una pieza de presentación. A eso de las seis de la tarde en Washington, medianoche en Madrid, volvieron a llamar de la Casa Blanca para decirme que ellos tienen por costumbre bajar [*sic*] a su web las entrevistas exclusivas del presidente después de su emisión por el medio al que se habían concedido y vosotros no la habéis emitido. Lo sabíamos porque veíamos televisión española en la delegación. Les dije que no se preocuparan, que podían colgarla en la web.
>
> Volví a hablar con Madrid. Me dijeron que la entrevista estaba aparcada de momento, que tal vez se emitiera en el canal 24 Horas. Pensé que una entrevista con Bush en aquellas circunstancias podía sugerir una conexión con la guerra de Irak y que por eso el Gobierno no debía de estar interesado en su emisión. Pero entendía también que a Rupérez tuvo que molestarle que TVE no emitiera una entrevista que en buena parte había sido mérito suyo. No tenía precedentes que un presidente fuera a una embajada en Washington y no debió de gustarle que su esfuerzo diplomático no se tradujera en nada. Más cuando Bush había insistido en que no quería especular sobre la autoría, que solo deseaba transmitir su solidaridad con el pueblo español.

El embajador Rupérez escribió en su libro *Memoria de Washington* que en su encuentro privado con Bush, antes de la entrevista con Milá, el presidente le había preguntado acerca de la autoría del atentado, a lo que él respondió que creía que había sido obra de ETA. Bush le replicó que sus servicios le habían apuntado que podrían ser los islamistas y que iba a llamar a su amigo Aznar para transmitírselo. A la luz de sus declaraciones en el documental de Netflix, Rupérez sigue sin entender años después por qué TVE no emitió una entrevista en la que Bush no entraba en la cuestión de los autores ni ponía en duda la versión del Gobierno. Lo cierto es que las declaraciones de Bush solo se reprodujeron íntegras en la web de la Casa Blanca. El director general de RTVE era entonces José Antonio Sánchez, que había declarado públicamente «voto al PP y seguiré votando al PP», y su jefe de informativos era Alfredo Urdaci, connotado periodista de filiación derechista.

¿Quién ha sido?

Poco menos de una hora antes de la manifestación, cuando los alrededores de Atocha empezaban ya a llenarse de gente con paraguas en una tarde lluviosa, Ángel Acebes convocó su tercera conferencia de prensa en dos días con el propósito de reafirmar que las fuerzas de seguridad seguían manteniendo como línea prioritaria la investigación sobre ETA, aunque habían abierto otra vía hacia el radicalismo islamista.

Media hora antes el director de la Policía Nacional, Agustín Díaz de Mera, y el comisario general de Información, Jesús de la Morena, le habían informado de que la autoría de ETA no encajaba y que todos los indicios apuntaban hacia el fundamentalismo islamista. También le anticiparon que tenían intención de detener al día siguiente a dos ciudadanos de origen indio por su eventual relación con el teléfono encontrado en la mochila desactivada en el parque Azorín.

En el capítulo de novedades Acebes dio, doce horas después, una somera versión sobre la mochila que los Tédax habían desmontado hacia las cinco de la madrugada, sin que ello alterara su narrativa básica, que seguía apoyándose en las coincidencias entre la pauta del atentado de Atocha y las de otros intentos fallidos de ETA.

A preguntas de los periodistas declaró que la Goma 2 Eco es un explosivo que se fabrica en España, que ETA ya la había utilizado en el pasado, que bien podía proceder de un robo reciente y que a su juicio no hacía sino abundar en esa vía. «ETA sigue siendo la principal línea de investigación, así me lo han manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad y nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones». A esa hora la investigación policial ya estaba volcada sobre las huellas del terrorismo islamista, como acababan de informarle personalmente sus jefes policiales.

«¿Significa eso que se abandonen otras vías?», se preguntaba retóricamente el ministro para responder con un no rotundo, aunque añadía a continuación que ninguna policía de terceros países les había dado datos fiables de que pudiera tratarse de un grupo de origen islámico y la reivindicación a un periódico londinense no había merecido mayor crédito a Scotland Yard. Así se lo había manifestado el propio ministro británico del Interior, Jack Straw. Acebes se mostró imperturbable ante la realidad de unos medios que en todo el mundo

abandonaban la hipótesis de ETA en favor del terrorismo islamista, citando a sus propios servicios de inteligencia.

Mientras hablaba el ministro un presunto portavoz de ETA llamó a la radio televisión vasca (ETB) y al diario *Gara* asegurando que la banda terrorista no tenía ninguna responsabilidad en los atentados de Madrid. Como prueba de autenticidad de la llamada el comunicante propuso que se cotejara su voz con la que en 1998 había anunciado la tregua. «No nos lo creemos», respondió un Acebes inoxidable. Unos meses antes y a propósito de la tregua para Cataluña que habría negociado Carod Rovira con un dirigente de ETA en el sur de Francia, Jaime Mayor Oreja había declarado que «ETA nunca miente». Al parecer era una convicción volátil que se administraba a conveniencia.

Aznar presidió, junto al príncipe Felipe, una manifestación que congregó a unos dos millones de personas según el consenso de los medios. Es lo más cerca que llegó a estar de la estación de Atocha un presidente que en ningún momento había sentido la necesidad de visitar la zona cero de la matanza para expresar, más allá de la condena y la rabia, su empatía con los afectados.

La cabecera de la marcha, tras la pancarta «Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo», tardó en organizarse a la espera de Berlusconi, que se había retrasado. Los escoltas del primer ministro italiano arrollaban cuanto se cruzaba en su camino, hasta el punto de tirar al suelo a Rodríguez Zapatero, que había llegado en un Audi negro, de los que utilizan los ministros, y que ya había sido objeto de abucheos antes de ser identificado como líder de la oposición. «El ambiente en la primera fila era terrible», recuerda.

Los dirigentes políticos aguantaban con rostro serio, junto a una nutrida representación de líderes europeos, la lluvia que por momentos caía con intensidad. La consigna de rechazo al terrorismo y apoyo a la Constitución fue sustituida muy pronto desde el fondo por un grito que terminó imponiéndose bajo un mar de paraguas: «¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?». La propia pregunta revelaba una desconfianza masiva ante la versión del Gobierno. El relato de la autoría de ETA que había tratado de imponer Aznar con sus acólitos fue sustituido abruptamente por la pregunta de quién ha sido.

Más allá de ese grito, que aún hoy impresiona cuando se ven las imágenes en internet, la manifestación de Madrid discurrió sin incidentes serios aparte de alguna imprecación puntual a líderes del PP. No así la de Barcelona, donde Rodrigo Rato y Josep Piqué tuvieron que refugiarse en un aparcamiento para evitar agresiones de grupos enrabietados por lo que consideraban una manipulación informativa del Gobierno. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, fue agredida físicamente y precisó atención médica.

A Zaplana le correspondió encabezar la manifestación de Valencia, su circunscripción, pero decidió volver esa misma tarde a Madrid porque veía la situación muy complicada. A su regreso declaró que tenía la sensación de que «alguien está jugando con nosotros». Una declaración de largo recorrido que en el futuro permitiría sustentar todo tipo de conjuras contra el PP, que según el caso incluyeron a policías, servicios secretos de Marruecos o Francia, etarras y dirigentes socialistas. Más que una conspiración parecía un delirio febril.

Unos once millones de personas se manifestaron contra el terrorismo el 12 de marzo en decenas de ciudades españolas, según cálculos de los medios. Nunca se había registrado una movilización tan masiva. Había que remontarse a los días siguientes al asesinato de Miguel Ángel Blanco, este sí cometido por ETA, para encontrar un precedente. O a las masivas marchas contra la guerra de Irak que se habían producido justo un año antes y que seguían vivas en la memoria colectiva.

Pásalo

Las notas del diario de Aznar correspondientes al día 12 están cargadas de malos augurios. La manifestación le había dejado un regusto amargo, precisamente por su carácter masivo. A título de conclusión escribía: «Llamazares y compañía estarán contentos. Han movilizado a todo el mundo y han manchado para su vergüenza este día». Es curioso que siendo el único convocante de las manifestaciones le molestara el éxito de público, salvo que estuviera convencido de que los manifestantes habían acudido en masa para expresarle su rabia porque estuviera tratando de engañarles con la autoría de ETA. Al final parecía haber entendido que no podría prolongar la mentira, ni siquiera la incertidumbre, hasta después de las elecciones.

La mañana del día 13, jornada de reflexión, alguien nunca identificado envió a un grupo de amigos el siguiente mensaje a través de su teléfono móvil: «¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!». Aún no existían las redes sociales salvo la recién nacida Facebook, que era apenas un buzón electrónico de los estudiantes de Harvard. Pero en un par de horas el SMS se viralizó en una red de telefonía móvil que ya contaba con millones de usuarios (el 70 por ciento de los hogares tenía al menos un móvil) y se convirtió en comentario de sobremesa en todo el país.

Aznar había hablado esa mañana con Dezcallar, como los dos días precedentes. El director del CNI me dijo que le había transmitido al presidente su convicción de que aquello apestaba a islamista. Aznar se limitó a escuchar. En una nota a pie de página de su diario escribe que Dezcallar le envió justo ese sábado el informe que le había pedido sobre el atentado y su autoría. Añade que se trata de una reflexión personal, no clasificada, por lo que puede citarla en extenso: «No estamos en condiciones de respaldar o rechazar ninguna de las dos grandes alternativas en presencia. Ni antes ni después del atentado se ha detectado absolutamente nada ni dentro ni fuera de España que pudiera indicar una preparación o satisfacción por lo que ha ocurrido. El silencio es total, como atestiguan todos los contactos mantenidos con los servicios de inteligencia de nuestro entorno o el mundo árabe. Nadie ha detectado nada, ni antes ni después (y eso que la NSA de Estados Unidos lleva veinticuatro horas dedicada a este tema con la

máxima prioridad)».

Este extraño e increíble silencio cibernético del que habla Dezcallar no encajaba con la atribución masiva que los medios internacionales hacían ya al radicalismo islamista, algunos desde el mismo día 11, citando precisamente fuentes de los servicios de inteligencia de sus respectivos países. El propio Dezcallar declararía tiempo después que a última hora del día 11 la CIA ya le había puesto tras la huella del yihadismo.

Hacia el mediodía del sábado 13 Acebes y Astarloa se reunieron en Interior con los jefes policiales, que les informaron de que iban a proceder a las primeras detenciones a partir de los datos facilitados por los dueños de la tienda de Leganés que había vendido las tarjetas telefónicas usadas como temporizadores. Mariano Rayón, jefe de la UCIE (Unidad Central de Información Exterior), especialista en terrorismo islamista, se puso al frente de la investigación. Jesús de la Morena insistía en que no se hiciera pública ninguna información por razones obvias.

Zaplana dio hacia la una de la tarde una conferencia de prensa institucional en la Moncloa, para agradecer la masiva participación de los españoles en las manifestaciones del viernes y repetir de paso la cantinela de que la prioridad seguía siendo ETA, a pesar de que el Gobierno ya sabía que era una vía muerta. Después de comer voló a Alicante, pero nada más aterrizar decidió regresar a Madrid porque empezaba el acoso a la sede del partido.

A las 14.45 Acebes compareció por cuarta vez en tres días para descartar la presencia de suicidas en los trenes, algo que ya nadie mencionaba, y asegurar que no había datos adicionales sobre la eventual responsabilidad de Al Qaeda. Reiteró que se investigaba en las dos líneas, siempre con la responsabilidad etarra en primer plano. Se diría que, hiciera lo que hiciera la policía, el objetivo de las apariciones de Acebes era mantener viva en el imaginario de los españoles la implicación de ETA, que a esa hora sabía que era falsa.

Aznar almorzó ese sábado con Rajoy. La policía ya había puesto en marcha el operativo que condujo a la detención, entre las tres y media y las cuatro de la tarde, de dos ciudadanos indios en Leganés, propietarios de la tienda de la que procedían los móviles Triumph de las mochilas, y tres marroquíes en Lavapiés, que gestionaban el locutorio Nuevo Siglo, que había adquirido esos teléfonos y las tarjetas prepago que activaron las bombas. Uno de ellos era Jamal Zougam, que sería condenado a más de 34.000 años de prisión por la Audiencia Nacional como uno de los autores materiales del atentado. En el locutorio de la calle Tribulete se encontraría una semana después la primera prueba material incriminatoria del 11M: un trozo de plástico que le faltaba a la carcasa del móvil usado en la mochila desactivada

en el parque Azorín.

Dezcallar me confesó que ese sábado se había convencido de que había una intención clara de llegar al día de las elecciones con una duda razonable sobre la autoría del atentado.

> Me llamaron para que publicara una nota de respuesta a la SER esa misma tarde, sosteniendo que la investigación seguía centrada en ETA, cuando ya se habían producido las primeras detenciones, de las que nadie me informó. Me están manipulando y engañando. Acabo de estar con Acebes y Astarloa para darles una información que consideraba relevante y no me han dicho nada de los detenidos. Es cierto que no era íntimo de Aznar, que no era del PP, pero me tratan como si fuera un externo, como si fuera un periodista. Entiendo que no me convocaran a las reuniones, pero es muy fuerte que dos horas después de las detenciones me pidan que salga a defender una línea que como mínimo ya saben que es muy dudosa. Cuando vuelvo a mi despacho después de ver a Acebes me encuentro con seis llamadas de Timermans, que me dice que el presidente quiere que salga en televisión para desmentir a la SER y afirmar que seguimos trabajando en la línea de ETA. Le respondo que le diga al presidente que en mi sueldo no está salir en televisión. Al final saco una nota que no gusta a nadie, que sale poco antes de la comparecencia de Acebes y en la que quedo con el culo al aire.

En esa nota afirmaba que el 99 por ciento por ciento de las pesquisas del CNI seguían orientadas hacia ETA, un dato evidentemente falso. Eran casi las siete de la tarde y los detenidos, entre ellos un autor material del 11M, llevaban más de tres horas de interrogatorio en dependencias policiales con autorización del juez instructor.

Su relación con Aznar estaba virtualmente rota y Dezcallar reconoce que en algún momento se le pasó por la cabeza la idea de dimitir, pero terminaría desechándola porque consideraba que sería un escándalo hacerlo en esas circunstancias.

Siguiendo la pauta del «pásalo», varios miles de personas se concentraron ante la sede del PP en la calle Génova de Madrid para expresar su rechazo a las mentiras que había transmitido el Gobierno sobre el atentado de Atocha. Aunque la convocatoria por SMS invitaba a una manifestación silenciosa, empezó a corearse la consigna «se nota, se siente, el Gobierno miente». Los socialistas, cada vez más convencidos de que las mentiras del PP podían darles la victoria electoral, querían evitar a todo trance que el PP los vinculara a una movida de más que dudosa legalidad. En las imágenes que empieza a transmitir CNN+ ven alguna cara conocida y Rubalcaba da instrucciones severas para que ningún militante socialista se acerque a la calle Génova. Ya sabe que Rajoy va a salir en el telediario de la noche y escribe unas notas de réplica que lee a Zapatero, tras convencerle de que debe ser él, como coordinador de la campaña, quien responda en nombre del PSOE.

En su libro *Diario de un ministro* José Bono cita una conversación telefónica de esa tarde en la que Felipe González le habría dicho: «Me alegra que, pase lo que pase, Aznar se vaya a ir con la indignidad de habernos mentido y metido en una guerra cuyas consecuencias no se olvidarán jamás. Espero que los españoles premien la decencia y castiguen la mentira».

A las 20.00 horas Acebes convocó su quinta rueda de prensa: «Creo de relevancia informarles de que a primera hora de esta tarde se han producido cinco detenciones, tres ciudadanos de nacionalidad marroquí y dos de nacionalidad hindú. Otros dos españoles de origen hindú están prestando declaración». Todos ellos por su presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y la tarjeta de la mochila. Era una operación abierta que no había hecho más que empezar.

Las detenciones no le llevaron, sin embargo, a descartar la implicación de ETA. Admitió que la vía islamista había dado resultados muy positivos, pero insistió en que la policía mantenía abiertas las dos líneas de investigación. Las declaraciones de los responsables policiales en la comisión parlamentaria y en el sumario de la Audiencia Nacional coincidieron en que a esa hora la única investigación viva era la que seguía el rastro islamista. Ya se había encontrado lo que Jesús de la Morena definió como «la pistola humeante».

Rajoy abrió el telediario con las siguientes palabras: «Soy Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular». No debía sentirse muy seguro de su papel como candidato a la presidencia del Gobierno cuando la víspera de las elecciones se sentía en la necesidad de identificarse ante los españoles. Su comparecencia tenía por objeto denunciar las manifestaciones que estaban teniendo lugar ante distintas sedes del Partido Popular, «que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión». Pidió la intervención de la Junta Electoral Central, que declararía ilegales las reuniones, aunque nunca se llegaría a esclarecer quiénes habían sido los primeros convocantes.

Minutos después ocupó la pantalla Alfredo Pérez Rubalcaba, que acuñó una frase para la historia: «Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta». Una expresión que había llamado la atención de Zapatero cuando le leyó sus notas esa tarde. Este le había preguntado: «¿Tú crees?». «Sí». «Pues adelante». En su intervención dijo que los socialistas sabían desde hacía bastantes horas que la principal línea de investigación policial era la del islamismo radical, pero no lo habían hecho público porque «nunca utilizaremos el terrorismo con fines políticos». Pidió calma a los ciudadanos y felicitó

a las fuerzas policiales por las detenciones practicadas esa tarde.

La declaración de Rubalcaba incitó a Zaplana a reaccionar. Asaltó con nocturnidad el estudio de televisión de la Agencia EFE, que estaba cerrado a esa hora, y desde allí acusó a los socialistas de instigar las manifestaciones ante las sedes del PP, un hecho insólito en la jornada de reflexión. «El PSOE sostiene que el Gobierno está engañando. Nosotros, que hay un complot contra el Gobierno». Es la colisión de dos relatos contradictorios que se medirán al día siguiente en las urnas. Me reconoce que a esas horas la falta de sueño se le notaba en la cara: «Parecía el portero de una funeraria».

Televisión Española había anunciado para esa noche la emisión de la película *Shakespeare in Love*, pero a última hora decidió sustituirla por *Asesinato en febrero,* un documental sobre el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa a manos de ETA el 22 de febrero de 2000, apenas tres semanas antes de que Aznar ganara las elecciones por mayoría absoluta. Telemadrid, por aquel entonces a las órdenes de Esperanza Aguirre, había emitido la víspera esa misma película.

Todo para que la sombra de ETA no se borrara de la mente de los españoles, que en su mayoría habrían desconectado cuando poco antes de la una de la madrugada volvió a comparecer Acebes (sexta rueda de prensa) para dar cuenta de una reivindicación del atentado por parte de una célula de Al Qaeda en Europa, mediante un vídeo grabado en árabe. Telemadrid había recibido una llamada de alguien que hablaba español con fuerte acento árabe, que informó de que habían depositado un vídeo reivindicativo del 11M en una papelera situada entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. A las 19.40 la televisión madrileña informó al 091.

La cinta dura algo menos de tres minutos y puede comprobarse que ha sido grabada ese mismo día, a las cinco de la tarde. En ella se ve a un hombre probablemente joven, vestido con túnica blanca, que oculta su rostro con un pañuelo de seda y unas gafas de sol muy oscuras. Lee en árabe con acento marroquí un papel que sostiene con su mano izquierda mientras lleva un arma en la derecha. Detrás de él puede verse en la pared una bandera rectangular verde con una leyenda en árabe: «No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta».

El texto dice, entre otras cosas: «Nos hacemos responsables del ataque acontecido en Madrid tras dos años y medio de las benditas conquistas de Nueva York y Washington, en respuesta a su alineamiento con organizaciones terroristas mundiales y aquellas organizaciones de Bush y sus seguidores que mataron a nuestros niños y mujeres y los dejaron sin hogar en Irak y Afganistán».

«Juramos por el Dios todopoderoso que si no cesáis en vuestra injusticia y en las muertes de musulmanes con la excusa de combatir al terrorismo, volaremos vuestras casas por los aires y derramaremos

vuestra sangre como si fuesen ríos. Nos hemos preparado para lo que llenará de terror vuestros corazones». Y finaliza: «Esto es un aviso del portavoz del ala militar de Ansar [partidarios] Al Qaeda en Europa, Abu Dujan al Afgani».

Ni las detenciones practicadas por la tarde, ni esta reivindicación que parecía tener visos de autenticidad, descabalgaron a Acebes de sus dudas y de su apelación a la prudencia, algo que se había echado de menos en su primera comparecencia, en la que sin ningún indicio material, solo por los antecedentes, había asegurado con total certeza la autoría de ETA y el carácter «miserable» de quien (Otegi) desmentía este señalamiento.

Durante una cena frugal de madrugada, Zaplana confesó a los demás comensales, Carlos Aragonés, Lucía Figar, tal vez Alfredo Timermans, que había llegado a la conclusión de que el PP iba a perder las elecciones. Pasado el tiempo, aún insiste en que «el Gobierno no mintió; si acaso, pecó de exceso de información».

Perdieron porque mintieron

La jornada electoral discurrió sin mayores incidentes, con algún abucheo a Aznar y a Rajoy en sus respectivos colegios electorales. A las dos de la tarde la participación había subido más de cinco puntos respecto al año 2000. Al final serían más de ocho.

A las dos y media del día 14 volvió a comparecer Acebes en su séptima conferencia de prensa. No resultaba fácil interpretar el propósito del ministro, puesto que no tenía información relevante y ya no se atrevía a sostener que la investigación prioritaria giraba en torno a ETA. Pero dejó flotando en el aire una sospecha que daría mucho juego en el futuro a los defensores de la conspiración: la hipótesis de una connivencia entre Al Qaeda y ETA. Cualquier cosa para no descartar la participación etarra, que aun siendo compartida podía dar cierto juego electoral en las cinco horas que aún faltaban para el cierre de los colegios.

Según el cómputo que haría el diputado nacionalista vasco Emilio Olabarría en la comisión parlamentaria de investigación, en sus siete ruedas de prensa Acebes citó en cincuenta y cinco ocasiones a ETA como autor del atentado, por su cuenta o en comandita con los yihadistas. Una verdadera letanía de acusaciones falsas si se tiene en cuenta lo que el propio ministro declaró en una entrevista publicada por *ABC* el 29 de marzo: que en las investigaciones practicadas mientras fue ministro no se había encontrado ninguna prueba que involucrara a ETA. Lo suyo no fue una sucesión de errores, sino un cúmulo de falsedades deliberadas.

La mentira de Aznar sobre el 11M le costaría la derrota a Rajoy. La ventaja que habían anticipado las encuestas, de al menos cinco puntos a una semana de la cita electoral, se invirtió a favor de Zapatero en las urnas, en las que aventajó a su oponente por un 5,4 por ciento y millón y medio de papeletas. En opinión del sociólogo Pedro Arriola, el vuelco electoral fue de más de diez puntos. «Hay dos millones de votos habitualmente abstencionistas que se movilizaron en su mayoría por el PSOE. También una parte de Izquierda Unida, que optó por el voto útil para castigar al PP, y cerca de seiscientos mil votantes populares que cambiaron de opinión». La participación había crecido ocho puntos respecto a las elecciones de 2000, en las que Aznar había logrado mayoría absoluta. Zapatero obtuvo algo más de once millones de votos, que aun superaría cuatro años después, y que siguen siendo

récord absoluto de las elecciones celebradas bajo la Constitución de 1978.

Un estudio poselectoral del CIS realizado en marzo-abril revelaría que el atentado del 11M influyó mucho o bastante en el voto de más de siete millones de electores: a dos millones de abstencionistas los animó a ir a las urnas y a 1,2 millones les hizo cambiar su voto; 1,8 millones de votantes socialistas reconocieron que habían votado a ese partido por primera vez. Zapatero sostuvo en la comisión parlamentaria que «solo la verdad podía haberlos salvado políticamente», pero lejos de eso se empeñaron en «mentir y manipular para sostener la autoría de ETA».

En su diario del día 14 Aznar admite que la participación es alta y los sondeos, malos. «Sea como sea, la historia está ahí y tengo asumido que si perdemos es por mi culpa, y si ganamos, a pesar mío. En todo caso estoy tranquilo y sereno. ¿Qué dirán los españoles? Ayer durante toda la tarde me fui colocando en las hipótesis peores. Para qué ocultarlo. Todo ha sido planificado por una mente implacable y diabólica».

En sus notas repasa lo ocurrido la víspera. «La de ayer sábado fue una jornada agotadora. Por aquí estuvieron todo el día Lasquetty, Timermans y Javier Zarzalejos. Acebes vino dos veces. A mediodía, noticia del vídeo de reivindicación de Al Qaeda». ¿Cómo alguien tan preciso como Aznar en el manejo de las horas, incluso de los minutos, puede cometer un fallo tan burdo como este de darse por enterado a mediodía de una reivindicación que según el relato oficial no se graba hasta las cinco de la tarde y no llega a manos policiales hasta pasadas las ocho?

En la comisión parlamentaria de investigación su portavoz Eduardo Zaplana le hizo la siguiente pregunta: «¿Supo de la existencia del vídeo de reivindicación antes de la noche del día 13?». Aznar: «No, señoría, y quien lo dijo mintió. Ese vídeo fue grabado según la policía a las 17 horas del sábado. ¿Se puede conocer el contenido de un vídeo de reivindicación, grabado a las 17 horas, el sábado por la mañana? […] Yo digo que ese ejercicio se llama mentir de una manera vil y mentir de una manera miserable».

Si hubiera consultado sus diarios antes de la declaración en el Parlamento, quizá hubiera moderado su énfasis acusatorio. O tal vez esos diarios no existían aún en el formato que les dio en sus memorias y cuando los escribió se le pasó por alto que se daba por enterado del vídeo horas antes de que estuviera grabado. Lo cierto es que el argumento que había utilizado contra la Cadena SER o contra la oposición en su conjunto se volvía como un bumerán contra sí mismo.

El nuevo presidente electo, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en su discurso de la madrugada postelectoral a cumplir

su principal promesa de campaña: retirar de Irak a los 1.300 soldados españoles, algo que apoyaba más del 90 por ciento de los españoles según los sondeos. Calificó como «inmoral, ilegal e injusta» una guerra preventiva que se organizó con mentiras y proclamó que la participación de nuestro país había sido un error. Ya había aflorado la cárcel de las torturas en Abu Ghraib, la administración Bush había reconocido que no se habían encontrado armas de destrucción masiva y en unos meses (9 de julio) el Senado de Estados Unidos aprobaría un informe que censuraba a la CIA por haber exagerado la amenaza de Irak. Zapatero se comprometió a recuperar la línea medular de la política exterior europea, estrechando relaciones con Francia y Alemania, dos países que se habían negado a participar en la invasión de Irak.

La asociación de corresponsales extranjeros envió el lunes 15 una carta de protesta a Timermans en la que declaraban haberse sentido manipulados por las insistentes llamadas realizadas desde la Secretaría de Estado de Comunicación. El Gobierno puede expresar sus opiniones, admitían, pero está obligado a informar sin presionar a los medios. A algunos corresponsales extranjeros les pareció escandaloso que, más allá de las comparecencias públicas ante la prensa, el presidente del Gobierno tratara de influir en el relato de los acontecimientos a través de llamadas de teléfono privadas. Giles Tremlett, corresponsal del diario británico *The Guardian*, destinatario de una de ellas desde la Secretaría de Comunicación, escribiría lo siguiente: «La llamada era tan extravagante que comprendí que el Gobierno no solo creía que era ETA, quería que fuera ETA».

Con ser discutible el método, esta promiscuidad entre periodistas y políticos era una de las herencias de la transición española, cuando unos y otros coincidían en su apoyo al alumbramiento de un régimen democrático y en los debates sobre la Constitución. Por lo demás, tampoco es algo inhabitual en otros países. Ben Bradlee, mítico director de *The Washington Post* durante la investigación del caso Watergate, obviamente odiado por Richard Nixon, había sido un invitado habitual de la Casa Blanca durante la presidencia de John F. Kennedy, con quien había establecido una intensa relación de vecindad en Georgetown durante su etapa de senador. En la película *Los papeles del Pentágono* su editora Katharine Graham, que se siente señalada por su relación con el ex secretario de Defensa, Robert McNamara, le pregunta con aspereza si cree realmente que el presidente Kennedy le invitaba solo por amistad o para conseguir el favor del periódico.

Le Monde caricaturizaba a Aznar en su portada del día siguiente a las elecciones con una enorme nariz de Pinocho junto al título «España castiga la mentira de Estado». Días más tarde el *Financial Times*, buque

insignia de la prensa liberal europea, decía que «la reputación de Aznar está hecha trizas» y citaba fuentes alemanas para aseverar que el Gobierno español había mantenido la autoría de ETA mucho después de que aparecieran evidencias que señalaban al terrorismo yihadista y que con ello pudo poner en riesgo la seguridad continental.

Aznar no retomó su diario hasta el miércoles 17. La víspera había decidido desclasificar los papeles del CNI desde el día 11, pedir autorización al juez para que se conociera el contenido de las escuchas autorizadas judicialmente y evaluar el proceso de toma de decisiones e información del Ministerio del Interior. «No voy a permitir que se mancille el honor del Gobierno ni el mío». Siempre a vueltas con su honor como medida última de las cosas.

Consideraba «desoladoras» las declaraciones de Zapatero sobre la retirada de tropas de Irak. Admitía a regañadientes que era una «decisión legítima de quien había ganado las elecciones, pero es la demostración de un error gravísimo». «En cuarenta y ocho horas —concluía— se han arruinado años de trabajo». El político que subió a los cielos cuando Bush le dejó poner los pies sobre la mesa mientras se fumaba un puro en una cumbre del G-8 en Canadá consideraba un desastre para España que su sucesor en la Moncloa fuera a corregir la alianza especial que él había forjado con Estados Unidos para regresar al eje europeo franco-alemán.

El 24 de marzo se celebró en la catedral de la Almudena el funeral solemne por los fallecidos del 11M. Justo cuando iba a empezar se le acercó una persona para decirle: «Señor Aznar, yo le hago a usted responsable de la muerte de mis dos hermanas». Tal vez la frase más brutal que tuvo que escuchar esos días. Gran parte de los jerarcas europeos asistieron a las exequias y le expresaron sus condolencias, con las excepciones de Chirac y Schroeder, «que han estado por aquí y ni atisbo de visita y ni siquiera de llamada».

«Como ayer hablé de un grupo mediático perfectamente reconocible —escribe en su diario—, Prisa está encolerizada». Y vuelve a contar su versión mendaz acerca del cambio de titular en la edición especial de *El País* del día 11, algo que ha repetido durante años sin recato, ocultando siempre que minutos antes de su llamada el secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timermans, me había transmitido la certeza del Gobierno sobre la autoría de ETA.

En su condición de presidente en funciones, en plena mudanza de sus enseres, aún tuvo que hacer frente el 2 de abril a un atentado fallido en el AVE Madrid-Sevilla, a su paso por Mocejón (Toledo). Un empleado de Renfe que inspeccionaba las vías encontró un paquete sospechoso que contenía doce kilos de Goma 2 Eco, del mismo tipo utilizado en Atocha, aunque en este caso no se había activado la

espoleta. En sus diarios Aznar data sorprendentemente este hecho el viernes 26 de marzo (una semana antes de que ocurriera), lo que plantea serias dudas sobre la autenticidad de su cuaderno de notas.

Al día siguiente, 3 de abril, siete integrantes del comando terrorista del 11M se inmolaron en el piso que habían alquilado en Leganés, en el número 40 de la calle Carmen Martín Gaite, cuando la policía les conminó a rendirse. Uno de los ocupantes del piso, que había salido a tirar al contenedor unas bolsas de basura, se dio cuenta de la presencia de los policías y avisó a sus colegas antes de huir a la carrera como buen corredor de fondo que era. Al verse rodeados decidieron inmolarse provocando una tremenda explosión que destruyó la fachada del edificio y causó la muerte del agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) Francisco Javier Torronteras.

Entre los restos del piso se encontraron dos cintas de vídeo. Una de ellas dice: «Tras comprobar que la situación no ha cambiado y después de que vuestro nuevo gobernante anunciase la apertura de su mandato con más lucha contra los musulmanes y el envío de más tropas cruzadas a Afganistán, las compañías de la muerte y Ansar Al Qaeda han tomado la resolución de seguir la senda de la bendita yihad. [...] Y por ello ha decidido la brigada que se encuentra en al-Ándalus no salir de aquí hasta que no salgan sus tropas de las tierras de los musulmanes de manera inmediata y sin condiciones. Si no lo hacéis en el plazo de una semana a partir de la fecha de hoy, continuaremos nuestra yihad hasta el martirio en tierra de Tarek Ben Ziyad» (general bereber que dirigió la conquista de la España visigoda a comienzos del siglo VIII). «Os mataremos en cualquier lugar y en cualquier momento».

El atentado fallido del AVE y la cinta de Leganés grabada a las 0.18 del 3 de abril, cuando aún creían estar a salvo, revelaban que su voluntad de practicar la yihad en al-Ándalus hasta el extremo del martirio trascendía la presencia del PP al frente del Gobierno, lo que no obsta para que un Aznar imperturbable siga repitiendo veinte años después que él era la diana del 11M. Un argumento que ha servido a sus seguidores más afiebrados para discutir la legitimidad del triunfo electoral de Zapatero. Reivindica como un mérito de su Gobierno que las elecciones pudieran celebrarse tres días después del atentado, pero siembra de minas la legitimidad del resultado sin negarla de forma explícita.

En su cuaderno de bitácora del 7 de abril escribió: «Desde hace tiempo vengo diciendo que la izquierda española es la peor de Europa, y lo sigo pensando». Con visión profética añade: «España no tiene un problema por el centro derecha, moderno, abierto, popular. Esto lo hemos resuelto. Pero sí lo tiene por la izquierda, donde el radicalismo es cada día mayor, acompañado de una insolencia nacionalista insoportable». Una certera profecía de lo que iba a suceder con Vox en

el espacio de la derecha.

Y se inyecta una dosis adicional de narcisismo: «Yo tuve la ambición de situar a España entre los grandes y para eso era necesario jugársela, arriesgar y asumir responsabilidades; y lo hice. España tiene condiciones, aunque a una parte del país no le guste». Tal vez se refiera a ese 90 por ciento que se pronunció en contra de participar en la guerra de Irak. «Aposté por una España pujante y orgullosa. Es en lo que creo y lo otro no me interesa».

En el capítulo de despedidas no puede silenciar las halagadoras palabras de Putin en la suya: «Lo que ha pasado en España es gravísimo para todos, un precedente fatal. He trabajado muy a gusto contigo, aquí tienes tu casa; voy a tratar de llevarme bien con tu sucesor, pero te digo que lamento de veras que uno de los mejores líderes de Europa se vaya».

El 18 de abril, tras el anuncio de Zapatero de la retirada inmediata de las tropas de Irak, escribió: «Se consumó el dislate. España se sitúa en la peor de las posiciones posibles. Ya no es de fiar para los aliados y es débil para los terroristas. La España atacada el 11M envía un mensaje de desistimiento. Me temo que España va a pagar muy caro este hecho sin precedente histórico».

La administración norteamericana, incluyendo la de Obama, tardó muchos años en superar los desaires de Zapatero. Ya el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, le advirtió a José Bono cuando le visitó en Washington para anticiparle las intenciones del nuevo Gobierno español: «Nuestros soldados les ayudarán, pero, si ustedes se van de Irak, España será el único país que lo haga y tendrán que cargar con ese estigma». No sucedió así: dieciséis naciones que formaban parte de la coalición invasora abandonaron Irak en los dos años siguientes, entre ellos algunos aliados históricos de Estados Unidos como Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Holanda, Italia y Japón.

Desde que José Luis Rodríguez Zapatero ordenó el 18 de abril, día de su toma de posesión como presidente, retirar las tropas españolas de Irak hasta que salió el último contingente el 21 de mayo, transcurrieron treinta y tres días sin incidencias de relieve. Durante los catorce meses que duró la participación española en la coalición habían muerto en emboscadas y accidentes siete agentes del CNI, tres militares y un guardia civil. También perdieron la vida dos periodistas que informaban del conflicto: Julio Anguita y José Couso, este último en el ametrallamiento del hotel Palestina de Bagdad por tropas norteamericanas.

La investigación policial sobre el 11M avanzó a buen ritmo con bastante discreción. La red asturiana de traficantes de explosivos fue desarticulada en una semana y se detuvo a varios autores materiales que venían a sumarse a los siete que se habían inmolado en Leganés.

La mayor preocupación radicaba en que la trama del 11M tuviera supervivientes decididos a continuar la yihad en al-Ándalus. Pasarían catorce años hasta que el 17 de agosto de 2017 se produjera una cadena de atentados en Barcelona y Cambrils que reivindicó el Ejército Islámico (Daesh), en los que murieron diecisiete civiles, dieciséis de ellos atropellados en Las Ramblas de Barcelona, y ocho terroristas.

El PP se queda solo

El Congreso de los Diputados decidió por unanimidad el 20 de mayo de 2004 crear una comisión de investigación sobre los atentados del 11M. Lo hizo a petición del PP, que después de arrastrar los pies durante meses decidió adelantarse a los demás grupos parlamentarios. Desde el 6 de julio hasta el 15 de diciembre desfilaron ante la comisión prácticamente todos los jefes policiales, pasados y presentes, sus homólogos europeos, los directores del centro de inteligencia, los ministros del PP más vinculados a los hechos (Acebes, Zaplana y Ana Palacio), dirigentes socialistas como Rubalcaba (portavoz parlamentario) y José Antonio Alonso (ministro del Interior), el expresidente Aznar y el presidente en ejercicio, José Luis Rodríguez Zapatero.

La intervención más emotiva se produjo el último día de comparecencias (15 de diciembre) a cargo de Pilar Manjón, presidenta de la asociación 11-M Afectados del Terrorismo, cuyo único hijo Daniel había muerto con veinte años en las explosiones producidas en la estación de El Pozo. Acusó con dureza a los partidos de utilizar el 11M para saldar sus propias cuentas en medio de chanzas y abucheos procedentes de la bancada del grupo popular, sin un respeto mínimo a las víctimas. «¿De qué se ríen, señorías?», les espetó, antes de pedir «verdad, justicia y reparación moral», lo que a su juicio exigiría crear una nueva comisión para depurar responsabilidades acerca de los errores de prevención que hicieron posible el atentado. Pilar Manjón fue sometida a una persecución mediática tan despiadada por parte de los defensores de la conspiración (*El Mundo* y la COPE, especialmente, con el apoyo político del PP) que, por un tiempo, se vio obligada a vivir en condiciones de semiclandestinidad.

Aznar compareció el 29 de noviembre con cierto aire de superhéroe de Marvel, solo frente al mundo, decidido a defender su honor de las insidias. Fue el suyo un discurso preparado hasta el mínimo detalle. Enumeró con precisión de cronometrador las horas y los minutos en que habían comparecido distintos líderes políticos el 11 de marzo señalando la autoría de ETA antes de que él lo hiciera, con especial dedicatoria a Zapatero, primero de la lista, y a Ibarretxe. Ninguno de ellos, dijo en tono acusatorio, se había puesto en contacto previamente con Interior o Presidencia. Aznar convertía así en acusación universal lo que en ese momento no había sido sino un gesto de lealtad al

Gobierno.

El político que había hecho del terrorismo un tema más del debate público exigía ahora a los demás el compromiso de no llevarlo al campo de batalla partidista. Acusó a partidos de la oposición y «medios de comunicación conocidos por su delirante obsesión contra el Gobierno del Partido Popular» (léase la Cadena SER y *El País*) de fabricar una gran mentira en torno a la gestión del Ejecutivo: «Jugaron a desestabilizar y tuvieron su papel en una jornada de reflexión utilizada para alentar el acoso organizado contra un partido democrático, responsable todavía del Gobierno de la nación, en uno de los momentos más difíciles que podamos recordar y a pocas horas de unas elecciones generales». Ni la más leve autocrítica sobre la narración embustera que había fabricado su administración desde el primer minuto.

Mezcló errores informativos (los presuntos suicidas) con bulos que el propio Gobierno se había encargado de hinchar (un falso decreto para suspender las elecciones o la supuesta dimisión masiva de mandos policiales), con el propósito de crear una nube tóxica que alcanzara a todos por igual. «Fueron otros los que mintieron y lo hicieron con contumacia. Emplazo a que alguien encuentre una investigación policial en la que el Gobierno haya dado tanta información y con tanta inmediatez, a veces contra el criterio de los investigadores».

Nueve meses después de los hechos, cuando no cabía ninguna duda sobre la autoría islamista tras el suicidio colectivo de Leganés, entre otras pruebas, Aznar puso sobre la mesa el último conejo de su chistera: hay que investigar la colaboración entre terroristas islámicos y no islámicos, «hasta hace poco descartada como inverosímil y ahora demostrada como hecho incontestable». Acusado de mentir por casi toda la prensa occidental, con la sola excepción de algunos medios nacionales adictos (*El Mundo* y la COPE, muy singularmente), Aznar pretendía erigirse en paladín de la verdad.

A preguntas de su escudero Zaplana desplegó una vez más los antecedentes que ya había manoseado los días de autos y que le llevaron a atribuir el 11M a ETA: el comando de Collado Villalba, las maletas destinadas a la estación de Chamartín, las mochilas de Baqueira Beret y la furgoneta de Cuenca. Una vez más convirtió coincidencias a veces marginales en pruebas acusatorias a fin de sostener que siempre había dicho la verdad.

No dudó en reivindicarse como abanderado en la lucha contra el terrorismo islamista (ciento veinte detenidos bajo su mando, dato que repitió en varias ocasiones) y en promotor de diversas iniciativas internacionales para combatirlo en la UE, la OTAN y Naciones Unidas. «Si alguien ha advertido estos años del riesgo del terrorismo islamista,

he sido yo». ¿Pudo ETA tener relación con el atentado del 11M? «No soy el único que lo piensa. Hoy sabemos que había coincidencias en las caravanas de la muerte que salen el mismo día hacia Madrid, que había contactos y amistades en las cárceles, sabemos que hay proveedores comunes de explosivos. Pido que se investigue sin reservas. Siempre he dicho que todos los terrorismos son iguales y acaban teniendo conexiones».

Esa batería de contactos entre yihadistas y etarras había sido desplegada previamente por *El Mundo* con gran alarde tipográfico y Aznar le daba carácter de hecho probado en sede parlamentaria, sin importar que el informe de la ponencia concluyera que esos vínculos no estaban en absoluto acreditados y que el juez instructor los descartara como prueba de una participación de ETA.

Aznar pisó a fondo el acelerador: «Dudé si convocar las elecciones el 14 o el 7. Si las hubiese convocado el 7, el atentado habría tenido lugar el 4. Esos atentados no buscaban solo causar víctimas, sino volcar las elecciones. No creo que los autores intelectuales anden en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas. Creo que hubo una planificación estratégica y algunos la aprovecharon al máximo. Ninguna democracia en el mundo puede estar tranquila de que no haya terroristas que puedan intentar interferir en sus procesos electorales». Trece años después, en noviembre de 2017, le decía en la Cadena SER a Pepa Bueno, actual directora de *El País*: «No modifico una letra ni una coma de lo que dije entonces». Es algo que ha repetido en todos los foros cuantas veces se le ha preguntado.

Frente a las disculpas pedidas con más o menos sinceridad por sus aliados de las Azores, Bush y Blair, el expresidente Aznar se mantiene en sus trece: «No voy a pedir disculpas por defender el interés nacional de España —declara en la misma entrevista—. El interés nacional de España pasaba por no dejar a los Estados Unidos solos en esa situación, por no abandonar la política atlántica».

El diputado vasco Olabarría le replicaría en la comisión parlamentaria que, a juicio de los expertos, la teoría de Aznar sobre esos supuestos autores que no estaban en desiertos lejanos era un desvarío. Todas las investigaciones practicadas sobre la decisión de atentar el 11M concluyeron que la fecha había sido elegida meses antes de que Aznar decidiera convocar las elecciones el 14 de marzo.

El diputado de IU Gaspar Llamazares le señaló que del 11 al 14 su Gobierno produjo una inflación informativa a destiempo y de manera sesgada para evitar la verdad. «Usted ha establecido una relación directa entre el atentado y el resultado electoral. ¿Cree lo mismo en el caso del asesinato de Buesa? Usted obtuvo entonces mayoría absoluta. Usted quiere deslegitimar estas elecciones, pero no otras». Aznar le replicó: «No he dicho que los resultados electorales sean ilegítimos,

pero que los atentados han influido… Lo creo yo y todos». El expresidente no desistió de señalar su protagonismo en el combate contra el terrorismo islamista, aunque nunca antes hubiera trasladado esta preocupación especial a los demás grupos políticos a través de la comisión de secretos oficiales.

El presidente Zapatero cerró las comparecencias de políticos el 13 de diciembre de 2004, nueve meses después de los atentados. Se mostró indignado porque Aznar hubiera dicho que los españoles se habían plegado al chantaje de los terroristas al depositar su voto. «La infamia de acusar a nuestro pueblo de cobarde se añade a la humillación de haber sido burlados en nuestra seguridad y al dolor de las muertes».

«El atentado del 11M fue ideado, planificado y cometido por el mismo terrorismo asesino que ideó, planificó y cometió los atentados del 11S en Estados Unidos, el mismo de Bali, Casablanca, Estambul». Para corregir el déficit de medios humanos en la lucha contra el terrorismo islamista, Zapatero anunció que aumentaría en ciento cincuenta personas las plantillas respectivas de la policía, la Guardia Civil y el servicio de inteligencia, además de contratar a cuarenta intérpretes de árabe que permitan traducir y analizar las escuchas telefónicas. El presidente afirmó que sumando esto a la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, el refuerzo del control de explosivos y la creación de una comisión de vigilancia de la financiación de grupos terroristas, se podía concluir que «nuestro país está hoy más y mejor protegido frente al terrorismo islamista».

La participación de España en la guerra de Irak elevó el riesgo a juicio del presidente Zapatero, sin que esto supusiera ninguna atribución de culpabilidad: «El responsable es el terrorismo islamista». Y la retirada de tropas nada tiene que ver con el 11M, sino con el compromiso adquirido por el PSOE ante los ciudadanos, que en su gran mayoría estaban en contra de una guerra que consideraban ilegal y negativa para luchar contra el terrorismo.

Ninguna de las investigaciones realizadas conduce a ETA, afirmó. Para llegar a esa conclusión la policía había analizado 1.334 huellas, 25.000 evidencias y efectos personales y más de 20.000 fotogramas. «A ustedes no les va a valer ni la sentencia judicial; seguirán diciendo que hay que investigar. En el procedimiento del 11M no hay ningún indicio de autoría de ETA. Deberían superar el trauma de la derrota electoral y buscar la explicación en sus propios errores».

Zapatero denunció que el equipo de Aznar había ordenado un borrado masivo de los archivos informáticos de Presidencia relacionados con el 11M: ningún acta, ningún informe, ninguna comunicación interna, nada sobre las reuniones habidas en la Moncloa ni sobre los contactos telefónicos del presidente. Solo las facturas del

borrado para ser abonadas por el órgano correspondiente de la Administración pública. La subdirectora general de Informática lo describió como un «borrado masivo en el gabinete de Presidencia».

Solo así se podía evitar que en el sanctasanctórum de Aznar quedara constancia escrita de que nunca había existido realmente una línea de investigación que condujera a ETA. Zapatero sostuvo ante la comisión parlamentaria que «desde el momento en que se descubrió que la dinamita no era Titadyn no había ningún elemento que pudiera hacer pensar que el atentado era obra de la banda ETA». No había ningún indicio, ningún hecho, ningún dato material, ninguna pista en esa dirección. La primera evidencia tangible fue la furgoneta Renault Kangoo; la segunda, la mochila con el teléfono y el explosivo Goma 2 Eco, y ambas apuntaban al fundamentalismo islamista. «El Gobierno seguía diciendo que la línea prioritaria era ETA, pero no era cierto. Todo lo que se dijo desde el jueves por la tarde fue un engaño masivo. Incluso se intentó engañar al mundo a través de la ONU».

Los jefes policiales que desfilaron por la comisión coincidieron en que el entuerto del Titadyn había sido, de hecho, el único elemento que había apuntado hacia ETA. Reparado el error la misma tarde del día 11, la teoría etarra se pulverizaba mientras el Gobierno seguía sosteniendo que era prioritaria. Acebes reconocería que la investigación no había aportado ningún elemento en esa dirección. Mantener la narrativa de la doble línea era engañar a sabiendas a los ciudadanos: mentir.

Zapatero había dedicado la tarde del día 11 de marzo a visitar varios hospitales donde estaban internados los heridos del atentado. Hacia las ocho de la tarde estaba en el Gregorio Marañón cuando recibió una llamada de Aznar, que le informó sobre los objetos encontrados en la furgoneta Renault Kangoo. Al término de la conversación, Zapatero le comentaría al director médico que le acompañaba: «Ha sido Al Qaeda».

A juicio del presidente, Aznar se equivocó gravemente desde el minuto cero, al tratar de protagonizar en solitario la respuesta política y policial y empecinarse en la autoría de ETA cuando no había ningún indicio material que la sostuviera, más allá de coincidencias accidentales con planes de atentados que nunca habían llegado a materializarse. Ni siquiera fue capaz de compartir con los demás líderes políticos la convocatoria de la manifestación. No está de más recordar una cita de sus diarios ya recogida al comienzo de estas páginas: «Como me ocurre siempre en situaciones límite, me invade una gran serenidad: sé lo que hay que hacer».

En su turno de intervención Rubalcaba replicó al PP que había inventado la conexión ETA-Al Qaeda para defender sus mentiras del 11 al 14 de marzo. Era una repetición de lo que ya había hecho Aznar

en torno a la guerra de Irak cuando sostuvo, mirando fijamente a la cámara, aquello de «créanme, hay armas de destrucción masiva en Irak». Le costaría años apearse de este bulo con la boca pequeña, mucho después de que lo hicieran sus amigos Bush y Blair. Sobre el 11M fue igual de mendaz: «Simplemente digo y sostengo que partidos de la oposición y medios de comunicación conocidos por su delirante obsesión contra el Gobierno del Partido Popular mintieron. Fabricaron una gran mentira en torno a la gestión del Gobierno». Jamás ha corregido esta acusación falsa ni reconocido que fue él quien mintió reiteradamente y sigue haciéndolo hasta el día de hoy.

El portavoz del PSOE continuó: «¿Oyó alguien a Acebes decir la tarde del día 11 que las matrículas de la Renault Kangoo no estaban dobladas, que el explosivo no era Titadyn, que los detonadores no eran los habituales de ETA y que los versos coránicos no eran material de enseñanza sino los que recitan los terroristas suicidas? No lo dijo, pero lo sabía». Y concluía Rubalcaba: «El día 11 mintieron, el 12 mintieron deliberadamente y el 13 mintieron temerariamente».

A juicio de Zapatero todas las comparecencias públicas formaron parte de una estrategia de «engaño masivo». «Todo lo que dice el Gobierno después de la furgoneta es para tratar de engañar. Perdieron porque mintieron».

Todos los grupos parlamentarios, salvo el del Partido Popular, suscribieron en sus conclusiones esta severa sentencia, aunque algunos suavizaron los términos en sus discursos. Describieron como desinformación, engaño masivo, manipulación o tergiversación lo que eran mentiras a granel. El PSOE trataría infructuosamente de conseguir que el PP se adhiriera al dictamen rebajando varios grados el lenguaje, pero Aznar impuso a los suyos una disciplina férrea para mantener su versión de que habían sido otros, socialistas y medios de Prisa especialmente, quienes habían mentido y organizado un contubernio para desalojarlos del poder.

En el segundo tomo de sus memorias sobre los ocho años de Gobierno, publicado en 2014, admite una levísima autocrítica, no por la información falsa acerca del 11M, sino por no haber explicado adecuadamente la amenaza que provenía del yihadismo: «Debo reconocer que tal vez la opinión pública española no era lo suficientemente consciente hasta el 11 de marzo del alcance del terrorismo islámico, o por lo menos no tanto como lo ha sido de la amenaza del terrorismo de ETA. Si es así, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir. Quizás los propios éxitos conseguidos en la lucha contra ETA en los últimos años nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista».

En el primer aniversario del atentado, el PSOE consiguió al fin consensuar con el PP una declaración institucional muy genérica,

aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados con un llamamiento a la solidaridad con todas las víctimas y a la unidad de todas las fuerzas políticas en la defensa del Estado de derecho. Al mediodía del 11 de marzo de 2005 los reyes, acompañados por el presidente Zapatero, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y una veintena de presidentes y jefes de Gobierno, inauguraron en el parque del Retiro el Bosque del Recuerdo, un austero jardín de 192 cipreses y olivos que honraban a los fallecidos sobre una pequeña loma artificial. A petición de las víctimas no hubo discursos, solo cinco minutos de silencio en los que se escuchó el «Cant dels ocells», de Pau Casals, interpretado por la chelista sevillana Blanca Coines.

La tregua dialéctica duró apenas veinticuatro horas. Un vídeo elaborado para FAES por Miguel Ángel Rodríguez, ex secretario de Estado de Comunicación de Aznar (1996-1998), originó una nueva trifulca política porque gran parte de su contenido estaba dedicado a ETA y a sus diversos intentos de provocar un gran atentado. Mientras tanto, el PP seguía pidiendo en la comisión nuevas comparecencias de confidentes, algunos de ellos en prisión, y de la fiscal encargada del sumario, Olga Sánchez, porque había declarado que no había indicios de la participación de ETA. Se rechazó reabrir el capítulo de comparecientes y se fijó el 19 de abril para presentar las propuestas finales.

El 11 y 12 de mayo de 2005 se celebró el debate sobre el estado de la nación, que tuvo un carácter extraordinariamente bronco. El presidente Zapatero expuso su voluntad de buscar el final de ETA por medio del diálogo, aprovechando su debilidad y sin hacer concesiones políticas. Cuando reprochó a Rajoy su falta de colaboración, este le replicó: «Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento». El presidente Zapatero le respondió que no había dejado de hacer un uso político del terrorismo desde que había perdido las elecciones.

El pleno del Congreso aprobó el 18 de mayo, con los votos en contra del PP, una moción que defendía un final dialogado con ETA, siempre que abandonara el uso de las armas sin contrapartidas políticas. El texto de la moción reproducía párrafos literales del pacto de Ajuria-Enea, que habían suscrito en 1988 todos los partidos, incluida la Alianza Popular que presidía Manuel Fraga. Lo que entonces era un objetivo deseable se había convertido en anatema.

En este clima de máxima crispación se reunió por última vez el 22 de junio la comisión parlamentaria del 11M. El desfile de portavoces puso en evidencia la soledad del Partido Popular. Abrió el fuego José Antonio Labordeta en nombre del grupo mixto para señalar que Acebes había dado un gran número de conferencias de prensa,

siempre para negar credibilidad a las pruebas que empezaban a acumularse contra la autoría de ETA.

Gaspar Llamazares señaló que varios ministros y el presidente Aznar «presionaron, ocultaron o retrasaron la información y a veces mintieron con el único objetivo de mantener la hipótesis de ETA el mayor tiempo posible para evitar que otra hipótesis les perjudicara electoralmente». Ya el día 11 por la tarde, Acebes fue informado de que se esfumaba cualquier indicio que apuntara a ETA, y al mediodía del 12 sus jefes de policía le comunicaron que el atentado tenía el sello inequívoco del integrismo islámico. Nada de esto impidió que mantuviera impertérrito que la vía prioritaria seguía siendo la de ETA. Esta atribución «no fue un error, sino una estrategia perfectamente planificada». Y cuando ya no pudo mantenerla en sus propios términos, el sábado por la tarde, creó otra maniobra de distracción: el contubernio ETA-Al Qaeda que los principales mandos policiales han refutado. Aznar le daría una nueva vuelta de tuerca con la conspiración político-mediática PSOE-Prisa para tumbar al Gobierno en las elecciones.

En nombre del PNV Emilio Olabarría abundó en que la manipulación informativa del 11 al 14 de marzo tenía unos fines electoralistas inequívocos: «Tengo la convicción de que en Interior sabían fehacientemente el propio día 11 que ETA no tenía nada que ver con el atentado». Pese a todo, Acebes le había atribuido la autoría, exclusiva o compartida, en cincuenta y cinco ocasiones.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Puig i Cordon, afirmó que el Gobierno de Aznar había desoído más de una decena de informes de sus fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia que advertían del riesgo de un atentado. El 18 de octubre de 2003 Osama bin Laden había lanzado un comunicado, emitido por la cadena Al Jazeera, que amenazaba a los países implicados en la guerra de Irak, con mención expresa de España. Al día siguiente, Acebes trasladaba a sus colegas europeos que no había motivos para pensar que España pudiera ser un objetivo de Al Qaeda. Puig i Cordon calificó la información transmitida por el Gobierno entre el 11 y el 14 de marzo en los siguientes términos: «Manipulación y mentira, prevaricación y alevosía». Admitió que a primera hora era comprensible que apuntara a ETA, pero no hubo un solo hecho que lo sustentara después: «El PP quiso cambiar la realidad para obtener un resultado electoral», afirmó.

Jordi Jané i Guasch, portavoz de Convergència i Unió (CiU), citó un informe emitido por el comisario Mariano Rayón, jefe de la UCIE, que el 28 de noviembre de 2003 había advertido por escrito del riesgo de un gran atentado en España e instado a no bajar la guardia ante una amenaza que seguía en vigor.

Vicente Martínez-Pujalte puso de nuevo sobre la mesa, en nombre del PP, la panoplia de argumentos que había esgrimido Aznar: el atentado había tenido una intencionalidad política clara. Pretendía, aparte de provocar una masacre brutal, producir un cambio en el Gobierno de España que hiciese girar su política exterior e interior. Pero aun sabiendo esto, «no se sabe quién lo puso en marcha, quién decidió la fecha; nadie puede creer que siete traficantes de hachís se conviertan en peligrosos terroristas y decidan provocar esta masacre». Redondeó sus palabras afirmando que los interrogantes superaban a las certezas: «¿Quién fue el autor intelectual? ¿Qué datos permiten descartar la colaboración entre ETA y Al Qaeda?». Como una bomba de racimo, este discurso alentó la teoría de la conspiración que algunos han pretendido mantener hasta nuestros días y de paso crear una sospecha permanente sobre la legitimidad de la victoria electoral del PSOE el 14M.

En nombre del grupo socialista Álvaro Cuesta le respondió que afirmar que no se ha investigado lo suficiente o formular falsas insidias es «querer mantenerse en el engaño masivo». A la pregunta de quién ha sido, responde el instructor judicial de forma muy clara: «Una trama delincuencial del terrorismo islámico».

El pleno del Congreso aprobó el dictamen final el 30 de junio de 2005 por 184 votos a favor, 145 en contra (el PP en bloque) y una abstención. El Partido Popular se negó a incorporarse a un consenso parlamentario que criticaba, por una parte, la falta de previsión y, por otra, censuraba el intento deliberado del Gobierno por engañar a la opinión pública acerca de la autoría del atentado. Dice en la página 11 de sus conclusiones:

> La Comisión ha considerado que el Gobierno no impulsó con suficiente profundidad la investigación de los siguientes aspectos relacionados con el terrorismo islamista; a) los resortes logísticos con que contaban los grupos armados islamistas; b) las líneas de financiación del terrorismo islamista con sede en nuestro país; c) el posible arraigo del terrorismo islamista en la delincuencia común de origen inmigrante; d) las posibles células durmientes y sus alientos de radicalismo coránico; e) los lugares de tránsito terrorista; f) el reclutamiento de futuros terroristas para el entrenamiento en campos fuera de España; g) las relaciones y actuaciones de los terroristas en los centros penitenciarios.

La comisión calificó la respuesta del Estado español a la amenaza del terrorismo islamista como «insuficiente» debido a que el Gobierno infravaloró claramente los riesgos anunciados desde diversas instancias. Esto no significa necesariamente que el atentado hubiera podido evitarse de haber contado con el impulso adecuado ni desvía la culpabilidad de los terroristas, que fueron los únicos responsables de los actos criminales.

Respecto de la actuación del Gobierno a partir del 11M, criticó que actuara sin contar con el resto de las fuerzas políticas y parlamentarias y valoró negativamente que, ante el mayor atentado de la historia de España, no hubiera apelado a todos los partidos e instituciones para transmitir un mensaje de unidad, máxime cuando ya de antemano todos los partidos habían mostrado incondicionalmente su lealtad al Gobierno. La conducta de este estuvo motivada por sus exclusivos intereses electorales.

Los testimonios recibidos y la documentación analizada, particularmente la de origen judicial, «despejan cualquier duda sobre la autoría directa o indirecta de los atentados del 11M y, en concreto, niegan la posible participación en ello de la banda terrorista ETA. Ni un solo dato de la investigación policial —que era conocida en tiempo real por los responsables políticos de seguridad— indicaba en ningún momento que esta organización terrorista tuviera nada que ver con los atentados».

Frente a esta evidencia, «Ángel Acebes afirmó ante la opinión pública en todo momento, entre los días 11 y 13, que la principal línea de investigación policial era ETA», a pesar de que la información que recibía puntualmente de los mandos policiales apuntaba, por el contrario, que la línea de ETA perdía peso desde el primer día, quedando en mera conjetura, y se consolidaba la pista radical islamista.

La comisión había detectado un claro contraste entre los datos que iba ofreciendo la investigación policial al ministro del Interior y los que este trasladaba a la opinión pública, generando así una información equívoca y tendenciosa. «El ministro deformaba los datos que recibía y los hacía llegar sesgadamente a la ciudadanía, induciéndola a pensar que había sido ETA. Esa actuación insólita del ministro del Interior era la consecuencia directa del interés del Gobierno en adjudicar la autoría a ETA».

En conclusión: «El Gobierno manipuló y tergiversó los datos que iba recibiendo de la policía [...] con toda probabilidad para tratar de influenciar a la opinión pública respecto de la posible autoría de los atentados y así impedir que la misma extrajera consecuencias políticas que pudieran perjudicar los intereses electorales del Partido Popular, lo que podría ocurrir si una buena parte de la ciudadanía asociaba la masacre de Madrid con la guerra de Irak».

La sentencia judicial que el 31 de octubre de 2007 leyó de forma resumida el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, estableció que ninguna prueba avalaba la tesis de que ETA había participado en el atentado, fundamento básico de todos los bulos que difundió *El Mundo*, que amparó el Partido Popular y que amplificó Federico Jiménez Losantos

en la COPE. El entonces responsable de la edición digital de *El Mundo*, Gumersindo Lafuente, ha calificado la campaña dirigida por Pedro J. Ramírez como «la operación de intoxicación más sucia de la transición». Uno de los periodistas que dirigió ese periódico años después, David Jiménez, lamentaría en su libro *El director* los excesos cometidos por el diario en esa época, «en la que terminamos convirtiendo coincidencias en evidencias y llevándolas a la portada».

El sumario que dirigió el juez Juan del Olmo ocupó 241 tomos. El tribunal hizo suyas la mayoría de sus conclusiones, la más relevante, que los autores formaban parte de una célula islamista que había contado con la colaboración de un antiguo minero asturiano para robar los explosivos en la mina Conchita. El texto de la sentencia desechó las sospechas que los padres de la conspiración habían sembrado sobre presuntas manipulaciones del contenido de la furgoneta Renault Kangoo o la mochila desactivada en el parque Azorín. A juicio del tribunal, no hubo los «agujeros negros» sobre los que pivotó la campaña de *El Mundo*, que llegó a calificar de montaje la explosión del piso de Leganés en la que se inmolaron siete de los autores materiales de la matanza y donde murió un geo español.

Casi un año más tarde, el 17 de julio de 2008, el Tribunal Supremo confirmó el relato básico de hechos y convirtió en verdad judicial que los autores tenían dependencia ideológica de Al Qaeda, aunque no una relación jerárquica, y que ETA no había participado. El Partido Popular, que había hecho bandera de su respeto a las decisiones judiciales, se quedaba a la intemperie, aunque Aznar nunca ha renunciado a su teoría de que los estrategas de los atentados no viven en «desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas». Sus escuderos más próximos, con un papel destacado de Esperanza Aguirre, le han acompañado en este delirio, del que se apeó discretamente Mariano Rajoy tras su segunda derrota frente a Zapatero en 2008. El dirigente popular llegó a la conclusión, acertada, de que le resultaba electoralmente más rentable hurgar en la gran recesión que asomaba en el horizonte que seguir profundizando en delirantes conspiraciones de islamistas y etarras.

La amenaza islamista

La doctrina reivindicativa de Al Qaeda incorporó ya en los años ochenta la referencia a al-Ándalus como territorio expropiado al califato y que los soldados de Alá debían reconquistar. El propio Bin Laden apelaba a la yihad en 1994 para recuperar «toda tierra robada desde Palestina hasta al-Ándalus», según cita de Fernando Reinares, el académico que más ha profundizado en las intrincadas redes del terrorismo islamista en nuestro país.

A mediados de los noventa Al Qaeda contaba ya en España con una célula de seguidores radicalizados, algunos de ellos entrenados en Afganistán, que desde 1995 encabezaba un sirio apodado Abu Dahdah, nacido en Alepo en 1966, casado con una madrileña y padre de cinco hijos. Se financiaba con donaciones de empresarios afines al salafismo yihadista, colectas entre la población musulmana y actividades delictivas como el robo de tarjetas de crédito. Reinares registra que entre 1995 y 2000 realizó no menos de veinte viajes a Londres para entregar parte de esos fondos al emir Abu Qutada, ardiente defensor de la yihad. Abu Dahdah reclutaba militantes que enviaba a campos de entrenamiento en Bosnia, Indonesia y Afganistán.

Al menos desde 1995 era objeto de seguimiento por parte de la UCIE con autorización judicial, pero no se activó su detención hasta noviembre de 2001, dos meses después del atentado contra las Torres Gemelas, cuyo máximo responsable, Mohamed Atta, había viajado ese año a España en dos ocasiones. La estrecha relación que mantenía Abu Dahdah con Atta y la célula de Hamburgo activó al fin la orden de detención del juez Garzón cuando llevaba más de seis años bajo el radar policial.

La mayoría de los integrantes de su célula fueron detenidos, con algunas excepciones destacadas, como la del marroquí Amer el Azizi, que se libró porque se encontraba en Irán cuando se puso en marcha la operación Dátil, y cinco de los ejecutores materiales del 11M. Entre ellos estaba Jamal Zougam, condenado a más de 34.000 años de prisión como autor material, y Serhane Ben Abdelmajid el Tunecino, titular del alquiler de la finca de Morata de Tajuña, a cuarenta kilómetros de Madrid, que sirvió de base operativa a los terroristas, y uno de los siete que se inmolaron en Leganés.

Las escuchas telefónicas habían permitido a la UCIE acumular

mucha información sobre las células yihadistas que operaban en España, aunque el Gobierno seguía considerando que no había un peligro cierto de atentado en nuestro territorio. Para ello contaba con un informe ambiguo emitido por el CNI el 21 de febrero de 2003, que señalaba el aumento del riesgo originado por la posición de España sobre Irak, pero sin que se hubiera detectado ninguna amenaza directa.

El 16 de mayo saltaron todas las alarmas tras los atentados de Casablanca, cinco explosiones que se iniciaron en la Casa de España, donde varios terroristas suicidas provocaron la muerte de veintitrés personas, entre ellas tres españoles. En aquella cadena de atentados fallecieron cuarenta y cinco personas, incluyendo doce terroristas pertenecientes al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GIMC). Ana Palacio negó cualquier vínculo entre el atentado y la participación de nuestro país en la ocupación de Irak.

El CNI elaboró casi un mes más tarde un documento en el que señalaba que las autoridades marroquíes buscaban a Amer el Azizi, nacido al sur de Casablanca, casado con la española Raquel Burgos, que había sido número dos de la célula de Abu Dahdah y que había viajado a Afganistán desde territorio español. La policía marroquí tenía constancia de su relación con su paisano Abdellatif Mourafik, al que también quería interrogar. Los autores de la matanza de Casablanca habían contado con el apoyo de salafistas residentes en Melilla. El servicio de inteligencia se corrige a sí mismo al concluir que este atentado forma parte de una estrategia global de la que «no puede sustraerse España» y cuyos autores tenían múltiples vínculos con residentes en nuestro país.

El 18 de octubre de 2003 la cadena qatarí Al Jazeera difundió un mensaje de Osama bin Laden en el que se reservaba «el derecho de responder en el momento y lugar apropiados contra todos los países que participan en esta guerra injusta, especialmente Gran Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia». Dos días después de este comunicado, que Bush consideró creíble, el CNI llegó a la conclusión de que ponía de manifiesto un aumento del riesgo por el hecho de incluir a España como partícipe destacado de una coalición que amenazaba al islam en su totalidad y que en consecuencia era objetivo de la yihad internacional. «La amenaza explícita ha de ser tomada en serio —afirma el CNI—. Existe en España suficiente presencia de radicales que podrían actuar en respuesta al comunicado. El grado de fanatismo que se detecta va en aumento». El ministro Acebes había transmitido por el contrario a sus colegas europeos de Interior que no había detectado una elevación significativa de riesgos.

El CNI elaboró días después otra nota informativa que evaluaba la amenaza terrorista de origen islámico: las reiteradas alusiones a

España en medios árabes han provocado en el radicalismo islámico la percepción de que nuestro país «hace el trabajo sucio a los americanos» y «persigue al islam». La amplia difusión del comunicado de Bin Laden constituía una referencia para numerosos grupos radicales, cuya presencia en España había aumentado por efecto de la represión policial en Marruecos después de los atentados de Casablanca. «Parece necesario reforzar las medidas de protección».

Otra nota del CNI datada el 6 de noviembre alertó sobre las actividades de Allekema Lamari, ciudadano argelino detenido en Valencia en abril de 1997 por pertenencia al Grupo Armado Islámico (GIA), condenado en 2001 a catorce años de prisión, y puesto en libertad el 29 de junio de 2002 por decisión del Supremo al haber excedido el tiempo de permanencia en la cárcel sin sentencia firme. Conocidos suyos declararon que se había radicalizado en prisión y había jurado que los españoles pagarían muy cara su detención. El CNI detectó que Lamari había enviado en octubre cinco giros postales de ciento cincuenta euros cada uno a otros tantos islamistas que cumplían condena en cárceles españolas. Dada su precariedad económica, se interpretaba este hecho como una despedida, bien porque iba a abandonar el país, bien porque iba a realizar una acción violenta.

El 8 de marzo, tres días antes del atentado de Atocha, Interior fue alertado nuevamente de la peligrosidad de Lamari, según puso de manifiesto una nota que el nuevo ministro de Defensa, José Bono, envió el 10 de mayo al presidente Zapatero. En el preámbulo el ministro señalaba que «es imposible que el Gobierno Aznar tuviese dudas racionales sobre la autoría del atentado del 11M el mismo día que se produjo, porque con un año de anterioridad tuvo información precisa alertando de que las amenazas de los islamistas radicales debían tomarse en serio». Y concluía: «El error de culpar a ETA del atentado era disculpable para todos los españoles menos para el Ministerio del Interior».

Pero el mismo CNI que había advertido de las nuevas amenazas elaboró el 11 de marzo una extensa nota en la que consideraba «casi seguro que la organización terrorista ETA es la autora de estos atentados». El Gobierno Aznar desclasificó unos días más tarde este y otros documentos elaborados por el servicio de inteligencia en un intento de traspasar al CNI la responsabilidad de la atribución. Los argumentos que permiten a los servicios de inteligencia llegar a esta conclusión serán empleados reiteradamente por Aznar y Acebes para sostener la autoría de ETA hasta la noche del sábado, cuando ya se habían producido las primeras detenciones.

En un párrafo que fue tachado en el documento desclasificado, el CNI señalaba que, «reconociendo internamente que no poseían

información de la dirección de ETA sobre el atentado de Madrid, esta mañana los dirigentes de la ilegal Batasuna han decidido señalar públicamente otros posibles autores». Admitía la existencia de similitudes con los procedimientos empleados por terroristas islámicos, pero con los datos disponibles no podía señalar como responsable a alguna de las organizaciones ligadas a la yihad internacional porque faltaba una de las huellas más significativas: «el terrorista suicida».

Al día siguiente de las elecciones el CNI elaboró un extenso análisis sobre los atentados que inevitablemente arrancaba con una autocorrección en toda regla que dejaba por los suelos la credibilidad del servicio español de inteligencia. Donde había dicho ETA debía leerse ahora terrorismo islamista. Del texto coránico encontrado en la furgoneta Renault Kangoo extrajo los siguientes mensajes: el atentado tenía carácter suicida y habría más ataques que no tendrían en cuenta la limitación de daños: el objetivo no era el Estado sino la población.

En otra nota informativa redactada el 16 de marzo sobre posibles relaciones entre presos de ETA y terroristas islámicos, se subrayaba que en los documentos incautados a la banda durante los años 2002 y 2003 no había aparecido ninguna conexión con el fundamentalismo islamista. «Por el momento no se han encontrado elementos que permitan afirmar que ha habido relación directa o indirecta entre ambos grupos». Una conclusión que se subrayó en otro documento elaborado el 7 de abril: «A la luz de las informaciones disponibles la autoría islamista queda establecida fuera de toda duda. No existe ningún indicio que permita sospechar la participación en los atentados —génesis ideológica, planificación, ejecución— de elementos ajenos al islamismo radical».

Todas las investigaciones serias sobre los comandos del 11M coincidieron en que se había formado a partir de tres núcleos: los restos de la célula de Abu Dahdah que habían eludido su detención en la operación Dátil, militantes del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y una banda de delincuentes comunes que se radicalizaron siguiendo la senda de Jamal Ahmidan el Chino. Algunos de ellos estaban sometidos a control policial desde hacía años, lo que hacía más inexplicable que no se reforzaran las medidas preventivas del terrorismo islamista. Como escribió José María Irujo en *El País*, la policía aplicaba el criterio de «ver, oír y callar» para no despertar al monstruo, hasta que se produjo el 11S y tocaron a rebato en Washington ante los múltiples vínculos entre sus autores y la célula de Abu Dahdah.

Fernando Reinares ha descrito con precisión forense en su libro *¡Matadlos!*, publicado en 2014, quién estuvo detrás del 11M y por qué se atentó en Madrid. A su juicio, la decisión de poner en marcha el

atentado es muy anterior a la participación española en la guerra de Irak. En su extenso relato considera que el marroquí Mustafá Maymouni fue quien creó en 2002, a instancias de Amer el Azizi, el núcleo original para el que convocó a los miembros de la célula de Abu Dahdah que habían eludido la cárcel. La finca de Morata de Tajuña, que durante meses sirvió de base de operaciones, fue alquilada inicialmente a su nombre. Detenido en Marruecos después de los atentados de Casablanca, le sucedería como líder del grupo Serhane Ben Abdelmajid el Tunecino, uno de los terroristas que terminó inmolándose en Leganés.

El también marroquí Youssef Belhadj fue otro de los integrantes del grupo. A él le atribuye Reinares que fue el primero en dejar constancia escrita de la fecha del atentado (11 de marzo) en el documento con el que compró en Bruselas una tarjeta prepago. Lo hizo el 19 de octubre de 2003, al día siguiente de la arenga de Bin Laden en la que llamaba a la guerra santa contra los ocupantes de Irak, España entre ellos. Faltaban varios meses para que Aznar convocara las elecciones del 14 de marzo. Belhadj alquiló a comienzos de marzo el piso de Leganés que saltó por los aires el 3 de abril. Él no estaba dentro y logró huir a Bélgica. Detenido finalmente en Siria en abril de 2005, fue extraditado a Marruecos cuatro años después. Un hermano suyo, Mimoun Belhadj, que vivía en la capital belga, había recurrido a la fecha de los atentados de Casablanca (16 de mayo) como día de nacimiento del falso titular de su teléfono.

El miembro más esquivo del grupo era Amer el Azizi, marido de la española Raquel Burgos, a quien Reinares atribuye la autoría intelectual del 11M. Integrante de la célula de Abu Dahdah, había eludido su detención en la operación Dátil, en noviembre de 2001, porque se encontraba en Irán. Su nombre figura por primera vez en la nota informativa del CNI del 12 de junio de 2003: las autoridades marroquíes lo buscaban en relación con los atentados de Casablanca. Pero en ese momento estaba en Afganistán.

Nacido en 1968 en Hedami, a unos setenta kilómetros al sur de Casablanca, Azizi emigró a España a finales de los ochenta y unos años después de establecerse en Madrid se adhirió a una congregación musulmana rigorista, donde llamó la atención de Abu Dahdah, que lo incorporó a su célula. Lo envió primero a formarse en el uso de armas y explosivos al campamento bosnio de Zenica y a Afganistán en el año 2000. A finales de 2001 soldados británicos encontraron en un campamento de Al Qaeda fichas de marroquíes residentes en España que habían sido enviados a entrenarse por Otman el Andalusi, sobrenombre de Azizi. En el registro que hizo la policía en su domicilio madrileño encontró cintas de vídeo y abundante material de propaganda de la yihad.

Azizi ascendió en la jerarquía de Al Qaeda hasta convertirse en el adjunto de Hamza Raida, virtual número tres de la estructura terrorista y jefe de las operaciones exteriores. Reinares relata con detalle que esta estrecha relación le costaría la vida el 1 de diciembre de 2005, cuando un misil Hellfire, disparado desde un avión estadounidense no tripulado Predator, alcanzó el inmueble en el que vivía en la localidad de Haisori, al noroeste de Pakistán. La CIA iba tras el rastro de Raida, pero entre los cuatro hombres que perecieron con él estaba Amer el Azizi. En septiembre de 2006 Washington compartió esta información con las autoridades españolas, a las que un mes más tarde pidió cuantos datos tuvieran sobre él: «Nuestra valoración actual es que Azizi estaba íntimamente involucrado con Raida en la planificación de operaciones globales en muchos frentes. Por tanto, el seguimiento de los contactos históricos de Azizi nos podría ayudar a descubrir planes en curso», dice la nota que Reinares reproduce en su libro.

Azizi habría empezado a idear un gran atentado en territorio español a finales de 2001, tras la detención de Abu Dahdah y gran parte de su célula. A juicio de Reinares la venganza por estas detenciones habría sido el móvil inicial que le llevó a reunirse en diciembre de 2001, en Karachi, con Abdelatif Mourafik, a quien encargó que contactara con los seguidores de Dahdah que se habían librado de la cárcel con el fin de llevar a cabo un atentado en España. Estos planes se consolidaron en Estambul en febrero de 2002, durante una conferencia que congregó a combatientes salafistas de Marruecos, Libia y Túnez. Acordaron que los actos de yihad no debían limitarse a zonas de conflicto armado, sino ampliarse a sus países de residencia, habitados por infieles o musulmanes sometidos a gobiernos renegados. Lo que Azizi planteó inicialmente como un acto de venganza se incorporaría luego a la agenda terrorista global de Al Qaeda una vez que Azizi se convirtió en el número dos de Hamza Raida.

Reinares rechaza que la decisión de atentar en España estuviera directamente vinculada a la participación española en la guerra de Irak, ya que se adoptó al menos un año antes, aunque los terroristas la explotaron luego para justificar el atentado. Las Brigadas Abu Hafs al Masri, que habían reivindicado la matanza en los trenes el propio día 11 sin merecer ningún crédito del Gobierno, emitieron el 15, un día después de las elecciones, un segundo comunicado en el que calificaban de insólita la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que había atribuido el atentado a ETA.

Osama bin Laden hizo público el 15 de abril de 2004 un mensaje grabado en el que emparejaba los atentados de Madrid con los ocurridos un año y medio antes en Nueva York y Washington: «Lo que ocurrió el 11 de septiembre y el 11 de marzo es que se os devolvió

vuestra propia mercancía».

Con todo, sus efectos políticos fueron contrapuestos. El 11S agrupó a los ciudadanos norteamericanos en torno al Gobierno de Bush, al que votaron para un segundo mandato después de haber ganado en 2000 mediante una discutida sentencia del Tribunal Supremo que ordenó parar el recuento de papeletas en Florida y le adjudicó una victoria decisiva en ese estado. El 11M, por el contrario, produjo en España una fractura social aún no soldada debido a que el presidente Aznar pretendió usar el atentado en beneficio de su partido con la falsa atribución de la autoría a ETA. Y de paso sembró de dudas la legitimidad de la victoria electoral del PSOE.

Los agujeros de la conspiración

Una vez perdidas las elecciones del 14 de marzo y establecido ya que fue una red islamista la que ejecutó los atentados de Atocha, Aznar necesitaba a toda costa minar la investigación oficial para salvar su honor, aunque fuera al precio de poner en duda la probidad de sus propios policías.

En un esclarecedor artículo publicado en *El País* el 5 de mayo de 2004 bajo el título «Enigmas del 11M», Javier Pradera escribía lo siguiente:

> Abandonada ya —salvo por algunos celotes inasequibles al desaliento— la fantasía de una *joint-venture* criminal de Al Qaeda y ETA, las sospechas de esos enredadores profesionales apuntan hacia una misteriosa conspiración urdida por servicios de inteligencia extranjeros —en connivencia con policías españoles— para dar la victoria al PSOE en las elecciones. La mayor dificultad de esta retorcida conjetura paranoide estriba precisamente en la imprevisibilidad de una relación causal entre el sangriento 11M y la derrota en las urnas de Rajoy. Si la matanza de Atocha no provocó un corrimiento de votos a favor del partido del Gobierno (en momentos tan dramáticos los ciudadanos suelen volverse hacia el Estado en busca de seguridad), la razón más probable es que a Aznar se le fue la mano en su torpe y descarada maniobra de manipular el atentado.

Casi veinte años más tarde Antonio Muñoz Molina indagaba en el mismo periódico sobre los orígenes de «La era de la vileza» en España, que sitúa en dos mentiras fundacionales: en 2003, la mentira sobre las supuestas armas de destrucción masiva almacenadas en Irak por Sadam Hussein; en 2004, la mentira del Gobierno de José María Aznar sobre los atentados del 11 de marzo en la estación de Atocha.

Muñoz Molina describe que Colin Powell, que tuvo que defender en Naciones Unidas «una invasión basada en argumentos que él sabía embusteros, se arrepintió siempre de una guerra que destruyó un país entero y provocó más de un millón de muertos». Tony Blair y George W. Bush expresaron no sin cinismo su contrición. «De aquel grupo de embusteros el único que no ha dado muestra alguna de remordimiento ni pedido disculpas ha sido José María Aznar. Sin duda, el aprendizaje de la mentira durante la guerra de Irak le fue muy útil cuando él, su Gobierno y sus afines atribuyeron a ETA los muertos del 11 de marzo, y siguieron alimentando los bulos y sembrando dudas conspirativas sobre esa autoría durante mucho tiempo».

Al cumplirse veinte años de la cumbre de las Azores, Aznar se mostraba «completamente orgulloso» de su decisión, por la que no

piensa disculparse. «El mundo está mejor sin Sadam Hussein, que era un dictador asesino, había tratado de conseguir armas nucleares e invadido a sus vecinos», declaraba al pódcast estadounidense *One Decision*.

Aznar contó como propagandistas de su paranoica conspiración con Pedro J. Ramírez, entonces director de *El Mundo*, y Federico Jiménez Losantos, conductor hasta 2009 del programa matinal de la COPE, la cadena de emisoras de la Conferencia Episcopal. Ambos pusieron sus respectivos medios al servicio de las teorías conspirativas que interesaban a Aznar, sin importar que su propio ministro del Interior, Ángel Acebes, hubiera declarado al *ABC* que, al menos hasta el día en que había dejado el ministerio, no había una sola prueba que permitiera adjudicar la autoría del 11M a ETA.

Ramírez, que se enorgullecía de no haberse dejado engatusar por la llamada de Aznar el día 11, comenzó el 18 de abril, día de la toma de posesión de Zapatero como presidente, una intensísima campaña bajo el título genérico de «Los agujeros negros del 11M», que encabezó treinta y nueve artículos a lo largo de tres años, la mayoría bajo la firma de Fernando Múgica. En ellos se pretendió anular la validez probatoria de los materiales encontrados en la furgoneta Renault Kangoo, que supuestamente habrían sido colocados allí de manera fraudulenta, o de la mochila desactivada en Vallecas, fundamental para determinar el tipo de explosivo utilizado y desechar el Titadyn. Según su versión embustera de los hechos, esa mochila no habría figurado entre los objetos recuperados por la policía en la estación de El Pozo. Al altavoz habitual de la COPE se sumó esta vez Mariano Rajoy, que calificó la *noticia* como «enormemente grave, porque podría anular el sumario judicial».

Visto el eco, que se traducía en una ventaja comercial respecto a su competidor *ABC* en el segmento de la derecha mediática, *El Mundo* apretó el acelerador: convirtió la inmolación de los siete suicidas de Leganés en una explosión provocada por la policía; hizo que los traficantes de explosivos asturianos aparecieran como una banda de confidentes manipulada por la Guardia Civil; atacó con especial saña al jefe de los Tédax, Juan Jesús Sánchez Manzano, cuyos informes habían sido esenciales para determinar el uso de Goma 2 Eco en las explosiones. El comisario de Puente de Vallecas, Rodolfo Ruiz, fue otra de sus dianas por la condición de garante de la custodia de la mochila desactivada. Su mujer no pudo soportar la presión y se suicidó un año después.

A cada *agujero negro* desvelado por *El Mundo* respondía el Partido Popular con una batería de preguntas parlamentarias de su portavoz Eduardo Zaplana, que les daba carácter de hechos probados, en una espiral que se prolongó durante los cuatro años de la primera

legislatura de Zapatero, cuya legitimidad aparecía cuestionada de forma más o menos explícita. El 28 de agosto de 2005 Ramírez publicaba bajo su firma un artículo en el que sostenía que «mi diagnóstico de que el 11M se engendró muy probablemente en el seno —o al menos en el regazo— de los aparatos del Estado adquiriría una creciente virtualidad». Y añadía una pregunta paranoide de imposible respuesta: «¿Y si lo hizo un policía?». Jiménez Losantos vociferaba en su programa de la COPE: «¿Por qué Zapatero vuelve a pactar con la ETA?, porque la ETA lo tiene cogido por los vagones».

Cabe recordar algunos episodios ridículos en aquella campaña de despropósitos, que indicaban la absoluta falta de rigor profesional del diario que dirigía Ramírez: como la casete de la Orquesta Mondragón encontrada en la furgoneta Renault Kangoo y que probaría la vinculación con ETA; o las páginas dedicadas al hallazgo de un envase de ácido bórico, de uso común en la limpieza casera, en el registro del domicilio de un etarra. Todo servía para alimentar la conspiración entre etarras e islamistas por más delirante que fuera el falso descubrimiento.

La gran traca de Ramírez llegaría el 2 de junio de 2009 con la publicación de un artículo grandilocuente, que tituló «Yo acuso», con el que pretendía emular a un Émile Zola que ciento once años antes había conseguido —junto a muchos otros— la revisión y posterior anulación de la condena como supuesto espía alemán del teniente coronel francés Alfred Dreyfus. Dictada la sentencia condenatoria de la trama del 11M por la Audiencia Nacional, convertida en firme por el Tribunal Supremo, el director de *El Mundo* acusaba de negligencia en distintos grados a dieciocho funcionarios, entre ellos el juez instructor, la fiscal del caso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, los tres miembros del tribunal sentenciador y casi todos los jefes policiales pasados y presentes que habían declarado en el sumario. Esta cadena de servidores públicos negligentes o prevaricadores habría impedido conocer la verdad de lo ocurrido a juzgar por la colección de falsedades que contenía el artículo de Ramírez. Cabe preguntarse por qué no elevó su acusación hasta los magistrados que habían firmado la sentencia de casación del Tribunal Supremo, que en general ratificaron la que había dictado la Audiencia Nacional.

Dos años después, con ocasión del séptimo aniversario del atentado, el director de *El Mundo* escribía: «Cada vez está más claro que hubo una trama policial que diseminó pruebas falsas para contribuir a que la percepción de que se trataba de un atentado islamista hiciera perder al PP las elecciones». Con ello sellaba su pacto con Aznar.

La obsesión de Ramírez no pudo evitar, sin embargo, que el tren de la conspiración empezara a perder unidades. Su fiel escudero Casimiro García-Abadillo, que le había sucedido en la dirección del periódico,

publicó con ocasión del décimo aniversario un cínico editorial en *El Mundo* en el que reconocía haber cometido errores al dar crédito a informaciones carentes de rigor, aunque acusaba de ello a los servicios secretos, por haber desorientado a los *conspiranoicos* hasta el punto de hacerlos aparecer como «una pandilla de iluminados». Mucho más crítico fue su sucesor en la dirección, David Jiménez, que llegó a la conclusión de que la matanza del 11M, causada por el terrorismo islamista, condujo al periódico a cometer un error que le marcaría para siempre.

En su libro *El director* escribe: «El Gobierno del Partido Popular, al que nos habíamos acercado en exceso —eran los días en que Jota jugaba al pádel con el presidente y acudía de invitado a la boda de su hija—, intentó culpar del atentado a la banda terrorista ETA» porque temía que una autoría islamista les haría perder las elecciones. «Jota creyó la versión del Gobierno y, cuando la realidad nos mostró que no era así, en lugar de rectificar nos embarcamos en una huida hacia delante que nos llevó a publicar durante años supuestas investigaciones para reafirmar nuestra teoría de una gran conspiración». Admite que gran parte de la redacción no le veía sentido a esa carrera, pero calló «mientras el diario convertía coincidencias en evidencias, se alimentaba de informaciones poco fiables de la facción policial que degeneraría en las cloacas, exageraba cualquier elemento que ayudara a defender su versión —y ocultaba datos que pudieran contradecirla—, se camelaba a testigos para que defendieran nuestras informaciones y buscaba la destrucción de la reputación de cualquiera, juez, policía o periodista, que no siguiera nuestra estela».

En los actos conmemorativos del décimo aniversario, el ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz, nombrado por Mariano Rajoy, proclamó que «ETA no fue la causante del 11M. Es evidente que fue ejecutado por terroristas yihadistas». Añadió que desde el punto de vista judicial «es un caso formalmente cerrado». El propio Pedro J. Ramírez admitiría que consideraba improbable la participación de ETA, aunque no la descartaba. El cardenal Antonio María Rouco Varela incluyó en la homilía del funeral una frase ambigua que los padres de la conspiración podían invocar a su favor: «Hubo personas dispuestas a matar inocentes a fin de conseguir oscuros objetivos de poder». Y para seguir alimentando la sospecha, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, se sumó a quienes proclamaban su deseo de «conocer toda la verdad», en línea con lo que seguía pregonando la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Pasados veinte años de la terrible matanza de Atocha, la teoría de la conspiración ha perdido protagonismo mediático, pero ha dejado secuelas terribles. Impresiona leer hoy el alud de *fake news* que

durante dos décadas arrasó *El Mundo* y la COPE, que sin la menor base probatoria mantuvieron viva la teoría de una conspiración universal para desalojar del poder al PP, en la que habrían estado involucrados dirigentes socialistas, jefes policiales, jueces, fiscales y muy diversos servicios de inteligencia. Según algunas encuestas, más de un tercio de la población sigue creyendo que ETA tuvo alguna participación en el 11M, porcentaje que puede llegar al 50 por ciento entre los votantes del PP. Algunas instituciones públicas (jueces, policías, fiscales) han sufrido un descrédito que se ha trasladado al conjunto del sistema democrático y muy especialmente a la clase política. Y una gruesa capa de sospecha ha contaminado al periodismo. En Estados Unidos y el Reino Unido los atentados del 11S y el 7J provocaron una catarsis ciudadana en torno a sus respectivos gobiernos. En España la respuesta unitaria duró apenas veinticuatro horas, para dejar paso luego a una polarización que no ha cesado de crecer.

SEGUNDA PARTE

Los embustes de Aznar sobre la autoría del 11M fueron castigados tres días después por los ciudadanos con la derrota de su partido en las urnas, que es la pena máxima en una democracia. No había sido una mentira provisional ni sobre una cuestión venial. Estaba vinculada a la mayor tragedia terrorista habida en nuestro país, con un resultado final de 193 muertos, sin que veinte años después quien presidía aquel Gobierno haya mostrado el menor atisbo de arrepentimiento ni pedido disculpas por el vendaval de mentiras que fabricó para evitar que la autoría yihadista se vinculara a su decisión de enviar tropas a Irak.

Fue la suya una falsedad que traía causa de otra anterior, la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, con lo que involucró a España en una guerra que causó un millón de muertos y que años después daría origen al Daesh (Ejército Islámico), organización terrorista desgajada de Al Qaeda que en su momento de máxima expansión llegó a controlar extensos territorios de Irak y Siria, en los que estableció un sanguinario Estado teocrático que transmitía por internet los asesinatos de sus rehenes occidentales.

Rodríguez Zapatero, a quien todas las encuestas daban como perdedor frente a Rajoy, se alzó con la victoria con más de once millones de votos, resultado que repetiría cuatro años más tarde, también contra pronóstico, después de una áspera legislatura en la que el Partido Popular intentó sin descanso deslegitimar al presidente. Visto el fracaso de su segunda tentativa presidencial, Rajoy decidió abandonar el camino trazado por Aznar sobre la responsabilidad de ETA en el 11M y centrarse en cuestiones más pedestres como la gran recesión que estalló en 2008 y que, a la postre, le llevaría a la Moncloa cuatro años más tarde con una mayoría absoluta que superó la de su mentor.

Salvo que se produzcan profundos cambios en la vida pública, y no solo en nuestro país, es improbable que el futuro cercano nos depare una penalización de la mentira política tan severa como la de aquel 14 de marzo de 2004, aunque Aznar nunca ha sido retirado del altar mayor de la derecha nacional, cuyo retablo preside como un pantocrátor. Los sucesivos dirigentes del PP lo sacan en procesión cada vez que se convocan elecciones, con efectos aparentemente taumatúrgicos para su causa, y los *think tanks* de la derecha dura occidental lo han incorporado a sus equipos asesores con unos elevados honorarios que lo han convertido en un hombre rico. Uno de sus principales valedores es el magnate de la comunicación Rupert Murdoch, dueño de la cadena norteamericana Fox, auténtica fábrica

de *fake news* y baluarte televisivo de Donald Trump.

La mentira es moneda corriente en política desde la más remota antigüedad. A partir del principio de que el fin justifica los medios, Maquiavelo consideró que era una herramienta útil, cuando no necesaria, para el príncipe. El *premier* conservador Benjamin Disraeli sostenía en la segunda mitad del siglo XIX que «la política es el arte de gobernar a la humanidad mediante el engaño». En tiempos modernos la filósofa Hannah Arendt ha reflexionado intensamente sobre este asunto, lo que le llevó a la conclusión de que «la política está en guerra con la verdad», algo que se ajusta como anillo al dedo de Aznar. Dicho de otra forma, la mentira ha terminado convirtiéndose en una de las materias primas con las que se fabrica la política. Nunca antes se había banalizado tanto la apelación a la mentira, que se ha convertido por lo demás en un arma arrojadiza permanente del debate público.

«Nadie ha dudado jamás —escribió Arendt— de que la verdad y la política no se llevan demasiado bien, y nadie, que yo sepa, ha colocado la veracidad entre las virtudes políticas. La mentira siempre ha sido vista como una herramienta necesaria y justificable para la actividad no solo de los políticos y los demagogos, sino también de los hombres de Estado».

En su opúsculo *La mentira en política*, que contiene sus reflexiones sobre «Los papeles del Pentágono» que en 1971 desveló el *New York Times*, registró cómo administraciones de muy distinto signo, desde Eisenhower hasta Nixon, pasando por Kennedy y Johnson, sometieron al pueblo norteamericano durante más de una década a un engaño sistemático sobre la guerra de Vietnam. Solo el sentido moral del funcionario Daniel Ellsberg y la determinación de la gran prensa impidieron que se impusiera la mentira por tiempo indefinido, hasta el levantamiento en su día del secreto oficial, que en este caso no protegía ningún interés estratégico, sino la pura soberbia de unos políticos que estaban siendo vapuleados por un país periférico pequeño y pobre.

Arendt menciona, sin embargo, dos casos notables en que los modernos creadores de imagen fueron capaces de imponer a sus propios contemporáneos versiones de la realidad manifiestamente falsas sobre acontecimientos de los que ellos habían sido testigos. Cita a dos hombres de Estado muy respetados, Charles de Gaulle y Konrad Adenauer, que construyeron sus políticas básicas sobre dos embustes: «Francia se presenta como una de las vencedoras de la última guerra y, por lo tanto, como una de las grandes potencias, mientras que Adenauer afirma que la barbarie del nacionalsocialismo afectó a un porcentaje relativamente pequeño del país».

Todas esas mentiras contienen un elemento de violencia. «Cuando

Trotski descubrió que nunca había desempeñado un papel en la Revolución rusa debió de comprender que se había firmado su sentencia de muerte». En sentido contrario menciona una conversación que el presidente francés Georges Clemenceau mantuvo en los años veinte con un representante de la República de Weimar sobre la cuestión de la culpa en el estallido de la Primera Guerra Mundial. «En su opinión ¿qué pensarán los futuros historiadores acerca de este asunto tan problemático y controvertido?», le preguntó su interlocutor alemán, a lo que respondió: «No lo sé, pero estoy seguro de que no dirán que Bélgica invadió Alemania».

El Antiguo Régimen nació sobre la falacia original de que la autoridad del rey procedía de Dios; por lo tanto, la suya era una palabra incontestable, que adquirió carácter sagrado cuando el emperador Constantino selló su alianza con la Iglesia. La democracia ateniense se había edificado a su vez sobre la existencia de cuatro castas, de las que solo una tenía capacidad para participar en la gobernanza de la ciudad, según el discurso asumido por el propio Sócrates. Fue la democracia moderna la que tuvo que buscar a tientas fórmulas para resolver en la medida de lo posible el perpetuo conflicto entre el poder y la verdad.

Arendt concluye que «la verdad, aunque resulte impotente y siempre salga derrotada en un choque frontal con los poderes establecidos», tiene una fuerza peculiar: hagan lo que hagan quienes ejercen el poder, son incapaces de descubrir o inventar un sucedáneo viable. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla. «Para eliminar de la historia el papel que Trotski desempeñó en la Revolución rusa no bastaba con matarlo y eliminar su nombre de todos los archivos: era necesario al mismo tiempo matar a todos sus contemporáneos y ejercer el control de las bibliotecas y los archivos de todos los países de la Tierra».

La era de la posverdad

La democracia tiene la singularidad de elegir cada equis años a sus gobernantes por votación (censitaria y masculina en un principio, universal desde hace un siglo), lo que la obliga a rastrear fórmulas para que la elección de los representantes del pueblo no esté basada en la falsedad permanente. Esto exige establecer contrapesos en el sistema político a fin de impedir que una facción o un líder se apropien del poder y establezcan la tiranía con voluntad de permanencia. En este balance los padres de la Constitución norteamericana asignaron a la prensa un papel central de vigilancia mediante una protección casi ilimitada de la libertad de expresión a través de la primera enmienda. El correlato en la Constitución española es su artículo 20, que consagra el derecho a transmitir libremente información y opinión a través de cualquier medio, que no podrá ser objeto de censura.

La historia del periodismo está repleta de falsedades, a menudo en busca del favor político y siempre en bien del negocio. Un ejemplo frecuentemente citado es el encargo que William Randolph Hearst hizo a un fotógrafo en 1898 para que viajara a Cuba a fin de enviarle fotos de la guerra entre España y Estados Unidos. Ante la sorpresa del periodista, que no veía ninguna guerra, el magnate le habría respondido: «Tú pon las fotos, que yo pondré la guerra». El 15 de febrero de 1898 se produjo en el puerto de La Habana la voladura del acorazado norteamericano Maine, en el que murieron dos oficiales y 266 marines y que dio origen a la guerra hispano-norteamericana. Aún hoy los historiadores discuten si el hundimiento fue debido a la explosión de una mina o si fue un sabotaje interno para provocar el conflicto militar.

La rivalidad entre los medios ha servido al menos para vislumbrar un trasunto de la realidad entre versiones contradictorias. Es dudoso que este balance esté garantizado en el nuevo universo emergente de las redes sociales, donde ya funciona el axioma de que las falsas noticias (*fake news*) se expanden seis veces más rápido que las verdaderas, tentación casi irresistible para los políticos populistas y los medios más desvergonzados.

La tecnología digital ha creado algunos artefactos inimaginables en el mundo analógico: los *bots*, capaces de replicar un bulo miles de veces y en todas las latitudes con ayuda de una inteligencia artificial

en constante desarrollo. Su presencia masiva en las redes, unida a la actividad de los *troles* que operan desde el anonimato, distorsiona la conversación pública y lleva a no pocos analistas a preguntarse si la libertad de expresión debe amparar también a estas herramientas digitales construidas sobre algoritmos cuya estructura desconocen los usuarios. Hasta el día de hoy los grandes conglomerados, que cuentan con cientos de millones de usuarios, han sorteado sin grandes costes las escasas regulaciones legales, protegidos bajo el escudo de que no son estrictamente creadores de contenidos. La línea roja que separaba lo falso de lo real se ha borrado hasta el punto de que todo es opinable, incluso la realidad factual o aquellas cuestiones sobre las que existe consenso científico, como la crisis climática causada por el calentamiento global, que en boca de Trump se transforma en un cuento chino para reducir la competitividad de la industria norteamericana.

Las redes sociales, que nacieron hace veinte años —Mark Zuckerberg creó Facebook en febrero de 2004—, se han convertido en un territorio con presencia cada vez más dominante de las corrientes populistas de carácter autoritario. A través de ellas se expandió con fuerza imparable el estallido democratizador de la Primavera Árabe, pero también alentaron el genocidio de la minoría musulmana rohinyá en Myanmar —25.000 muertos y un millón de desplazados— después de una persecución sistemática a través de las páginas de Facebook (Meta en la actualidad), en una reedición digital del rol que había desempeñado la radio de las Mil Colinas en la matanza de los tutsis en Ruanda.

Uno de los mayores escándalos asociados a las redes saltó en 2018 cuando se hizo público que Cambridge Analytica había tenido acceso a las cuentas de más de ochenta y siete millones de usuarios de Facebook, cuyos datos le permitieron entre otras cosas trazar perfiles ideológicos de los titulares, que serían ampliamente utilizados sin su conocimiento en la campaña de Trump en 2016 y para el referéndum del Brexit. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos le impuso una multa de cinco mil millones de dólares por violación de las reglas de privacidad. Mark Zuckerberg por su parte acordó un pago adicional de setecientos veinticinco millones de dólares para finiquitar una demanda colectiva de usuarios.

Más allá de sus diferencias, los medios analógicos consiguieron durante el siglo XX unificar y moderar la conversación pública. Las redes han hecho añicos el espejo y creado múltiples universos en los que uno se puede mover entre afines, sin cruzarse con adversarios y, por tanto, sin tener que debatir con nadie. Todo lo más, cruzando insultos con cualquier disidente. Un ecosistema capaz de convertir realidades inventadas en verdades incontrovertibles, una pista

formidable para políticos carentes de todo compromiso con la verdad.

Donald Trump fue en 2016 el mesías de esta nueva realidad. *Oxford Dictionaries* eligió como palabra de ese año «posverdad» (*post-truth*). Después de haber conseguido una gran fama con su programa de televisión por cable *The Apprentice,* había intentado entrar en política en 2008 sobre la base de una falsedad: que Obama había nacido en Kenia y por tanto no tenía derecho a ser candidato presidencial. En 2011 avanzó un paso más y le acusó de haber falseado su acta de nacimiento y no se apeó de este mantra hasta bien avanzada la campaña de primarias en 2016.

Durante la campaña violó todas las convenciones existentes para garantizar una disputa electoral equilibrada: de su oponente Hillary Clinton dijo que debería estar en prisión por el uso de un servidor privado de correo electrónico mientras fue secretaria de Estado; se autoproclamó como la voz del americano de a pie contra la candidata de las élites; sus lemas centrales fueron «America First» y «Make America Great Again» frente a una Clinton a la que calificó reiteradamente de antipatriota. Se negó a asumir el compromiso de respetar el veredicto de las urnas, y de hecho nunca aceptó que su rival le hubiera ganado en voto popular. Su jefe de estrategia, Steve Bannon, dijo de él que «miente sobre cualquier cosa con tal de ganar». Uno de los presentadores estrella de la CNN, Daniel Dale, dijo que «tratar de resumir las mentiras más notables de la presidencia de Donald Trump es como tratar de recoger los trozos de basura más destacados del estercolero de la ciudad».

Su inesperada victoria fue jaleada por los partidos europeos de extrema derecha, que se veían al fin encaramados a la cima de la más poderosa democracia del mundo. En palabras del factótum húngaro Víktor Orban, la elección de Trump indicaba que Estados Unidos había completado la transición de una «no democracia liberal» a una «democracia real». Consideraciones de este tipo han llevado al analista alemán Jan-Werner Müller, experto en populismo político, a objetar que se defina al régimen húngaro como una democracia iliberal, porque supone reconocerle su condición democrática además de otorgarle cierto liderazgo en el combate al liberalismo, que para sus votantes es todo un timbre de honor puesto que se trata de una doctrina política que aborrecen.

Trump inauguró su mandato afirmando, contra todas las evidencias gráficas, que su toma de posesión había sido la más concurrida de la historia. Y cerró el cuatrienio con una mentira de trágicas consecuencias: que le habían robado las elecciones. Cinco personas murieron en el asalto al Capitolio que alentó el 6 de enero de 2021 para evitar que el Congreso, presidido por su vicepresidente Mike Pence, a quien calificó de «demasiado honrado» para estar en política,

sancionara la victoria de Biden. Por su actuación de ese día será sometido a juicio penal en plena campaña de primarias. El Gobierno de Georgia le ha acusado igualmente de haber intentado alterar con trampas el escrutinio de ese estado, que al final se decantó a favor de los demócratas por un estrecho margen.

En su último año de mandato Trump se topó con la pandemia del coronavirus, que en todo momento trató de minimizar y la equiparó a la gripe, con un terrible balance de 235.000 muertos hasta el 3 de noviembre de 2020, día de las elecciones presidenciales que ganó Joe Biden. En conversación con Bob Woodward, en febrero de ese año, reconoció que la COVID era mucho más grave de lo que venía diciendo, pero que lo hacía para no desmoralizar a la población. En esta línea afirmó que la pandemia desaparecería con el calor, como la gripe, con lo que alimentó una corriente negacionista que rechazaba las vacunas y el uso de mascarillas.

The Washington Post cifró en más de 22.000 las mentiras que Trump difundió durante su mandato, lo que da un asombroso promedio diario de quince, imposible de contrarrestar eficazmente por muchos sistemas de *fact checking* que se dediquen a ello. Con esta inusitada capacidad de crear embustes ha monopolizado el debate público sin que los grandes medios hayan acertado a conducirlo a las cuestiones de verdad relevantes para el público. El instrumento preferido para propagar sus embustes fue Twitter (la actual X), una red que lo mismo le servía para introducir mensajes falsos, atacar sin piedad a sus oponentes o anticipar medidas reales de gobierno.

Populismo y mentiras

El historiador británico Richard Evans, uno de los grandes especialistas en el nazismo, declaraba en una reciente entrevista a *El País* que los populistas de hoy han ido más lejos que Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del III Reich, en la falta de escrúpulos para distorsionar la verdad. Considera que las redes sociales constituyen un riesgo para las democracias, porque la falta de regulación facilita la difusión de teorías conspiratorias que menoscaban la confianza en las instituciones y en la verdad. «Cuando la gente empieza a creer que no hay una verdad objetiva, solo opinión, se abre la puerta a la destrucción de la sociedad, porque solo podemos existir si podemos descubrir qué es la verdad».

El académico Yascha Mounk atribuye el crecimiento exponencial de la ultraderecha en las democracias occidentales a tres factores: el estancamiento económico, que después del despegue de los «treinta gloriosos» de la posguerra (1945-1975) parece condenar a las nuevas generaciones a vivir peor que sus padres; el desplazamiento de los medios de comunicación tradicionales, que tenían un efecto moderador del debate público, por unas redes sociales cada vez más dominadas por sectores radicales de ultraderecha, y la apertura de un debate identitario intenso por efecto de una inmigración que a juicio de la derecha nativista puede alterar el carácter nacional.

Tres hechos habrían sido determinantes en esta transformación: en primer lugar el 11S, que supuso el fin abrupto de unos años noventa optimistas, apoyados por una fe contagiosa en la democracia desde la caída del Muro de Berlín en 1989 y la aceleración del proceso de construcción europea, para dejar paso a una etapa oscura, marcada por la guerra al terrorismo, una obsesión por la seguridad y la islamofobia, con la invasión de Irak como un hecho devastador. El segundo factor sería la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, detonante de la más grave crisis vivida por el capitalismo desde 1929, que en el caso concreto de Grecia dio pie a la aberración de que la UE, de inequívoca vocación democrática, obligara en 2015 al Gobierno de Tsipras a engullir un durísimo plan de ajuste días después de que los griegos hubieran rechazado en referéndum un texto menos exigente, lo que llevaba a preguntarse sobre la capacidad real de la democracia de imponerse al mercado. Por último, el verano de 2015 registró una avalancha migratoria sin precedentes en el mar Egeo,

donde se dieron cita más de un millón de refugiados que huían de las guerras de Oriente Próximo (Irak, Afganistán, Siria) y de las hambrunas de África (Eritrea, Sudán, Kenia, Nigeria, Libia), estrechamente vinculadas a procesos de desertificación, cambio climático y guerras tribales.

Una triple ansiedad, económica, de inseguridad e identitaria, activó unas emociones colectivas que la extrema derecha ha acertado a explotar en un clima generalizado de incertidumbre y miedo, agravado por los continuos recortes del estado de bienestar desde los años ochenta por efecto de la revolución neoliberal de Thatcher y Reagan. La incapacidad de los partidos tradicionales de gestionar las sucesivas crisis horadó la confianza en ellos hasta el punto de que muchos giraran la vista hacia unos nuevos líderes atípicos que les proponían soluciones fáciles, sin complejidades intelectuales, de puro sentido común, que no se aplicaban simplemente por la corrupción de los políticos profesionales.

El profesor norteamericano Larry Diamond, uno de los mayores expertos sobre la evolución de la democracia, sostiene que desde hace más de quince años se está registrando un retroceso continuado de los regímenes democráticos en el mundo: en 2006 el 62 por ciento de los países se gobernaban mediante democracias, y ese porcentaje había descendido al 51 por ciento en 2017. Entre las razones de esta decadencia cita la creciente desigualdad económica, la disrupción de unas redes sociales que tienen un elevado impacto polarizador, la pérdida de confianza de las democracias en sí mismas y «el surgimiento de poderosos actores autoritarios, particularmente China y Rusia, con sus contranarrativas sobre la bancarrota de las democracias liberales y la superioridad de los regímenes autoritarios».

Dos acontecimientos habrían añadido a su juicio una dosis adicional de estrés: la invasión estadounidense de Irak en 2003, que considera un error estratégico de largo alcance, y la crisis financiera de 2008, generada por fallos en la regulación y una corrupción muy extendida en la industria financiera. La globalización ha sido otro factor que ha contribuido a aumentar la desigualdad y a alejar a las élites gobernantes de las preocupaciones de la mayoría social.

A la pérdida de confianza ha contribuido también la constante sustracción al debate democrático de temas de vital importancia para el bienestar general. El ejemplo más obvio es la política monetaria, que reside en bancos centrales cuyos estatutos establecen una muralla china con el poder político y cuyos directivos están fuera del debate político aunque sus decisiones sobre el tipo de interés repercuten directamente sobre el coste de las hipotecas, que en economías fuertemente endeudadas castiga sobre todo las rentas más débiles. Por no hablar del descontrol de instrumentos financieros como los

derivados, que está en la base de la crisis de 2008.

Otros sectores de primer orden, desde la regulación de la industria nuclear a la vigilancia de los mercados de valores o las telecomunicaciones, han pasado a órganos tecnificados, cuyo único vínculo con la política democrática suele ser el nombramiento de sus titulares, que con frecuencia responde a intereses clientelares de los gobernantes. A esto se suma una infinidad de asuntos regulados por tratados internacionales, que en el caso de la Unión Europea se traduce en una creciente cesión de soberanía a ese complejo denominado Bruselas, universo de funcionarios que decide sobre aspectos cruciales de la vida de los europeos sin que medie un auténtico debate democrático. ¿Por qué interesarse por la democracia si esta es impotente para conducir el rumbo de la economía, que a la postre es lo que más interesa a la mayoría?

Esta tensión se tradujo en 2016 en el Brexit, el abandono de la UE por el Reino Unido a través de un referéndum que el *premier* conservador David Cameron había convocado para ratificar la permanencia. Las empresas de sondeos erraron en su pronóstico porque no fueron capaces de detectar el cambio subterráneo que se estaba produciendo en los sectores más populares, a través de una campaña en redes plagada de mentiras sobre los efectos taumatúrgicos que tendría el abandono de la UE para una economía británica en estado catatónico. Dominic Cummings, futuro jefe de gabinete del primer ministro Boris Johnson, que terminaría despidiéndolo, fue el cerebro que a través de internet vendió a los británicos el gran embuste del paraíso que alcanzarían si optaban por la papeleta «Leave».

Sectores crecientes de la población se desinteresan de la democracia porque no resuelve sus problemas y se escoran hacia opciones autoritarias, al percibir que el crecimiento de las últimas décadas derivado del globalismo y de la expansión de la tecnología digital ha ido a enriquecer aún más a las minorías superricas, sin beneficiar al común de los ciudadanos, cuyas rentas permanecen estancadas. Los *millennials* toman conciencia de que van a vivir peor que sus padres y se muestran cada vez más indiferentes ante un sistema que no resuelve sus necesidades.

El bipartidismo salta por los aires

El bipartidismo que había gobernado la política española desde la transición, a menudo en un clima de creciente crispación, entró en estado de shock el 11M por la terrible dimensión del atentado y la acumulación de mentiras propaladas por el presidente Aznar sobre sus autores, pero consiguió prolongar su agonía hasta 2015, año en que se produjo una floración de nuevos partidos que puso término, tal vez por una generación, a las mayorías absolutas y a la alternancia obligada entre los dos partidos hegemónicos.

La última legislatura de Felipe González (1993-1996) ya fue un anticipo de los tiempos broncos que se avecinaban. Aznar, que no había conseguido materializar en 1993 la victoria que le auguraban las encuestas, se subió a la ola de los innumerables escándalos que contaminaban al Gobierno socialista (Filesa, GAL, Roldán, Ibercorp, gobernador del Banco de España, Boletín Oficial del Estado) y elaboró legítimamente un discurso agresivo que culminó en el debate del estado de la nación de 1994 con una frase memorable: «Váyase, señor González».

En sus memorias se queja de haber tenido en contra en 1993 a Polanco, Asensio y el conde de Godó, en lo que dio en llamarse el pacto de los editores, pero silencia que tres años después contó con una extensa coalición mediática, corroborada por algunos de sus representantes más reconocibles, como Luis María Anson y Pedro J. Ramírez. Ambos se atribuyeron parte del mérito en la victoria del líder conservador por trescientos mil votos en 1996 y cobraron por ello una cuantiosa factura en sus respectivos medios en concepto de publicidad institucional.

En su primer mandato, en el que intentó destruir el Grupo Prisa con el montaje de una causa judicial por los depósitos de los descodificadores de Sogecable, Aznar hizo, pese a todo, un cierto esfuerzo de moderación a través de un pacto con nacionalistas vascos y catalanes, que parecía augurar un ciclo de convivencia política razonable. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, lo simplificó de forma expresiva cuando dijo tras su pacto con el PP que Aznar les había dado en cuatro días más que González en trece años.

La mayoría absoluta conseguida en 2000 frustró esta expectativa. Aznar se vio al fin reconocido y consideró que tenía una oportunidad histórica para cambiar el rumbo de España y colocarla en la mesa de

las grandes potencias. La oportunidad se la brindó el 11S y la búsqueda por parte de George W. Bush de apoyos internacionales para responder al desafío de Al Qaeda. Ante la negativa de Alemania y Francia a participar en la guerra de Irak, Aznar optó por ocupar ese vacío y convertirse en aliado incondicional de Washington junto a Tony Blair. Para ello no dudó en meter a España en la guerra de Irak con la mentira de las armas de destrucción masiva que tenía Sadam Hussein y contra la multitudinaria oposición de los ciudadanos españoles. Al fin podía sentarse junto al único emperador realmente existente en ese momento y fotografiarse a su vera en las Azores, que como ya se ha dicho antes él valora como el momento de mayor relevancia internacional de España.

El 11M cambió nuestra historia. A tres días de las elecciones generales, a Aznar ya no le convenía tanto la cercanía de Bush, por si alguien vinculaba el mayor atentado de nuestra historia con la participación en la guerra de Irak, y literalmente fabricó la autoría de ETA sin ninguna prueba. En su obra *La mentira os hará libres*, Fernando Vallespín escribe: «La proximidad de las elecciones y la sorprendente confianza en que una responsabilidad etarra beneficiaría las expectativas de su partido le llevó a adoptar la peor decisión posible, mentir sobre algo que había desgarrado al país». Esto propició al fin la victoria de la oposición, que nunca fue aceptada del todo por el PP, empeñado durante la primera legislatura de Zapatero en cultivar el veneno de la ilegitimidad.

Pero fue la década siguiente la que marcaría un rumbo de colisión en nuestra vida política con cuatro acontecimientos sucesivos. En primer lugar, la gran recesión registrada a escala planetaria tras la bancarrota de Lehman Brothers en septiembre de 2008. El Gobierno de Zapatero, que acababa de repetir victoria electoral con récord absoluto de papeletas, fue incapaz de evaluar en sus justos términos la dimensión de la crisis y dos años después se vio forzado a aplicar bajo presión de la UE un severo plan de recortes sociales que, entre otras cosas, incluyó la congelación de las pensiones y los sueldos de los funcionarios. En agosto de 2011, con la legislatura virtualmente liquidada, PSOE y PP firmarían su último gran acuerdo: una reforma constitucional que blindaba el pago de la deuda elevándolo al máximo rango de las obligaciones del Estado. Era una exigencia expresada por carta del presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, cuyo contenido se ocultó al Parlamento y que solo conocimos años después a través de las memorias de Zapatero. Esta reforma constitucional, aprobada sin consulta popular, mediante un procedimiento parlamentario de urgencia, finiquitó las casi nulas perspectivas electorales que tenía el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ni siquiera el final del terrorismo de ETA, anunciado el 20 de octubre de 2011 a través de un comunicado que se publicó en las ediciones digitales de los diarios *Gara* y *Berria*, atemperó un clima político en estado de ebullición. La organización terrorista proclamó su compromiso «claro, firme y definitivo» de «superar la confrontación armada». Zapatero destacó que se trataba de un triunfo sin condiciones del Estado de derecho y agradeció la acción tenaz y eficaz de los cuerpos de seguridad, el trabajo de los distintos ministros del Interior y la colaboración prestada por Francia. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que como titular de Interior hasta unos meses antes había tenido especial protagonismo en el final de la banda, declaró que era un día «para celebrar la gran victoria de la democracia». Incluso su oponente Mariano Rajoy admitió que era una gran noticia porque no se había hecho ninguna concesión política.

No le secundaron, sin embargo, algunos dirigentes de su partido, especialmente el exministro Jaime Mayor Oreja, que aún hoy mantiene que fue ETA la vencedora real de esta guerra. Varias asociaciones de víctimas del terrorismo y sindicatos policiales expresaron su recelo ante las concesiones que a su juicio habría hecho el Gobierno durante las conversaciones que mantuvo con la banda en Ginebra y Oslo. Fue llamativo el silencio de Aznar, cuya estrategia antiterrorista tanto había contribuido a arrinconar a la banda.

Esta desconfianza de fondo se ha agudizado durante el gobierno de Sánchez, que ha contado con el voto de Bildu para la aprobación de algunas leyes. Una noticia soñada desde el inicio de la transición se ha convertido en permanente motivo de sospecha contra el PSOE, que a día de hoy se verbaliza en el ofensivo lema «que te vote Txapote», lanzado contra Pedro Sánchez en sede parlamentaria por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que ha tenido gran seguimiento en redes sociales y en toda suerte de manifestaciones contra el Gobierno. El terrible atentado del 11M había anulado de hecho cualquier posibilidad de que el terrorismo pudiera utilizarse como arma política, lo que condujo a la disolución de ETA el 3 de mayo de 2018.

En el ámbito internacional el final de ETA fue saludado con unanimidad, primero por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, al que siguieron el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y los mandatarios de Estados Unidos, China y Reino Unido, entre otros.

Rajoy consiguió en diciembre de 2011 una mayoría absoluta superior a la de Aznar, lo que no le ahorró una legislatura de pesadilla: el paro llegó a superar el 25 por ciento, lo que le hizo aprobar una ley de trabajo que reducía drásticamente la capacidad negociadora de los sindicatos y abarataba los despidos; la crisis de las

cajas de ahorro obligó a un rescate bancario que costaría al erario público más de cincuenta mil millones de euros; para reducir el déficit público aplicó severos recortes en educación y sanidad y subidas de impuestos que contradecían el discurso económico del PP, bordeando la bancarrota por la continua presión de los mercados internacionales sobre la prima de riesgo.

En este clima de pesimismo social empezaron a aflorar múltiples escándalos de corrupción que llevaban varios años bajo investigación judicial. El más notorio, el caso Gürtel, que Rajoy había intentado desviar en febrero de 2009 proclamando, con toda su junta directiva detrás, que no era una trama del PP, sino una trama contra el PP. Los acusados más notorios, que cumplen largas condenas de cárcel, habían asistido como invitados a la boda de la hija de Aznar en El Escorial.

El momento estelar se produciría en enero de 2013, con la publicación por *El País* de los papeles de Luis Bárcenas, gerente del partido durante cerca de veinte años y ascendido por Rajoy a tesorero en 2008. Durante esa larga etapa, la mayoría bajo la presidencia de Aznar, había anotado con caligrafía desmañada los movimientos de la caja B del Partido Popular, con sus correspondientes estadillos de ingresos y gastos: comisiones por licencias de obras, pagos por la reforma de la sede de Génova, gastos de campañas electorales que eludían el control del Tribunal de Cuentas, pagos de sobresueldos a dirigentes del partido (con un J. M. que se asimilaría a José María Aznar y un M. Rajoy del que este nunca se daría por aludido).

Era como si de repente se hubieran desbordado unas cloacas incapaces de contener la porquería acumulada. Para detener el tsunami que había desatado Bárcenas, el PP destruyó físicamente su ordenador y organizó desde el Ministerio del Interior una operación de espionaje de su antiguo tesorero, que está sometida a investigación judicial. La sentencia del Supremo sobre el caso Gürtel, que condenó al Partido Popular como partícipe a título lucrativo, sería la base de la moción de censura que Pedro Sánchez presentó en mayo de 2018 contra Mariano Rajoy, que le costó a este la presidencia y a Sánchez la enemiga de por vida.

Aznar compareció ante la comisión de investigación creada por el Congreso para analizar la financiación ilegal del PP, en especial su caja B, pero su testimonio se solidificó sobre un desconocimiento total de la contabilidad paralela y la ausencia de atribuciones en el manejo de las cuentas. Lo mismo que declararía en 2021 cuando compareció como testigo por videoconferencia (protegido por una mascarilla blanca, aunque declaraba desde su domicilio) en el segundo juicio que seguía la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.

En el otro lado del arco político el PSOE tuvo también su propio viacrucis con el caso de los ERE andaluces, con dos presidentes de la

Junta de Andalucía a los que el Supremo condenó por abusos continuados durante una década en la asignación de fondos de los expedientes de regulación de empleo, que sumaban un importe cercano a los setecientos millones de euros.

A la crisis que vivían los dos partidos mayoritarios vinieron a sumarse varios escándalos asociados a la monarquía, que derivaron en la abdicación del rey Juan Carlos el 19 de junio de 2014 a favor de su hijo Felipe. En abril de 2012, en medio de una crisis económica que amenazaba con una intervención directa de la UE, el rey sufrió un accidente mientras participaba en una cacería de elefantes en Botsuana junto a su amante Corinna Larsen. La posterior publicación de sus negocios con la monarquía saudí, que le habían reportado ingresos millonarios nunca declarados a la Hacienda española, abrió una brecha imposible de minimizar en la ejemplaridad exigible a la institución monárquica. Esta ya se había visto dañada colateralmente por el escándalo Nóos, un caso de corrupción protagonizado por el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, que sería condenado a cinco años y diez meses de prisión, y que obligó a la hija del rey, la infanta Cristina, a sentarse en el banquillo de los acusados y a pagar 136.000 euros como responsable civil a título lucrativo.

La suma de corrupción política y crisis económica, con un paro desbocado y los salarios congelados, dio origen en mayo de 2011 al movimiento 15M, una singular movilización asamblearia de izquierda, sin siglas de partido, que durante meses se aposentó en la madrileña Puerta del Sol, que tuvo varias réplicas transfronterizas como el movimiento Occupy Wall Street en Nueva York, y que sobrevivió durante tres años bajo formatos de marchas, manifestaciones multitudinarias y acampadas en plazas públicas. Finalmente alumbró un extenso documento reivindicativo, que en buena parte serviría en enero de 2014 como base doctrinal de un nuevo partido político denominado Podemos, que en su fulgurante debut en elecciones generales obtendría al año siguiente 71 escaños, a solo 19 de un PSOE jibarizado que lideraba Pedro Sánchez. En esos comicios saltaría también a la escena nacional un partido de procedencia catalana y vocación centrista, Ciudadanos, que tuvo 40 escaños, en su mayoría procedentes del centro derecha, y que ocho años después ha desaparecido de la escena política.

Ante la evidente carencia de apoyos parlamentarios de otras formaciones, el líder del partido más votado, Mariano Rajoy, renunció a la investidura que le propuso el rey. Lo intentó luego Pedro Sánchez en un más difícil todavía, que necesitaba el apoyo simultáneo de Podemos y Ciudadanos. Por primera vez se repitieron elecciones el 26 de junio, en las que debutó Vox, surgido del útero del Partido Popular para reclamar en la extrema derecha un espacio que nadie había

reivindicado hasta entonces y que heredaba muchas resonancias del franquismo. En su primera comparecencia no llegó a los cincuenta mil votos en toda España, pero tres años más tarde, en abril de 2019, obtenía 24 escaños con 2,6 millones de papeletas. En noviembre de ese mismo año llegaba a su techo con un millón más de votos y 52 diputados, que lo convirtieron en el tercer grupo del Congreso.

Los dos partidos hegemónicos habían acumulado el 83 por ciento del voto popular en los comicios de 2008, en 2011 perdieron 10 puntos y cayeron al 54 por ciento en 2015. Los nuevos actores habían entrado en escena dispuestos a jugar un papel protagonista, a ser posible entrando a formar parte del Gobierno, algo que Podemos conseguiría después de las segundas elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019, en las que por primera vez PSOE y PP sumaron menos del 50% por ciento del voto.

Polarización extrema

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt establecen en su obra *Cómo mueren las democracias* dos reglas no escritas para la supervivencia del sistema: la tolerancia mutua y la contención institucional. Ambas están sometidas a un fuerte estrés en la política española. La tolerancia exige reconocer al adversario que tiene el mismo derecho que uno mismo a competir en las elecciones. Este principio se socava cuando se presenta al oponente como «vendepatrias», un usurpador que pone la nación en peligro. Lo hizo Trump con Hillary Clinton. Lo ha insinuado Feijóo con su promesa electoral de derogar el sanchismo, y su afirmación posterior de que Sánchez cometerá un «fraude electoral masivo» si aprueba una amnistía a los involucrados en el *procés* a cambio de sus votos en la investidura. El PP mantiene así la ruta abierta tras la victoria de Zapatero en 2004 y, ahora como entonces, es Aznar el principal agitador con su discurso de que está en juego la destrucción de España.

Deslegitimar al adversario político es el camino seguro hacia el descrédito de todo el sistema. La democracia se convierte así en un artefacto de eficiencia discutible, que puede ser sustituido con ventaja por autócratas fuertes que supuestamente tienen mejores credenciales para defender a la patria, incluso para conducir la economía, aunque sea a costa de que algunas libertades se vayan por el desagüe. El mundo se está llenando así de líderes fuertes que llegan al poder por las urnas —amañadas o no— y acto seguido crean las condiciones para perpetuarse en él, preferiblemente mediante reformas constitucionales que eliminan la limitación de mandatos y los contrapesos institucionales, sometiendo al arbitrio del Ejecutivo toda la arquitectura política, especialmente la administración de justicia.

Vladimir Putin es tal vez el ejemplo más señero. Sucedió a Boris Yeltsin en la presidencia en el año 2000 y no se ha apeado del poder desde entonces, salvo el paripé del cuatrienio de Medvedev (2008-2012), al que cedió la presidencia para convertirse en su primer ministro. En sus inicios se presentaba como un presidente democrático. Nadie duda hoy de que es un acabado ejemplo de autócrata que cada cuatro años monta una farsa electoral. Recep Tayip Erdoğan lleva más de veinte años en el poder en Turquía, inicialmente como primer ministro y luego como presidente; Narendra Modi encadena triunfos electorales en la India desde 2014, con un agresivo

programa de nacionalismo hindú que discrimina a las minorías étnicas; el tándem Chávez-Maduro ha ocupado sucesivamente la presidencia de Venezuela desde 1999; Daniel Ortega lleva camino de convertirse en presidente vitalicio de Nicaragua después de llegar al cargo por elecciones en 2007. Son apenas unos ejemplos de distinto signo ideológico que han optado por apoyarse en las urnas para establecer regímenes autocráticos. La férrea dictadura comunista de Xi Jinping en China termina por colorear un mapa del mundo en el que dos tercios de la humanidad viven bajo regímenes autoritarios.

La contención institucional que mencionan Levitsky y Ziblatt obliga a los líderes democráticos a no copar las instituciones en momentos de triunfo. Franklin D. Roosevelt intentó sin éxito —debido a la contención de su propio partido— ampliar a quince el número de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos para sortear su rechazo a múltiples leyes del *New Deal.* En sentido contrario, el Partido Republicano impidió a Obama durante su último año de mandato cubrir legítimamente en el Supremo la vacante creada en febrero de 2016 por el fallecimiento del magistrado Antonin Scalia, nombrado por Ronald Reagan en 1986, al que su origen conservador no impidió erigirse en fiel de la balanza del Alto Tribunal durante treinta años. Trump desequilibró por completo la composición del Supremo, que al término de su periodo presidencial estaba formado por seis magistrados conservadores y tres liberales.

El partido polaco Ley y Justicia recurrió a la ampliación del Tribunal Constitucional para llenarlo de magistrados leales que garanticen el sello de constitucionalidad a sus leyes, un camino que también ha seguido Orban en Hungría. Jan-Werner Müller llega a la conclusión de que «Europa central está viviendo un 1989 a la inversa», envuelto en un nacionalismo étnico y cultural agresivo. Yascha Mounk opina que esta última oleada nacionalista ha venido para quedarse y que debemos acostumbrarnos a vivir con él y luchar por hacerlo compatible con la defensa de derechos individuales vinculados a la condición de ciudadanía, no a la pertenencia a tal o cual grupo étnico o político.

En España el PP ha bloqueado durante cinco años la renovación del Consejo del Poder Judicial para mantener en ese órgano una mayoría absoluta que perdió en el Parlamento en 2015, bajo el peregrino argumento de que el PSOE debe comprometerse previamente a modificar el sistema de elección de sus doce miembros judiciales, algo que no hizo el PP cuando gozó de mayoría absoluta con Aznar y con Rajoy. Es más, el método vigente de elección fue aprobado a propuesta del ministro popular de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. El resultado de todo ello es una creciente polarización política que se manifiesta en dos bloques estancos, cada día más alejados e incapaces

de compartir acuerdos sobre materias para las que la Constitución exige mayorías cualificadas. El acuerdo de 2011 entre Zapatero y Rajoy para la reforma constitucional referida a la deuda pública parece propio de otro siglo.

Los medios de comunicación, digitales y analógicos, desempeñan un importante papel en este proceso de polarización. En la estela del 11M, Vallespín adjudica más relevancia que a la propia mentira de Aznar al intento de un sector de la prensa de derechas por convencer a sus lectores de que la acusación a ETA era todo lo más una mentira parcial. El atentado habría obedecido a una siniestra conspiración dirigida a expulsar al PP del poder, urdida por una extraña mezcolanza de policías españoles, etarras, terroristas islámicos y servicios secretos extranjeros, cuando no dirigentes del propio partido socialista. «El objetivo de esta teoría de la conspiración no era otro que subvertir la posible legitimidad de la victoria del PSOE el 14M, aunque para ello tuviera que construir una frágil narrativa en la que las diferentes piezas se iban encajando de forma tortuosa».

En mayo de 2004 Javier Pradera escribía en el ya mencionado artículo de *El País* acerca de los acontecimientos que siguieron al 11M: «En vez de convocar el jueves por la mañana una reunión del pacto antiterrorista, ceder a los candidatos de los partidos democráticos —con Rajoy y Zapatero al frente— el protagonismo de la manifestación del viernes y proporcionar a la opinión pública una información objetiva sobre las investigaciones en curso, el presidente del Gobierno —resuelto a conseguir la mayoría absoluta para el PP a través de cualquier medio— despertó la desconfianza y la indignación de buen número de ciudadanos por su fraudulento empeño en seguir atribuyendo a ETA la autoría del atentado pese a que desde la noche del jueves era evidente la pista islamista».

Siendo la mentira casi consustancial a la comunicación humana, ha encontrado en las redes sociales una herramienta perfecta que permite modular la realidad a gusto de cada uno sin penalizaciones, auténtico sueño de los populistas. Antes de que se consolidara esta nueva realidad, los ciudadanos españoles penalizaron la mentira de Aznar sobre el 11M con la derrota de su sucesor, pero no por ello le retiraron sus seguidores el liderazgo moral del Partido Popular, que ejerce a través de su fundación FAES. A menudo sus palabras tienen poco que ver con la realidad, pero sus fieles las escuchan con la fe de los creyentes.

En 2010, con motivo de los veinte años de su elección como sucesor de Fraga en la presidencia del PP, reunió en Sevilla a su primera junta directiva y en pleno estallido del caso Gürtel recuperó un eslogan que había inventado dos décadas antes: «El PP es incompatible con la corrupción». Aznar lo había puesto en circulación en 1990, apenas un

año después de su llegada a la presidencia del PP, cuando unas escuchas judiciales por un caso de tráfico de drogas destaparon una red de financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana, el denominado caso Naseiro, que debía su nombre al tesorero del PP, Rosendo Naseiro. La habilidad procesal de Federico Trillo consiguió el sobreseimiento por parte del Supremo, que invalidó el valor probatorio de las escuchas, pero no pudo impedir que el público conociera de viva voz la desvergüenza de unos políticos que traficaban con licencias de obras a cambio de comisiones y proclamaban con descaro que habían desembarcado en la política para forrarse, entre ellos un joven y prometedor Eduardo Zaplana.

Rosendo Naseiro tuvo que dimitir tras una investigación interna dirigida por Alberto Ruiz-Gallardón, que no obstante lo exoneró de cualquier cargo, lo que permitió a Aznar crearse un aura de incorruptibilidad en vísperas de que el PSOE iniciase una travesía infernal con el caso Filesa. A las órdenes de Naseiro trabajaba un eficaz gerente llamado Luis Bárcenas, cuyos libros de cuentas se harían famosos en 2013, como he citado antes, al aflorar una caja B del partido que había escapado al control del Tribunal de Cuentas. Aznar ha conseguido, escudándose en una supuesta ignorancia de la gestión financiera de su partido, librarse de la retahíla de casos judiciales a los que ha debido enfrentarse el PP, que se ha traducido en numerosas condenas de prisión y una moción de censura que le costó la presidencia del Gobierno a su sucesor. La sentencia del Supremo confirmó la condena al PP como partícipe a título lucrativo y corroboró la falta de credibilidad de Rajoy en su declaración testifical.

Durante los veinte años transcurridos desde el 11M el PP solo ha gobernado seis y medio, cuatro de ellos con mayoría absoluta. La pérdida de la moción de censura en 2018 se convirtió para el PP en una derrota insoportable, que su nuevo y efímero líder Pablo Casado tradujo en un discurso tremendista que cada miércoles convertía a Sánchez en traidor y felón. Su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, que se presentó diciendo que no estaba allí para insultar a Sánchez, ha cambiado el guion para centrarse en la falta de credibilidad de su oponente, presentándolo como un mentiroso compulsivo, capaz de cualquier pacto espurio con los independentistas catalanes y los herederos de ETA para mantenerse en el poder. Aunque en el único debate en televisión entre ambos fuera el propio Feijóo el que pronunció una letanía de mentiras y medias verdades, según la técnica contrastada de su *sparring* ocasional Miguel Ángel Rodríguez.

Pasadas las elecciones de 2023 con un resultado que, en contra de lo que le auguraban las encuestas, no le ha permitido alcanzar la mayoría del Congreso, Feijóo introduce de refilón la eventual ilegitimidad de un perdedor como Sánchez, que busca ser investido al

precio que le exige el prófugo Carles Puigdemont. El líder gallego pretende sortear el principio constitucional de que es el Congreso de los Diputados el que elige al presidente del Gobierno por mayoría absoluta de sus miembros o más votos favorables que negativos. Este debate continuo sobre los procedimientos estresa un sistema al que no le sobra credibilidad.

La irrupción de nuevos partidos, lejos de facilitar el diálogo político, ha consolidado dos bloques cada vez más distantes e incapaces de alcanzar acuerdos incluso para afrontar una pandemia. El PP necesita los votos de Vox, con quien gobierna en seis comunidades autónomas y cientos de ayuntamientos, pero esta asociación le impide contar con el imprescindible apoyo del PNV para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Al PSOE tampoco le basta su coalición con Sumar, que ha absorbido a una pléyade de partidos de izquierda, y necesita el voto favorable de los 25 escaños nacionalistas (PNV, Bildu, ERC y Junts), que consecuentemente han elevado el precio.

El mercado electoral español cuenta con la singularidad de unos partidos nacionalistas sólidamente instalados en sus respectivos territorios y cuya representación parlamentaria ha oscilado entre 25 y 35 diputados, determinantes para formar mayorías parlamentarias. Más allá de la inasumible pretensión de Vox de eliminarlos del escenario por la vía de la ilegalización, cualquier mayoría de gobierno en el futuro cercano necesitará al menos de una parte de esos votos, que son inalcanzables para el PP mientras mantenga su alianza con Vox y que levantan ampollas en algunos sectores del PSOE. La prolongada aventura del *procés,* con la convocatoria unilateral de un referéndum de independencia de Cataluña en 2017, la suspensión de la autonomía mediante el artículo 155 de la Constitución (esta vez apoyado por los dos partidos mayoritarios), y el posterior calvario de juicios y condenas penales, ha ahondado esas dificultades al incorporar la amnistía a su cuaderno de exigencias.

Las urnas consolidaron el 23 de julio de 2023 este complejo mapa político, con la única salvedad de una relativa recuperación del bipartidismo, que logró un 64 por ciento de las papeletas sin llegar a anular la imagen de un país fracturado en dos, con un endiablado reparto de escaños que solo una teórica y hoy por hoy imposible gran coalición PP-PSOE podría gestionar sin sobresaltos. Se trata de un objetivo inviable tras una encarnizada legislatura de descalificación mutua y una campaña electoral en la que Feijóo ha hecho de la derogación del sanchismo su principal bandera. Para ello no ha dudado en apelar infructuosamente a los barones socialistas en busca de unos pocos tránsfugas que convirtieran la investidura de Feijóo en un «supertamayazo», siguiendo la trayectoria de los dos diputados socialistas que en 2003 impidieron con su incomparecencia que Rafael

Simancas encabezara un Gobierno PSOE-IU en la Comunidad de Madrid y propiciaron la hegemonía de la que goza el PP desde entonces en esa comunidad.

Pero más allá de las extraordinarias dificultades de gestión que plantea el escrutinio de las generales, el último ciclo electoral deja la preocupante normalización de un partido de extrema derecha en nuestra vida política. Vox está presente en seis gobiernos autonómicos, preside cuatro parlamentos regionales y es un aliado imprescindible para que el PP pueda llegar a la Moncloa.

Los referentes de Vox en Europa han sido Orban, Marine Le Pen, Meloni, Salvini, Kaczyński. Con esta especie de internacional autoritaria comparte su discurso antiinmigración, especialmente árabe o musulmana, cuya presencia creciente vincula a menudo con la teoría del gran reemplazo; los migrantes serían los responsables de nuestros altos niveles de paro, del estancamiento de nuestras rentas, de las deficiencias en los servicios públicos, particularmente en la sanidad, y de cualquier aumento de la criminalidad, aun a costa de contradecir toda evidencia estadística. Vox reivindica gobiernos fuertes que estén por encima de controles judiciales o mediáticos; practica el rechazo a la prensa independiente, a la que acusa sistemáticamente de sectarismo y de fabricar *fake news* en su contra; defiende un españolismo agresivo y desde una identidad ultracatólica rechaza el aborto, el matrimonio homosexual y la diversidad cultural, religiosa o étnica; niega el cambio climático y la violencia machista; desconfía del proyecto supranacional de la UE y se propone recuperar algunos poderes cedidos a Bruselas. Rechaza, en fin, el título octavo de la Constitución que consagra las autonomías y propone la vuelta a un Gobierno central unitario.

Vox mantiene estrechos contactos con sus referentes continentales, que en el último año han registrado en el centro y en el norte de Europa una auténtica pleamar con una victoria electoral en Holanda y Eslovaquia, un avance sustancial en Finlandia, que les ha llevado a un Gobierno de coalición, y en Suecia, donde han firmado un pacto de legislatura con los conservadores. Están al frente de tres gobiernos europeos (Italia, Hungría y Eslovaquia) y participan en dos más. Han perdido, o están a punto de hacerlo, la poderosa plataforma del Gobierno de Polonia, donde el partido ultra Ley y Justicia, que lidera Kacziński, ostentaba el poder desde 2015 y no ha podido renovar su mayoría absoluta. Una coalición liberal formará Gobierno aunque el partido que encabeza Donald Tusk perdiera las elecciones.

Lo ocurrido en Polonia desmonta la teoría de un ascenso permanente e imparable de la extrema derecha, que mientras se respeten las leyes electorales está sometida a las mismas fluctuaciones que los demás partidos. Asimismo, la pretensión de Sánchez de

conseguir en el Congreso una mayoría que le permita gobernar aun habiendo perdido las elecciones no es una extravagancia irrepetible. El partido liberal de Tusk es, por lo demás, el referente polaco del Partido Popular.

Vox no ha conseguido subirse a esa ola y ha caído de 52 a 33 escaños, pero mantiene una sólida base de tres millones de votos. Sus crecientes invocaciones a un catolicismo integrista podrían haber asustado a algunos de sus potenciales votantes, aunque esta proclama ultracatólica le permite estrechar lazos con partidos de ultraderecha en América Latina.

La coalición del Partido Popular con Vox ha robustecido el poder de la derecha en el mapa autonómico y municipal, donde supera ampliamente a los socialistas, pero al mismo tiempo ha puesto en evidencia la toxicidad de un aliado que espanta a todos los partidos nacionalistas y aleja a Feijóo de la Moncloa.

Sánchez necesita por su parte el apoyo de los 25 diputados nacionalistas. La amnistía con la que han tasado su voto los independentistas catalanes, que supondría exonerar de cualquier ilícito penal, entre otros, al prófugo Carles Puigdemont, jefe de filas de los siete diputados de Junts, ha originado un motín en las filas del PSOE, encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra. No se puede obviar que Sánchez abjuraba de la amnistía hasta las vísperas electorales, con términos tan rotundos como que no tiene cabida en la Constitución, lo que no deja de ser una cuenta más en su extenso rosario de «cambios de opinión». Un flanco débil que Feijóo ha explotado con intensidad apelando a una nueva convocatoria electoral para que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre la amnistía.

En su mejor ensoñación, el líder socialista ha logrado la investidura con el voto de todos los nacionalistas presentes en el Parlamento y parece más que probable que el Tribunal Constitucional valide la amnistía con la que debe pagar el voto de investidura, pero se antoja una temeridad depender de una alianza tan heterogénea para sacar adelante las leyes orgánicas o aprobar los presupuestos. Con el añadido de un Senado que controla el Partido Popular y que entorpecerá cuanto pueda la actividad legislativa del Congreso.

El político y escritor canadiense Michael Ignatieff entiende que, para que las democracias funcionen, «los políticos tienen que respetar la diferencia entre un enemigo y un adversario. Un adversario es alguien a quien quieres derrotar. Un enemigo es alguien a quien tienes que destruir. Estamos asistiendo al crecimiento de una política de enemigos».

Las mentiras fundacionales de Aznar en torno a la autoría del 11M han envenenado la coexistencia política en nuestro país hasta extremos a menudo insoportables. La extensa alianza mediática que

fabricó en los noventa para derrotar a la tercera a Felipe González le ha acompañado desde su salida de la Moncloa alimentando una sospecha permanente sobre la legitimidad del PSOE para gobernar España, por sus concesiones a los herederos de ETA y a los separatistas catalanes. Distanciado de Rajoy por su escasa combatividad, padrino de Pablo Casado en su fase más aguda, cuando semana tras semana arremetía contra Sánchez por felón y traidor, hasta que lo dejó caer tras su ruptura con Vox, en Feijóo parece haber encontrado un sucesor disciplinado, dispuesto a seguir sin rubor las consignas que le envía desde su tribuna de FAES.

Manuel Azaña escribió en su diario del 11 de junio de 1933, consumada su derrota ante una derecha que convivía con escándalos públicos como el del estraperlo: «Mi temor más fuerte no es que la República se hunda, sino que se envilezca». Superar el abismo que separa hoy a los dos bloques políticos, que con frecuencia se tratan con la saña destinada a los enemigos, es un objetivo tan necesario como notoriamente utópico a corto plazo. Más cuando reaparece Aznar en su rol soñado de Cid Campeador, con un discurso mesiánico en el que llama a la movilización general «porque existe un riesgo cierto existencial para la continuidad de España como nación». Lo que le lleva acto seguido a invocar contra Sánchez el grito que en su día sintetizó la sublevación popular contra ETA tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997: «¡Basta ya!».

Iniciada una nueva legislatura después de la ajustada investidura de Sánchez (179-171), el PP ha trasladado a calles y plazas su plataforma opositora bajo el lema de que el líder socialista ha impuesto un fraude masivo al electorado con la aprobación de una amnistía a la que se opuso en campaña. Díaz Ayuso va más lejos al constatar que Sánchez ha implantado una dictadura, lo que la aproxima a la tesis de Abascal de que su investidura ha consumado un golpe de Estado. El tremendismo verbal ha intoxicado la conversación pública hasta extremos tan irrespirables que parece cada día más necesario negociar un armisticio y al presidente le corresponde tomar la iniciativa con una voluntad que no ha exhibido en la última legislatura.

Fuentes y agradecimientos

Este libro es el resultado de un antiguo propósito que puse en marcha hace casi nueve años y que ve la luz a los veinte años de los atentados del 11M, justamente el periodo de prescripción que establece nuestro Código Penal.

Empecé con una primera conversación con Pedro Arriola, que había ejercido como asesor demoscópico de José María Aznar y a quien este asignó al equipo de Mariano Rajoy desde que lo nombró candidato del PP a la presidencia del Gobierno. A él se atribuyó la conjetura de que si el atentado del 11M era obra de ETA, ganaría el PP por mayoría absoluta, y si eran los islamistas, vencería el PSOE. Él no reconocía su copyright, aunque admitía haberla usado en algún comité.

Mi segundo interlocutor fue Alfredo Pérez-Rubalcaba, jefe de campaña de Rodríguez Zapatero cuando se produjo el atentado y portavoz del PSOE en el comité conjunto del pacto antiterrorista. Su mordacidad le convirtió por muchos años en bestia negra del PP hasta ser canonizado, poco antes de su prematuro fallecimiento, por su brillante metáfora de «gobierno Frankenstein» con la que describió a la coalición de Pedro Sánchez con Podemos.

Siguieron luego extensas entrevistas con Eduardo Zaplana, ministro portavoz de Aznar en su etapa final, principal agitador de la teoría de la conspiración en el Parlamento, donde dio pábulo a todas las patrañas de *El Mundo* durante cuatro años.

Jorge Dezcallar, director del CNI en los días del atentado, me relató su ambivalente relación con el presidente que lo había nombrado y por el que se sintió manipulado particularmente la víspera de las elecciones del 14 de marzo. José Bono, ministro de Defensa que repatrió de Irak a las tropas españolas, tenía la convicción de que si alguien no podía ignorar la autoría de los islamistas, era el titular de Interior y, por extensión, Aznar. El coronel Manuel Sánchez Cobrí, que por entonces era el responsable de la lucha contra ETA en la Guardia Civil, me transmitió que desde el mediodía del 11 de marzo sabían que no había sido ETA por las conversaciones que habían grabado mediante los micrófonos con los que tenían pinchados varios domicilios de dirigentes etarras. No conseguí que Arnaldo Otegi me dijera si el 11M tuvo información directa de ETA para asegurar en su rueda de prensa que nada tenía que ver con el atentado.

Cuando decidí retomar el libro hace un año mantuve otro ciclo de

entrevistas con José Luis Rodríguez Zapatero, cuya victoria electoral fue socavada por el PP durante toda una legislatura; Rodrigo Rato, vicepresidente primero del Gobierno y uno de los participantes en el comité de crisis que designó Aznar; Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, que recibió la encomienda de organizar en Ifema la morgue donde se identificó a las 191 víctimas de los trenes.

Lorenzo Milá, por entonces corresponsal de TVE en Washington, me detalló la singular peripecia de una entrevista realizada el día 12 a George W. Bush en la residencia del embajador español, Javier Rupérez, que los responsables de la televisión pública decidieron censurar.

Otros responsables políticos (Ana Palacio, ministra de Exteriores, y Alfredo Timermans, secretario de Estado de Comunicación) declinaron responder a mis preguntas.

Por el capítulo dedicado a registrar la amenaza islamista sobre nuestro país, cómo se formó la célula terrorista y cuándo se escogió la fecha del 11 de marzo, debo un total reconocimiento a Fernando Reinares, el académico que mejor conoce la complejidad de las redes yihadistas y que lo ha reflejado entre otros en su libro *¡Matadlos!*

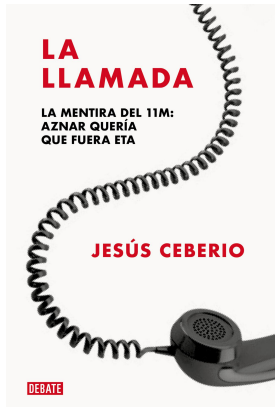
Otro libro, escrito por el comisario jefe de los Tédax, Juan Jesús Sánchez Manzano, bajo el título *Las bombas del 11M*, me ha permitido conocer con precisión detalles sobre los artefactos que fueron esenciales para descartar desde el propio día 11 el uso de Titadyn y, en consecuencia, la participación de ETA.

La base más consistente del libro procede en todo caso de una lectura minuciosa de las memorias de José María Aznar, cuyos dos tomos reflejan un narcisismo impermeable a la más leve autocrítica, lo que le permite afirmar que durante su segunda legislatura elevó a España a su más alta cima en la escena internacional con la foto de las Azores. Eso explica su absoluto rechazo a reconocer el más mínimo error en su actuación del 11M o en la guerra de Irak. Y más extensamente, en sus ocho años de gobierno.

En el capítulo de agradecimientos tengo una deuda especial con José María Izquierdo, que dedicó largas horas de un tórrido verano a corregir los primeros borradores, y a mi hija Mónica, que hizo una segunda lectura. A Álex Martínez-Roig, sin cuyo empeño no habría puesto manos a la obra. A Miguel Aguilar, que además de editar el libro me propuso el titular de *La llamada*, que acepté al instante. Por último, pido disculpas a los editores de Penguin Random House, Paloma Abad y Julio Fajardo, por las instrucciones contradictorias que supieron corregir.

Madrid, 30 de noviembre de 2023

Una conversación entre el director de un periódico y el presidente del Gobierno. Una crónica excepcional de cómo se vivieron en la redacción de *El País* los atentados del 11M.



Los atentados del 11 de marzo de 2004 sacudieron la sociedad española de manera brutal, tanto el hecho en sí como la gestión que hizo el Gobierno en vísperas de elecciones, intentando responsabilizar a ETA de lo sucedido aun cuando empezaron a aparecer indicios que apuntaban al terrorismo islámico. El momento paradigmático de esa voluntad fue la llamada del presidente Aznar a los medios de comunicación para asegurarles que había sido ETA. Jesús Ceberio, entonces director de *El País*, recibió esa llamada. En esta obra trepidante cuenta cómo fue esa mañana fatídica y cómo las informaciones cada vez distaban más de la versión oficial hasta quebrar la confianza entre la sociedad y sus dirigentes. Veinte años más tarde, aún no se ha superado.

Jesús Ceberio Galardi Wiener (Hondarribia, 1946) es un periodista español que desde 1976 ocupó diversos puestos en *El País*, diario que dirigió entre 1993 y 2006. En 2004 obtuvo el Premio Ischia Internacional de Periodismo.

«Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro».

EMILY DICKINSON

Gracias por tu lectura de este libro.

En **penguinlibros.club** encontrarás las mejores recomendaciones de lectura.

Únete a nuestra comunidad y viaja con nosotros.

penguinlibros.club

Penguin Random House Grupo Editorial

penguinlibros

Primera edición: marzo de 2024

© 2024, Jesús Ceberio
© 2024, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

Diseño de la cubierta: © Penguin Random House Grupo Editorial / Andreu barberan
Imagen de la cubierta: © Shutterstock

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del *copyright*.
El *copyright* estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento,
promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del *copyright* al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a
CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-19642-44-8

Compuesto en: La Nueva Edimac, S. L.

Facebook: PenguinEbooks
Facebook: debatelibros
X: @debatelibros
Instagram: @debatelibros
YouTube: penguinlibros
Spotify: PenguinLibros

Índice

La llamada

Primera parte

- El orgullo de las Azores
- Atocha, zona cero
- Todos señalan a ETA
- La llamada
- El invento del Titadyn
- «Si es ETA, ganamos»
- Una pica en la ONU
- La mochila de Vallecas
- La entrevista censurada a Bush
- ¿Quién ha sido?
- Pásalo
- Perdieron porque mintieron
- El PP se queda solo
- La amenaza islamista
- Los agujeros de la conspiración

Segunda parte

- La era de la posverdad
- Populismo y mentiras
- El bipartidismo salta por los aires
- Polarización extrema
- Fuentes y agradecimientos

- Sobre este libro
- Sobre Jesús Ceberio
- Créditos